



22000060152664  
Zona

TOP  
E Tribunal Oral 1

Fecha de emisión de la Cédula:27/octubre/2022

Sr/a:AFIP (QUERELLA), CARLOS SEBASTIAN BOGAO,  
TOMAS GOROSITO, NORMA ELIZABETH MARTINEZ  
MONASTERIO

Tipo de domicilio

Electrónico

Domicilio:20367270188

Carácter: Sin Asignación  
Observaciones Especiales: Sin Asignación

Copias: S

22000060152664

Tribunal:TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1 - sito en Comodoro Py 2002

Hago saber a Ud- que en el Expte Nro. 1584 / 2014 caratulado:  
Principal en Tribunal Oral TO02 - IMPUTADO: LIOTTI, MARCELO JULIAN Y OTRO s/EVASION AGRAVADA  
PREVISIONAL y EVASION SIMPLE PREVISIONAL DENUNCIANTE: AFIP - DIRECCION GENERAL DE LOS  
RECURSOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y OTRO  
en trámite ante este Tribunal, se ha dictado la siguiente resolución:

Según copia que se acompaña.  
Queda Ud. legalmente notificado  
Fdo.: FRANCISCO AGUSTIN LARRABURE, SECRETARIO



22000060152664





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Buenos Aires, 27 de octubre de 2022.

### **AUTOS y VISTOS:**

Para redactar los fundamentos de la sentencia recaída en el marco de la presente causa **CPE 1584/2014/TO2**, caratulada: **“LIOTTI, MARCELO JULIAN y RAMIREZ, LILIANA DELFINA S/ INF. LEY 24.769”** (interno 2974), del registro de este Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, seguida a:

**a) Marcelo Julián LIOTTI**, titular del DNI Nro. 17.254.564, de 58 años de edad, estado civil divorciado, nacionalidad argentina, sin apodos ni sobrenombres, nacido en Buenos Aires el 31/03/1964, con grado de instrucción secundario completo, de ocupación fabricante de zapatos, con un ingreso variable que no pudo precisar pero que dijo que no le alcanza para vivir dignamente, domiciliado en Avenida Rivadavia Nro. 3968 1° piso de CABA, sin personas a su cargo; y,

**b) Liliana Delfina RAMÍREZ**, titular del DNI Nro. 26.855.060, de 43 años de edad, estado civil divorciada, nacionalidad argentina, apodo “Lili”, nacida el 26/10/1978 en Lanús, Provincia de Buenos Aires, de grado de instrucción secundario completo y universitario incompleto, de ocupación comerciante con un ingreso de \$80.000/\$90.000 pesos mensuales, con domicilio en Avda. Rivadavia 3968, 1° piso de CABA, sin personas a su cargo.

### **I. RESULTA:**

#### **1) Las requisitorias de elevación a juicio.**

En oportunidad de contestar las vistas conferidas en los términos del artículo 346 del C.P.P.N., el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente en la etapa anterior requirió la elevación a juicio respecto de Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ, por considerar que se encontraban reunidos los elementos de prueba suficientes para estimar que los nombrados resultaban responsables del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones al sistema único de la seguridad social por los períodos 6/2013, 12/2013, 2/2014 a 11/2014 y 1/2015 a 3/2015 por montos superiores a los \$ 200.000 (art. 7 de la ley 24.769, modificada por ley 26.735) y del delito de evasión agravada del pago de los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad social correspondiente al período 12/2014 por un importe de \$ 474.724,10 (cfr.



#32859976#347198392#20221027213627864

art. 8, inc. "a", en función del art. 7 de la ley 24.769, modificada por la ley 26.735)<sup>1</sup>.

De igual forma se expidió la parte querellante (AFIP-DGI), indicando que los hechos imputados a Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ encuadraban en los artículos 7 y 8 de la ley 24.769<sup>2</sup>.

En lo sustancial, los acusadores indicaron que -de acuerdo a las probanzas colectadas durante la instrucción- se habría podido comprobar que los nombrados, en su carácter de responsables de la cadena de producción y venta de calzado que operaba bajo el nombre de fantasía "ASH" (*Argentinian Shoes*), habían evadido el pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de la seguridad social de los empleados en relación de dependencia que prestaban servicios laborales en los locales comerciales y las fábricas de esa empresa, toda vez que -en el desarrollo de la actividad comercial- le habrían exigido a sus empleados que se registren como monotributistas (esto es, que se adhieran al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes), a partir de lo cual se habría ocultado al fisco la verdadera relación de "empleado-empleador" que mantenían con esas personas.

## **2) La elevación a juicio.**

Una vez formuladas las referidas requisitorias y luego de notificar las conclusiones de aquellas en los términos del art. 349 del Código Procesal Penal de la Nación, el Juzgado instructor declaró clausurada la instrucción y dispuso la elevación a juicio de las actuaciones<sup>3</sup>, en relación a los nombrados y respecto a los hechos por que le fueron imputados en los respectivos requerimientos de elevación formulados por los acusadores.

## **3) La audiencia de debate.**

De conformidad con lo que surge de las actas respectivas (que se encuentran agregadas en el sistema de gestión judicial lex100), los días 06/05/2022, 13/05/2022, 26/05/2022, 03/06/2022, 10/06/2022, 24/06/2022, 30/06/2022, 08/07/2022, 14/07/2022, 04/08/2022, 11/08/2022, 18/08/2022, 25/08/2022, 01/09/2022, 08/09/2022, 15/09/2022, 23/09/2022, 29/09/2022

<sup>1</sup> Cfr. fs. 1915/1921

<sup>2</sup> Fs. 1895/1901.

<sup>3</sup> Mediante el respectivo auto fundado de fs. 1941/1945.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

y 13/10/2022, se desarrolló la audiencia de debate oral y público fijada en el marco de las presentes actuaciones.

### **4) La acusación de la parte querellante durante el debate.**

En su alegato, los letrados representantes de la parte querellante (A.F.I.P.-D.G.I.) refirieron que -a su criterio- en el marco del juicio realizado en la presente causa se había podido demostrar, con el grado de certeza necesario para el dictado de una sentencia condenatoria, que los imputados LIOTTI y RAMÍREZ resultaban responsables del delito de evasión previsional simple (art. 7 de la ley 24.769 -mod. por ley 26.735- y art. 5 del Régimen Penal Tributario previsto en la ley 27.430), por haberse comprobado que omitieron declarar los empleados en relación de dependencia que prestaban servicios para la empresa que operaba bajo el nombre de fantasía “ASH”.

Concretamente, sostuvieron que la maniobra imputada consistió en contratar empleados para que presten servicios en distintos locales comerciales y fabriles, imponiéndoles a los trabajadores como condición y requisito excluyente que los mismos se inscriban como monotributistas. De esta manera, según indicaron, Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ omitieron declarar a los empleados ante el organismo fiscal, abstrayéndose del pago de los impuestos ya mencionados.

Recordaron que la presente causa tuvo inicio mediante la solicitud de una medida de urgencia efectuada por el Dr. Santiago Mozetic, perteneciente a esa Administración Federal (presentación que dio lugar a que se practicaran allanamientos en simultaneo en 20 de los locales comerciales y en 3 fábricas pertenecientes a la cadena de zapaterías ASH calzados); lo cual, según indicaron, resultaba ser una prueba valiosa que había sido realizada durante la instrucción y debidamente incorporada al debate oral.

Asimismo, recordaron los actos de defensas de los imputados. En cuanto a Liliana Delfina RAMÍREZ, refirieron que había optado por no declarar en el marco de este debate oral, y que -por ello- se incorporó por lectura la declaración indagatoria prestada en el marco de la instrucción junto con un descargo escrito suscripto por la imputada (en el que se defendió sosteniendo que la determinación de la deuda se realizó sobre base



#32859976#347198392#20221027213627864

presunta; al tiempo que manifestó que no se encontraba a cargo de la contabilidad de la ASH calzados y reconoció que se encontraba a cargo del área de diseño y marketing de la empresa).

En el caso de LIOTTI, refirieron que hizo uso de su derecho de defensa y declaró en el marco del debate, y que además ya contábamos con la declaración indagatoria materializada durante la instrucción (que también fue incorporada por lectura junto con un descargo escrito suscripto por el imputado). Sobre ello, refirieron que -durante su última declaración, es decir aquella materializada durante el debate- *“no alegó haber mentido o haber faltado a la verdad en su descargo efectuado durante la instrucción”*, por lo que, según indicaron, *“tanto su descargo efectuado durante la instrucción como su declaración en el debate, se mantienen... ‘vigentes’”*.

Concretamente, recordaron que durante la instrucción el imputado LIOTTI planteó, como defensa común a RAMÍREZ, que la determinación de deuda fue realizada sobre base presunta. Asimismo, que manifestó que entre él y los monotributistas no existía una relación de dependencia, sino que había una relación comercial.

Sin embargo, indicaron que, durante su declaración indagatoria materializada durante el debate oral, el Sr. LIOTTI -de manera tácita- reconoció la existencia de las relaciones laborales entre él y los monotributistas, e indicaron que *“... en lugar de tener la humildad y reconocer que su actuar fue indebido, intentó justificarse manifestando que utilizó la figura del monotributo en la convicción de que estaba actuando correctamente, y además, manifestó que como consecuencia de los allanamientos tomó conocimiento de que se le estaba dando un uso indebido al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, y por ende rectificó su conducta”*.

Por ello, analizando las distintas declaraciones de LIOTTI, consideraron que *“no resulta complicado ni rebuscado, advertir las claras contradicciones que existen en las defensas propuestas por el imputado”*.

No obstante ello, manifestaron que -del debate- había quedado debidamente acreditado que: 1) la relación que existía entre LIOTTI y RAMÍREZ por un lado, y los monotributistas por el otro, era una





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

relación de dependencia; 2) que tanto LIOTTI como RAMÍREZ actuaron a sabiendas de que el uso que le estaban dando a la figura del monotributo no era el deseado; y, 3) que el ajuste efectuado por la AFIP para determinar la deuda de autos se efectuó sobre base cierta.

Sostuvieron que, del presente debate, se pudo acreditar con absoluta certeza que los trabajadores que desempeñaron tareas en los locales comerciales y fabriles de ASH calzados, durante los períodos 06/2013, 12/2013 y 02/2014 a 03/2015 *“... lejos de ser trabajadores independientes, eran en rigor de verdad empleados de los imputados”*.

Al respecto, indicaron que de todos los testimonios de los trabajadores que se habían escuchado en el juicio, ninguno de ellos desconoció la relación laboral existente entre ellos y los imputados; sino que, por el contrario, la confirmaron y nos brindaron valiosos detalles, a partir de los cuales se puede terminar de entender cómo era la operatoria diaria de esta cadena de zapaterías.

En ese sentido, recordaron que -a los testigos- se les efectuaron preguntas de diversa índole: desde cómo ingresaron a trabajar en la zapatería, si cuando ingresaron les informaron cómo iban a estar inscriptos, sobre sus licencias, asistencias y horarios, acerca del sueldo, de las tareas que desarrollaban, obligaciones, y demás cuestiones que -según indicó la querella- permitieron confirmar la hipótesis criminal de esa parte.

Por su parte, con respecto al ajuste, los letrados de la querella refirieron que *“... tuvimos el privilegio de escuchar a los inspectores que intervinieron en el mismo, quienes nos han explicado cómo hicieron el ajuste y evacuaron las dudas que podrían haber quedado pendientes de la instrucción”*.

Así, los representantes de la querella indicaron que -en el caso- debían analizarse dos cuestiones: por un lado, la relación de dependencia existente entre imputados y los monotributistas; y, por el otro, el ajuste realizado por esa Administración Federal de Ingresos Públicos.

Sobre ello, dijeron que -por una cuestión de lógica- debía comenzarse analizando la relación de dependencia entre los monotributistas y los imputados (ya que, si no se logra demostrar la relación de



#32859976#347198392#20221027213627864

dependencia entre los unos y los otros, carecería de total sentido analizar el ajuste efectuado).

Para analizar la relación de dependencia, explicó cuáles eran las diferencias entre el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y una relación laboral. Al respecto, indicaron que *“El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o monotributo fue creado para aquellas personas que ejercen alguna actividad de manera independiente y que tienen una capacidad contributiva menor. El objetivo del Régimen, justamente es que estas personas paguen IVA, Ganancias, Aportes Jubilatorios y Obra Social de una manera simplificada. En cambio, existe una relación laboral cuando un servicio es prestado bajo un vínculo de dependencia. Este vínculo de dependencia, se traduce en: subordinación jurídica, esto es la facultad del empleador de dirigir, dar órdenes e instrucciones y como contrapartida, la obligación del empleado de someterse a esas directivas. El vínculo de dependencia también se traduce en subordinación técnica. Esto consiste en la facultad del empleador de fijar el modo y método de trabajo. Y, por último, el vínculo de dependencia también se traduce en una subordinación económica. Esto se da cuando el trabajador queda excluido de los riesgos de la empresa, siendo su única obligación aportar su trabajo personal a cambio de una remuneración”*.

Entonces, teniendo en cuenta esa diferenciación, sostuvieron que *“... la relación que existió entre Liotti y Ramirez para con los trabajadores, lejos de ser estos últimos independientes, se encontraban ante un vínculo de dependencia, ante una verdadera relación laboral”*.

En ese sentido, el letrado de la querella refirió que *“... cuando hago mención del Sr. Liotti y la Sra. Ramírez de manera conjunta, lo hago por el convencimiento de que ambos revisten la calidad de coautores. Y es que rigor de verdad, lo son, ya que la prueba producida así lo señala. Ambos fueron señalados repetidamente como los dueños de la cadena de zapaterías de ASH. Recordemos, que un altísimo porcentaje, por no decir todos, de los monotributistas que se encontraban en los locales comerciales, señalaron que los dueños de la cadena de zapaterías eran Marcelo Julián Liotti y Liliana Delfina Ramírez. Incluso, uno de los*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*monotributistas, Agustín Maszong, quien declaró en el presente debate y reconoció ser amigo de Marcelo Liotti y de Liliana Delfina Ramírez, a preguntas de las partes el testigo señaló: Responder a Liotti y a Ramírez, que eran ellos, por Liotti y Ramírez, quienes daban las pautas, que eran ellos, por Liotti y Ramírez, quienes les enviaban los zapatos para vender”.*

Así, para determinar la calidad de la relación existente entre los imputados y los monotributistas, recordaron los letrados de la querella que se había escuchado a lo largo del debate a un número más que significativo de empleados, quienes -según indicaron- habían explicado la forma en la que trabajaban en la cadena de zapaterías de ASH calzados.

Refirieron que una de las primeras cuestiones que se les preguntó a los empleados, fue cómo habían ingresado a trabajar en la cadena de zapaterías ASH, si mantuvieron alguna entrevista laboral, y en su caso con quién. También, que se les preguntó si en las entrevistas, y si se les había informado cómo iban a estar inscriptos. Respecto a ello recordaron que, mientras que algunos de los testigos manifestaron haber ingresado a la zapatería por intermedio de algún conocido que ya se encontraba trabajando en el lugar, otros mencionaron que dejaron su CV en alguno de los locales comerciales y que con posterioridad a ello recibieron un llamado telefónico para coordinar el comienzo del período de prueba y, por último, otros empleados manifestaron haber aplicado a una búsqueda laboral en la plataforma boomerang.

Indicaron que, más allá de la modalidad por la que ingresaron a la zapatería, todos los empleados fueron contestes en señalar que durante sus entrevistas o durante sus primeros días de trabajo, se les hizo saber que para trabajar en ASH era requisito excluyente estar inscripto como monotributista.

A modo de ejemplo, citaron el caso del testigo Diego Javier Orellano (empleado de la zapatería y quien se desempeñó como vendedor en el local de Lavalle N°1502), quien dijo que ser monotributista era de la única manera que tomaban empleados y aclaró que “ellos” (haciendo referencia a Marcelo LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ), no contrataban gente siendo ellos los empleadores. Asimismo, recordaron que el testigo Jorge Jonathan Cardozo (también vendedor de la zapatería y que trabajó en



#32859976#347198392#20221027213627864

el local de la Av. Santa Fe 3507), señaló que: *“Al principio estuvo en período de prueba sin ningún tipo de relación y después como monotributista, y agrego que quienes le pidieron que se inscriba como monotributista fueron Liliana Ramírez y Marcelo Liotti”*.

En mismo sentido, manifestaron que se expidió el testigo Diego Córdoba Reggi (vendedor en el local de la calle Rivadavia 3982), quien manifestó que al momento de ingresar a la cadena de zapaterías le informaron que no iba a estar en blanco sino que lo iban a asociar, y continuó explicando que le dieron un papel con el paso por paso de lo que tenía que hacer para darse de alta e inscribirse como monotributista. Sobre ello, los letrados de la querella indicaron que *“Esto que manifestó el testigo respecto del paso a paso para darse de alta como monotributista resulta totalmente coherente con la documentación que hemos visto repetidamente durante el debate. A modo de ejemplo, un papel similar al señalado por el testigo, fue secuestrado en el local de Malabia 1667 en el marco de los allanamientos del 19/03/2015, en el que se detalla el paso a paso de cómo se inscribían en el monotributo”*.

Entonces, mencionaron que -de estos testimonios citados (Córdoba Reggi, Cardozo y Orellano)- *“surge claramente que era una política empresarial por parte de los imputados contratar trabajadores, con la excluyente condición de inscribirlos como monotributistas, al solo efecto de evadir el pago de aportes y contribuciones patronales, burlando así el Sistema de Seguridad Social”*.

Asimismo, indicaron que -sobre lo dicho por Córdoba Reggi en cuanto a que *“lo iban a asociar”*- valía la pena hacer alguna consideración extra. Sobre ello, se indicó que *“Si bien el mismo manifestó que al momento de ingresar a la cadena de zapaterías le comunicaron que de alguna manera lo iban a asociar a la empresa y que iban a poner un local a su cargo, lo cierto es que más allá de esta simple manifestación, durante su testimonio el Sr. Córdoba Reggi manifestó haber sido empleado y sumado a ello no se produjo ningún elemento de prueba que permita sostener seriamente que el mismo fuera un asociado. En todos los casos que se presentaron a prestar declaración testimonial se pudo acreditar que los monotributistas reunían todas las características de un empleado en*





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*relación de dependencia. Entonces, más allá del rótulo que se le quiera poner, en los hechos y en el día a día, los monotributistas eran empleados dependientes”.*

Recordaron que *“Otra de las cuestiones que se les preguntó insistentemente a los empleados, con motivo de ratificar la relación de dependencia, fue respecto de sus tareas en los locales comerciales, si debían cumplir horarios y demás aspectos que hacían al funcionamiento diario de las zapaterías”.* Sobre ello, indicaron que *“Los testigos, en términos generales, señalaron que su horario laboral era entre las 8 y las 20 hs y que tanto la asistencia como la puntualidad eran controladas por Marcelo Liotti y Liliana Ramírez a través de un sistema en red en el cual debían registrarse. Por ejemplo, el testigo Cardozo, quien ya fuera citado, señaló que debía cumplir con el horario de ingreso a las 9, que debía ingresar y registrarse, y que pasado el intervalo de 15 minutos se empezaba a descontar el dinero que podías cobrar. Por su parte, el testigo Córdoba Reggi señaló que: ‘Cuando llegaba se registraban en el sistema y que cuando llegaba tarde, pasando los 15 minutos, le tenía que dar una plata a su compañero, y si estaba solo se le descontaba esa plata’”.* Asimismo, en cuanto a los dichos de Cardozo y de Córdoba Reggi respecto de las sanciones que se les imponía por llegar tarde, se indicó que esas manifestaciones resultan *“totalmente coherentes con la documentación que fuera secuestrada en el marco del allanamiento del local de la calle La Pampa, en el que se especifican horarios y otras cuestiones”.*

Así las cosas, indicaron que *“claro está, que el cumplir horarios de entrada y de salida, sumado a la imposición de sanciones ante el incumplimiento de los horarios, demuestra que efectivamente se trataba de una severa relación de dependencia”.*

Además, indicaron que -otro punto a considerar para acreditar esa relación de empleado/empleador, y por el cual también se les preguntó a los testigos- es el goce de licencias. Recordaron que, respecto a ello, *“el testigo Cardozo señaló que: si tenía que tomarse vacaciones, las pagaban como si fuera un día de trabajo y se tomaban las licencias según el cronograma de vacaciones que les daban”;* y señalaron que *“De nuevo, los dichos del testigo resultan coherentes con la documentación secuestrada en*



#32859976#347198392#20221027213627864

*el marco de los allanamientos. Recodemos los papeles adjuntos a fs. 1322 a 1328 del cuerpo principal en donde se puede visualizar un registro de las licencias de los distintos empleados. Así, mencionaron que “no podemos desconocer que los regímenes de licencias ordinarias son propios de una relación laboral dependiente”.*

Asimismo, refirieron que otro punto interesante es cómo se manejaba la reposición de mercadería en los locales comerciales (lo que permitía, según sostuvieron, unir los locales comerciales con las fábricas, y daba la pauta de que todo funcionaba como una única unidad de negocio al mando de los imputados). Respecto a ello, indicaron que *“se pudo probar que además de cargar la asistencia en el sistema en red ya mencionado, los empleados cargaban las ventas realizadas y de ese modo, los imputados Liotti y Ramírez tenían el control respecto de que zapatos se habían vendido y consecuentemente sabían que mercadería debían reponer. Sin lugar a dudas, el testigo que más claridad aportó al respecto fue el testigo Damián Falconier, quien se desempeñaba como repartidor dentro de la empresa ASH. El mismo señaló que tenían un sistema el cual era consultado diariamente para que, en base a la información que arrojará el mismo, pudiera armar los pedidos para los distintos locales”.*

Entonces, sostuvieron que se había podido acreditar que la reposición de mercaderías generalmente se efectuaba por la tarde/noche y que, conforme también se había acreditado, además de entregar los zapatos y mercaderías se les dejaba a los empleados documentación.

Esta documentación, indicaron, comprendía talonarios de facturación de los empleados, talonarios de facturación de Marcelo Julián LOITTI y supuestos recibos de contratos de locación entre los monotributistas y alguno de los responsables de ASH calzados.

Como respaldo de ello, recordaron que *“el testigo Cardozo, dijo que: Los talonarios no los encargaba él y que desconocía quien los habría encargo. Y agregó: ‘Me lo enviaban junto con la entrega de la mercadería. Facturas propias, facturas de nuestros compañeros, facturas de ellos’. Por su parte el testigo Herrera, vendedor en el local sito en Av. Corriente 1701, señaló que: Los talonarios se los entregaban, que él no los encargaba, que había una carpeta en el local y cuando llegaban los*





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*zapatos, le daban los papeles y él los guardaba. Por último señaló que los talonarios los recibía junto con la mercadería”.*

*Así, advirtieron que “todos los testimonios señalados además de ser coherentes entre sí, resultan coherentes con la documentación secuestrada”. En ese sentido, refirieron que “vale recordar que en el local de la calle Olazabal se secuestró un papel en donde en el punto nro. 2 se le hacía saber a los empleados que todos los días por la noche se entregaba mercadería, y el punto 3 sobre la limpieza y orden del local. Esta forma de trabajo, en donde se le informa a los empleados que deben dejar el local limpio y se les hace saber que por las noches recibirán mercadería, y como hemos visto junto con esa mercadería además se les enviaban talonarios de facturación que no habían sido encargados por los monotributistas, todo esto deja a las claras una relación de subordinación entre los monotributistas y los imputados”.*

*Asimismo, indicaron que los zapatos comercializados en los distintos locales comerciales, eran elaborados en los talleres ubicados en los domicilios de Gual, Lafuente y Portela, que -según indicaron- también pertenecían a los imputados Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ.*

*Por otra parte, recordaron que “Otro punto por el cual que se preguntó insistentemente, fue respecto del pago de sueldos. Respecto de ello, los empleados fueron contestes en señalar que dentro del sistema de red al cual tenían acceso, que ya fuera mencionado respecto de las asistencias y mercaderías, también era utilizado para cargar diariamente un retiro de dinero en concepto de sueldo. Por ejemplo, el testigo Marrero señaló que: ‘Cobraba en efectivo al final del día’ y aclaró que ellos mismos sacaban el dinero de lo que habían vendido y retiraban el cobro. Por su parte, el testigo Córdoba Reggi señaló que: Cobraba diariamente y que el sueldo lo tenía que sacar de la caja. Y puntualizó: ‘Había un sistema en el que nosotros entrábamos y en gastos ponía mi nombre con el monto de mi sueldo en el día, eso cuando cerraba la caja’. Por último, el testigo Herrera señaló que: Cobraba en efectivo directamente desde la caja y que en los últimos meses, en los que trabajó con Marcelo Liotti y Liliana Delfina Ramírez, cobró con recibo de sueldo. Particularmente, el*



#32859976#347198392#20221027213627864

*testigo Herrera aportó algo interesante durante su declaración y fue que sin perjuicio de que en los últimos meses recibió recibido de sueldo, su actividad laboral continuó de la misma manera que antes. Es decir, la relación fue la misma, independientemente de cómo haya estado registrado”.*

En consecuencia, los representantes de la querella indicaron que *“Claramente, el percibir una remuneración a cambio de poner a disposición de Marcelo Liotti y Liliana Delfina Ramírez el tiempo y servicio de cada uno de ellos, resulta una prueba irrefutable de que se trataba de empleados en relación de dependencia. Ya lo he mencionado, es una de las características típicas de la relación de dependencia, la subordinación económica”.*

En cuanto al pedido o encargo de los talonarios de facturación y al pago de monotributo, indicaron que *“... los testigos señalaron que ellos no encargaban sus propios talonarios. Además, los monotributistas tampoco efectuaban el pago mensual del monotributo, ya que el mismo estaba a cargo del Sr. Marcelo Liotti y Liliana Delfina Ramírez”;* pero particularmente respecto de este punto, y sin restarle importancia a los dichos de los testigos, sostuvieron que *“estos extremos también han quedado acreditados de la compulsa de la documentación existente en la causa”.* Así, refirieron que *“Si observamos los talonarios de facturación secuestrados en el marco del allanamiento del 19/03/2015, de todos los monotributistas, todos ellos presentan el mismo diseño y son, en términos generales, iguales. Además, en un 90% de los casos, los talonarios son elaborados por dos imprentas. La imprenta Enriquez y la imprenta Carbajal”;* lo que, a su entender, *“demuestra que el encargo de talonarios estuvo centralizado por los responsables de ASH calzados, quienes además se encargaban de hacerles llegar a cada empleado su talonario de facturación, esto también ya lo vimos cuando hablamos del reparto de mercadería”.*

Además, en cuanto al pago del monotributo, indicaron que *“... se pudo corroborar que los mismos se hacían por lotes, al mismo tiempo y en la misma entidad bancaria. Ello fue expresado por el testigo*





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*Diego Prando inspector de la AFIP quien tuvo a su cargo la determinación de deuda.*

En consecuencia, consideraron que *“El hecho de que los supuestos monotributistas no encarguen sus propios talonarios ni paguen su cuota mensual de monotributo, demuestra a las claras que la figura del monotributo fue una mera pantalla con el único objetivo de evadir los impuestos previsionales”.*

Asimismo, refirieron que otro *“punto fundamental que se les preguntó a los testigos, y que viene a reforzar tanto la relación de dependencia, como el conocimiento cierto y probado del Sr. Liotti y de la Sra. Ramírez, respecto del uso indebido del monotributo, fue si los monotributistas recibían instrucciones o alguna directiva por parte de los imputados respecto a cómo debían actuar ante la presencia o visita de distintos Organismos estatales, entre ellos AFIP”.* Sobre ello, indicaron que es un punto fundamental, porque *“deja a las claras la verdadera ingeniería delictiva desplegada por Marcelo Liotti y Liliana Delfina Ramírez, con el objetivo de dificultar la investigación y fiscalización”.*

Respecto a ello, indicaron que *“En primer lugar, de la documentación secuestrada durante los allanamientos surgen distintos papeles que le indicaban a los empleados qué hacer ante una eventual inspección de AFIP o de algún Organismo afín, en el que se señalaba: ‘nunca firmar nada... no recibir cartas...’.*

Todo esto, según sostuvieron, resulta *“por demás contundente... y viene a contradecir y poner en crisis la defensa propuesta por el Sr. Liotti en cuanto a su desconocimiento de que el uso que se le estaba dando al monotributo no era el deseado”.* En concreto, valoraron que, si uno en verdad considera que está actuando conforme a la ley, *“¿por qué impedir a mis empleados que declaren con veracidad ante una visita de la AFIP?”.*

Así, indicaron que *-si observamos los relevamientos de personal efectuados por la AFIP el día del allanamiento y los realizados por la AFIP en el año 2014- se podía advertir que la mayoría de los empleados se negaron a firmar las planillas, cumpliendo así con las directivas impartidas por los imputados (citaron los casos de Córdoba Reggi y*



#32859976#347198392#20221027213627864

Cardozo); lo que -indicaron- *“... no solo deja a la vista una subordinación de los empleados frente a Marcelo Liotti y Liliana Ramírez, sino que además... demuestra una verdadera maquinación por parte de los imputados para evadir, para dificultar la fiscalización, y en última instancia, para evadir la justicia”*.

Además, indicaron que no puede dejarse de señalar que *“hemos visto una enorme cantidad de contratos de locación que simulaban el alquiler de una parcela a los monotributistas. Estos contratos simulados ¿qué propósito tenían? Claramente los mismos buscaban aparentar una independencia por parte de los monotributista que en la realidad no existía”*. Recordaron que estos contratos de locación *“eran suscritos por el Sr. Liotti o la Sra. Ramírez en calidad de locadores, mostrándose así como los dueños de la cadena de zapaterías”*.

Por ello, se insistió en que *“no puede tener acogida favorable la defensa propuesta por Liotti en cuanto al desconocimiento del correcto uso del monotributo”*; pues había quedado, según sostuvieron, *“... que conocía los alcances del Régimen y por ello intentó evadirlos, simulando la independencia de los monotributistas”*.

Por último, se recordó que -para demostrar que los monotributistas no eran tales sino que eran empleados en relación de dependencia- se les preguntó a los testigos respecto de cómo habían terminado la relación laboral entre ellos y los imputados, y que *“Respecto de ello, algunos señalaron que el fin de la relación laboral fue comunicada verbalmente por Jessica Ramírez o Darío Meinet, recordemos que Jessica Ramírez es la hermana de Liliana Delfina Ramírez y Darío Meinet es la pareja de esta, y que estos les entregaban el contacto de un abogado para que arreglen la liquidación final. Es el caso, por ejemplo, del testigo Cardozo, quien señaló que luego de los allanamientos del 19/03/2015 se asesoró y solicitó que lo registraran correctamente y que finalmente con fecha 9/4/2015, la hermana de Liliana Ramírez y Darío Meinet le informaron que tenía que abandonar el local. Otros, señalaron que directamente Marcelo Liotti les pagó un dinero en concepto de liquidación final. Este el caso del testigo Herrera. El testigo Almada nos dijo que:*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*Recibió plata de Marcelo Liotti en concepto del tiempo que trabajó y que firmó un documento que dejaba constancia de que recibió ese dinero”.*

Entonces, por todo lo hasta aquí expuesto, sostuvieron los letrados de la querella que a partir de la *“la contundencia y coherencia de la prueba podemos tener certeza del tipo de relación que existía entre los monotributistas de los locales comerciales y Liotti y Ramírez”*; a lo que agregaron que *“... Resultaría incoherente y hasta sería una burla a la inteligencia, sostener la independencia de los monotributistas”*.

Por otra parte, remarcaron que la relación de dependencia laboral se había comprobado respecto de los trabajadores que atendían los locales comerciales, como también de quienes se desempeñaban en los talleres fabriles de la empresa.

Además, indicaron que *“... no corresponde desvincular a la Sra. Ramírez de los talleres fabriles”*; para lo que consideraron que *“Es cierto que los testigos vinculados a los talleres lo señalaron a Marcelo Liotti como el principal responsable, pero la Sra. Liliana Ramírez también tenía vínculo con los talleres fabriles. Y acá vuelvo a declaración indagatoria en tanto que la misma manifestó que se encontraba a cargo del área de diseño, y yo me pregunto, el diseño está vinculado con la venta o con la fabricación del calzado? Claramente está relacionado con la fabricación”*.

Así las cosas, los representantes de la querella manifestaron que había *“quedado desvirtuado por completo, con la prueba señalada y valorada, el argumento defensorista por el cual aseguraban que los empleados que se encontraban sin registrar, no eran más que asociados y, por ende, no se hallaban bajo su órbita de dependencia”*; motivo por el cual correspondía ahora inmiscuirse *“en otras de las cuestiones que la defensa intentó atacar, según indicó, sin éxito”* (en referencia a la determinación de la deuda).

Así, sostuvieron que -a su entender- quedó demostrado que el ajuste efectuado se realizó sobre base cierta, cumplimentando los parámetros de legalidad y logicidad. En ese sentido, señalaron que los agentes intervinientes en esa tarea *“dejaron conceptos y CUILES sin ajustar, lo que empapa de razonabilidad su labor”*.



#32859976#347198392#20221027213627864

Sobre ello, se refirió que *“Para poder arribar a una conclusión lógica y acertada en materia de ajuste, resulta preciso partir de ciertos elementos de convicción que son claves para el caso, estos son: 1) las testimoniales de los agentes Diego Prando y Leonardo Onetto; 2) los informes finales de determinación de deuda que se encuentran agregados al expediente e incorporados por lectura al debate; 3) el dictamen nro. 48/2017 de la Sección de Impugnaciones de Grandes Empleadores que luce a fs. 1748, también incorporado al debate por lectura ; y, 4) el informe pericial presentado con fecha 14/04/2021 e incorporado por lectura”*.

Se indicó que la referida prueba viene a responder y clarificar las siguientes preguntas: ¿por qué se ajustó?, ¿cómo se ajustó? y ¿qué se ajustó?.

En cuanto al interrogante de por qué se ajustó, recordaron que *“el supervisor Leonardo Oneto nos explicó que previo a la intervención de él en el caso, de los antecedentes administrativos, ya existentes, surgían un total de 170 monotributistas que, en principio, se habrían desempeñado bajo relación de dependencia para la cadena de zapaterías ASH calzados”*. Indicaron que esta hipótesis inicial del organismo recaudador, de 170 monotributistas por ajustar, según explicó Oneto, se debió a que los domicilios fiscales denunciados por los monotributistas coincidían con los domicilios de los locales comerciales o con los domicilios de las fábricas, cuya explotación pertenece a los enjuiciados.

Asimismo, recordaron que de esos 170 monotributistas que conformaban la hipótesis inicial, el supervisor Oneto nos refirió que: *“se efectuó un análisis de cada caso, de cada persona”*, y que *“Para determinar si correspondía ajustar, era determinante verificar si existió una efectiva prestación de servicios”*, y dijo que: *“Si yo no tengo una efectiva prestación de servicios no podía decir que esa persona estuvo en relación de dependencia”*, aclarando que *“De quienes no pudimos acreditar la efectiva prestación de servicios esos caso no integraron la determinación”*. Ello, según valoró el letrado de la querella, resulta *“totalmente lógico”*, advirtiendo que *“efectivamente, después cuando*





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*vinieron los monotributistas a declarar en el debate, ninguno desconoció la relación laboral, lo cual habla de la prolijidad con la que se ajustó”.*

Luego de recordar las explicaciones de Oneto, la querella sostuvo que se había detectado, por un lado, la efectiva prestación de servicios, y por el otro, la indudable relación de dependencia de monotributistas en la cadena de zapaterías ASH calzados; todo lo cual resulta coincidente con las testimoniales que había reproducido y valorado a lo largo de su exposición.

Asimismo, en cuanto a cómo se llevó a cabo ese ajuste, sostuvieron que debían analizarse dos cuestiones: la primera era determinar la base remuneratoria sobre la cual se deben calcular los aportes y contribuciones evadidos y que, la segunda, tiene que ver con determinar el lapso temporal por el cual ajustar.

Sobre ello, se recordó que se tomó como base remuneratoria, en primer término, lo que manifestaron los trabajadores en los relevamientos de personal y lo que se manifestó en las declaraciones testimoniales y, en segundo orden, para el caso de que los monotributistas no hayan manifestado sueldo alguno, tomaron los sueldos establecidos en los convenios colectivos de trabajo (sobre esto último, dijo que vale la pena destacar que el convenio colectivo de Trabajo prevé el sueldo mínimo que un empleado debe percibir por determinada actividad).

Al respecto, recordó que, durante la instrucción, la defensa había argumentado insistentemente en que para efectuar el ajuste se debió haber tomado lo facturado por los monotributistas; sin embargo, consideró la querella que *“Este razonamiento defensorista debemos descartarlo, porque tal como quedó demostrado, dentro de la dinámica de trabajo de las zapaterías, los monotributistas estaban instruidos a facturar de sus propios talonarios hasta un tope de dos ventas por día aproximadamente”*, además de que *“lo facturado por los monotributistas no refleja un sueldo, sino que lo que refleja son ventas”*.

En cuanto al lapso temporal que se ajustó, se sostuvo que de la prueba habían surgido distintas situaciones. En primer lugar, se señaló que los períodos de deuda fueron determinados en base a la manifestación de la fecha de ingreso que manifestaron los empleados (ya sea en la



#32859976#347198392#20221027213627864

testimonial o en los relevamientos) y que, en los casos en que no manifestaron o no fueron relevadas, se consideró desde el alta al monotributo (para lo cual se aclaró que *“la mayoría de las altas se dio con la baja del Sr. Liotti como empleador. La mayoría tiene fecha de inicio en 01/2010”*).

En definitiva, consideraron que esa forma de realizar el ajuste *“resulta totalmente acertado, ya que como hemos visto, para trabajar en ASH calzados, era requisito indispensable estar inscripto como monotributistas, por lo que, desde la inscripción al régimen, y siempre que la actividad denunciada coincida con la actividad de venta o fabricación de calzado de cuero, tenemos la certeza que desde esa fecha los empleados estaban prestando servicios”*.

Respecto a qué se ajustó (qué conceptos se ajustaron), la querella recordó los dichos de Diego Prando, quien relató que se ajustaron los períodos fiscales de 01/2010 a 03/2015, por los conceptos de aportes y contribuciones a la Seguridad Social, y remarcó que *“dentro del Sistema único a la Seguridad Social están Obra Social y ART sobre los cuales no hemos hecho ningún tipo de ajuste. Ello porque el cobro y fiscalización está delegado a las Obras Sociales y a la ART”*. A partir de ello, la querella advirtió que *“hay conceptos que fueron evadidos y quedaron sin ajustar. Sin lugar a dudas de haberse ajustado la totalidad de conceptos, los montos hubieran sido aún mayores, y si bien la defensa puede decir que mis afirmaciones son meras conjeturas, esto es una cuestión de aritmética, es realmente una consideración objetiva”*.

También consideró la querella que los pagos efectuados por los monotributos no corresponde considerarlos como un atenuante del ajuste (citó los dichos de Prando y Oneto en este sentido).

Así, los representantes de la querella consideraron que *“... como hemos visto... ya en etapa administrativa el fisco pudo identificar concretamente cada uno de los CUILES correspondientes a los trabajadores que brindaron servicios, el período fiscal de la relación laboral, y el monto de los aportes y contribuciones omitidas en ese lapso temporal. Y es más, más allá de cualquier especulación que pretenda la defensa hacer, lo cierto es que no se pudo desechar, ni descartar, ni a uno*





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*de los trabajadores ajustados, y en ese sentido vale la pena señalar que todos los testigos fueron contestes en afirmar que efectivamente prestaron servicios para la cadena de zapaterías en el período fiscal ajustado, desvirtuando de este modo cualquier intento de tachar al ajuste de presunto”.*

Por último, en lo que hace al ajuste, la querella refirió que cabía destacar que aquel ajuste fue impugnado por el imputado Marcelo LIOTTI en sede administrativa, y la instancia administrativa resolvió confirmar el mismo conforme surge del dictamen jurídico N°48/2017 emitido por la Sección Impugnaciones de Grandes Empleadores y la resolución administrativa de fecha 28/07/2017, la que se encuentra agregada a las actuaciones principales a fs. 1811 (todo lo cual se encuentra ofrecido como prueba y se incorporó por lectura).

En definitiva, y de acuerdo a las demás valoraciones efectuadas en su alegato (que obran plasmadas en la respectiva acta de debate, y a las que se remite por cuestiones de brevedad pero que deben considerarse como parte integrante de la presente), la querella entendió que existía mérito suficiente para tener como demostrada la coautoría de los imputados (cfr. art. 45 del CP), en orden a la comisión del ilícito de evasión del pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de la seguridad social.

En ese sentido, además de mencionar la relevancia del bien jurídico tutelado por la norma, recordaron cuáles son los elementos típicos necesarios para tener por configurado el delito imputado; y, a partir de ello, sostuvieron que las circunstancias comprobadas en el caso permitían tener por debidamente acreditada la presencia de todos esos requisitos típicos (tanto el aspecto objetivo como también subjetivo).

Por ello, indicaron que solicitarían la condena de los imputados y, para estimar la cuantía de la sanción penal, explicaron que *“En cuanto a los atenuantes y agravantes respectivos... esta parte... no encuentra atenuantes posibles y esto es así ya que los imputados mostraron su desinterés total en modificar su conducta ya que el discurrir de la audiencia solo hizo que se corrobore que ambos imputados continuaron teniendo como empleados a monotributistas pese ya conocer la existencia*



#32859976#347198392#20221027213627864

*de la causa. Pese haber tenido innumerables formas de saldar su deuda con el fisco, optó por no hacerlo, continuando al día de hoy, adeudando lo evadido. Por otro lado, también queda claro, que esta conducta delictiva fue llevada a cabo por un largo período de tiempo lo cual evidencia una constante en el accionar de los imputados... sin importarle ni tomar en cuenta, el efecto dañoso de la misma. A ello hay que agregar el agravante del tipo penal establecido en el inc. a del art. 8 de la ley 27469 cuyo monto evadido supera el monto de 400.000 pesos” (lo que expresó que “debería ser tenido en cuenta como agravante del accionar evidenciado”).*

Así las cosas, de acuerdo a todos los argumentos esbozados, la calificación asignada, el grado de participación y sus agravantes, la querella solicitó

a) que se condene a Marcelo Julián LIOTTI “por considerarlo coautor del delito de evasión de los recursos de la Seguridad Social por los períodos fiscales mensuales junio 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, a la pena de 3 AÑOS y 6 MESES de prisión efectiva, accesorias legales y costas del juicio, arts. 45 del Código Penal y 7 y 8 inc. a) de la ley 24769 y sus modificatorias; y

b) que se condene a Liliana Delfina RAMIREZ, “por considerarla coautora del delito de evasión de los recursos de la Seguridad Social por los períodos fiscales mensuales junio 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, a la pena de 3 AÑOS y 6 MESES de prisión efectiva, accesorias legales y costas del juicio, arts. 45 del Código Penal y 7 y 8 inc. a) de la ley 24769 y sus modificatorias”.

Por último, se efectuó reserva de recurrir en casación y del caso federal.

Como se dijo, en orden a los demás fundamentos esgrimidos por la parte querellante sobre los cuales sustentó las conclusiones anteriormente reseñadas, se remite al acta de debate y a las respectivas grabaciones, por razones de brevedad y a fin de evitar reiteraciones innecesarias.





5) La postura del Ministerio Público Fiscal durante el debate.

En su alegato, y de modo concordante con lo entendido por los letrados de la parte querellante, los representantes del Ministerio Público Fiscal señalaron que había quedado plenamente acreditada la hipótesis criminal de las actuaciones; esto es, se había podido comprobar la evasión del pago de aportes y contribuciones correspondientes al Sistema de la Seguridad Social, mediante la omisión de declarar empleados en relación de dependencia que prestaban servicios laborales en los locales comerciales y las fábricas que operaban bajo la denominación ASH (Argentinian Shoes) como nombre de fantasía, dedicados a la producción y venta de calzado femenino (explotados por Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ).

Señalaron que la mecánica consistía en que LIOTTI y RAMIREZ, como responsables de la cadena de zapaterías ASH, requerían como requisito excluyente a los trabajadores a su cargo que se registraran en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes -frecuentemente denominado como monotributo- a fin de ocultar y enmascarar la verdadera condición “empleado-empleador” que mantenían.

En ese marco, sostuvieron que la maniobra imputada fue constatada en los períodos individualizados por la siguiente imagen exhibida:

| AÑO  | MES        | DEUDA (APORTES Y CONTRIBUCIONES) |
|------|------------|----------------------------------|
| 2013 | junio      | \$ 207.126,98                    |
|      | diciembre  | \$ 277.132,96                    |
| 2014 | febrero    | \$ 210.760,70                    |
|      | marzo      | \$ 217.366,12                    |
|      | abril      | \$ 241.503,12                    |
|      | mayo       | \$ 233.552,85                    |
|      | junio      | \$ 388.677,51                    |
|      | julio      | \$ 263.094,23                    |
|      | agosto     | \$ 275.057,56                    |
|      | septiembre | \$ 295.504,25                    |
|      | octubre    | \$ 318.290,68                    |
|      | noviembre  | \$ 324.745,92                    |
|      | diciembre  | \$ 474.724,10                    |
| 2015 | enero      | \$ 323.901,22                    |
|      | febrero    | \$ 323.511,46                    |
|      | marzo      | \$ 325.304,17                    |

Así, se indicó que, para afirmar la premisa inicial, esa parte analizó la prueba incorporada al expediente como así también aquella

reproducida en este debate. En concreto, se indicó que la maniobra perpetrada se encuentra probada, entre otros, por los siguientes elementos de prueba:

1) La medida urgencia requerida por la Sección Penal dependiente de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Se expuso esta resulta ser la génesis de la investigación judicial y es a partir de la cual se pone en conocimiento de la autoridad judicial que en virtud de las inspecciones realizadas por la División Fiscalización Monotributo B, se detectaron numerosos contribuyentes monotributistas realizando su actividad en forma simultánea en los locales comerciales de la cadena.

Se señaló que allí se daba cuenta -a partir de la documentación obtenida- de que a) que los monotributistas no tendrían independencia económica; b) que realizaron la compra de mercaderías a otros contribuyentes también monotributistas; c) que realizaron la impresión de sus talonarios de facturas en las mismas imprentas y, por lo tanto y d) se presumiría la existencia de relaciones de dependencia encubiertas.

Sostuvieron que luego de las tareas de investigación que comprendieron verificaciones sistémicas, visitas de domicilios vinculados a la empresa y circularizaciones, pudo concluirse que, en base a la cantidad de locales de la cadena de zapatos, el importante número de contribuyentes monotributistas involucrados, el alquiler de parcelas de locales y el antecedente de la relación laboral previa en algunos casos, se vislumbraba unidad económica y empresarial y se presumen maniobras a los fines de evitar una mayor tributación impositiva, fundamentalmente de tenor previsional.

Se recordó que, en virtud de todas las irregularidades detectadas, se informó en la citada presentación que, el día 31/10/2014 se realizó en forma simultánea un relevamiento de personal en los veintitrés domicilios vinculados a la cadena de zapatos Argentinian Shoes (ASH). Del análisis realizado surgió que, de las 68 personas totales detectadas en







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

actitud laboral, 30 manifestaron responder a las órdenes de Marcelo Julián LIOTTI, 13 a las órdenes de Liliana RAMÍREZ, 5 a otros contribuyentes monotributistas, y 14 no brindaron información al respecto. En conclusión, por el resultado alcanzado en las tareas operativas, textualmente se indicó en la titulada “medida de urgencia” que: *“se ha podido establecer prima facie, que los contribuyentes Liotti Marcelo Julián y Ramírez Liliana serían los responsables principales del funcionamiento de la empresa ARGENTINIAN SHOES (ASH). Que dentro del personal, gran porcentaje ha manifestado responder a las órdenes de trabajo de la Sra. Liliana Delfina Ramírez”*.

En segundo lugar, los representantes de la Fiscalía recordaron la declaración testimonial brindada en instrucción y en el debate oral por Laura Mariela FRIAS, inspectora de la División Fiscalización Microcentro de la AFIP/DGI, quien sostuvo que existían monotributistas comercializando un mismo producto, todos utilizaban el mismo formato de facturas, y concluyó que cada monotributista no resultaba independiente en el proceso de toma de decisiones, sino que todo era de manera uniforme y que de modo claro se evidenciaba que no tenían autonomía, dependían de LIOTTI y RAMÍREZ y no tenían gran capacidad contributiva.

En tercer lugar, se recordaron las actuaciones remitidas por la Prefectura Naval Argentina vinculadas a los allanamientos llevados a cabo el día 19 de marzo de 2015, en donde -según indicaron- pudo observarse las descripciones de los procedimientos realizados en los locales comerciales y las fábricas allanadas, siempre en presencia de los testigos hábiles, los relevamientos realizados a los trabajadores presentes, la documentación útil secuestrada y las fotografías que denotan los procedimientos efectuados. A esas pruebas, se indicó, deben agregarse los testimonios prestados en esta sede por los testigos hábiles y los funcionarios que efectuaron dichos procedimientos.

En cuarto lugar, se refirió a la determinación de deuda ordenada por el juez instructor, con varios tramos analizados.

El representante del Ministerio Público Fiscal detalló la totalidad de la prueba recabada en autos, y sostuvo que -de allí- tenía por



#32859976#347198392#20221027213627864

probado que LIOTTI era quien abonaba la obligación mensual establecida por el régimen simplificado, que existía subordinación técnica, económica y jurídica de los trabajadores respecto de los imputados.

En ese sentido, recordó que varios “monotributistas” celebraron acuerdos espontáneos por ante el SECCLO dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social con LIOTTI o RAMÍREZ. Dijo que, principalmente, manifestaron que trabajaban en relación de dependencia con Marcelo LIOTTI, que cumplían horarios de trabajo, que las herramientas de trabajo las entregaba LIOTTI, que cobraban una remuneración por su trabajo, que los monotributistas expresaron en este debate que el requisito para acceder al trabajo era estar inscriptos en el monotributo y que el pago de la cuota lo hacía Marcelo LIOTTI.

Asimismo, refirió que el perfil económico de las personas relevadas era el de meros trabajadores, que no tenían una independencia económica para hacer la actividad en forma independiente.

Además, refirió que se realizó la correspondiente determinación de deuda. Recordó que para ello se analizaron los relevamientos de personal realizados, se citó a muchos de estos monotributistas a declaración testimonial (aunque no todos concurrieron), también se analizaron los distintos sistemas del organismo, para chequear la relación anterior de estas personas con LIOTTI y se valoró que después de 2015, LIOTTI constituyó la sociedad ASH CALZADOS en la que se incorporó a muchas de estas personas como empleados. Indicó que para determinar la deuda se trató de constatar lo que se había denunciado y que se dieran las condiciones típicas de una relación de dependencia (subordinación económica, técnica y jurídica).

Asimismo, indicó que esa determinación fue en cabeza de LIOTTI, que se tuvo a disposición toda la documentación, que encontraron mucha documentación importante (como facturas de monotributistas en diferentes domicilios pero que tenían el domicilio fiscal en otro, talonarios en blanco, formularios que eran iguales, facturas mellizas -misma numeración pero distintos montos-, telegramas de renuncia al trabajo, talonarios de idénticas impresas, y pautas de trabajo por escrito, también





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

un documento que establecía “no hacer nada” en caso de presentarse personal de la AFIP y que en caso contrario podían quedar fuera o perder el trabajo).

Además, mencionó que de la documentación secuestrada se observaron escritos que informaban cuáles eran los días para hacer los inventarios, cómo era la tarea para reponer la mercadería en vidriera, cómo hacer la limpieza, cuál era el horario de ingreso, consecuencias de llegar tarde, vacaciones y finalmente si tenían dudas que debían llamar a “Marcelo” o “Liliana”.

En cuanto a los conceptos que se ajustaron, refirió que se ajustó desde enero 2010 a marzo 2015 aportes y contribuciones a la Seguridad Social, y que, existen otros conceptos (como puede ser obra social y ART), sobre los cuales no hicieron ningún ajuste, porque se encuentra delegado.

En cuanto a los pagos del monotributo, refirió que en los allanamientos se encontraron pagos en lote de una cantidad de monotributistas, y por el sistema de la AFIP corroboraron que los pagos se hacían por lote en un mismo banco, el mismo día y horario, sumado a lo manifestado por las personas relevadas (que ellos indicaban que el pago lo hacía LIOTTI). Valoró que ese pago al monotributo no se tuvo en cuenta para hacer el ajuste ya que ello no corresponde.

Finalmente, expresó que el ajuste fue revisado, porque la determinación de deuda fue impugnada por LIOTTI, y la revisó la División Técnico Jurídica, Sección de Impugnaciones, a cargo de Natalia Terragno. Así, señaló que consta en autos la Resolución N°183/17 de fecha 28/07/2017 junto con el Dictamen Jurídico N°48/17 por los cuales -luego de brindar numerosos fundamentos- se resolvió no hacer lugar a la impugnación interpuesta por el contribuyente LIOTTI y se confirmó la deuda e intereses intimados en su totalidad.

Asimismo, indicó que se cuenta en autos con la declaración testimonial de Santiago Mozetic brindada en este debate, quien en el año 2014 era el jefe de la Sección Penal del área de Seguridad Social de la AFIP. En este juicio denominó al presente expediente como “un caso



#32859976#347198392#20221027213627864

testigo y relevante para la Administración”. Expresó que pudo determinarse que LIOTTI y RAMÍREZ llevaban adelante la explotación de los locales comerciales de zapatos y los talleres. Asimismo, recordó que de los relevamientos de personal se concluyó que los monotributistas revestían en verdad la calidad de empleados en relación de dependencia de LIOTTI y RAMÍREZ.

Además, mencionó que se recibió declaración testimonial en este debate a Jonathan Novello quien refirió que estaba a cargo de la Sección Penal de AFIP y que en los allanamientos se encontraron talonarios de facturas, contratos, papeles pegados en las paredes con diversas indicaciones a los monotributistas.

También, que prestó declaración testimonial de Leonardo Maximiliano Oneto, supervisor a cargo del equipo de fiscalización en el área de seguridad social de AFIP, quien textualmente refirió “este fue un caso paradigmático”. Asimismo, que el testigo refirió que al ser relevados los monotributistas, estos manifestaron que una de las condiciones de trabajo que imponía LIOTTI, era la anotación en el régimen de monotributo e incluso recordó que en algún domicilio había “instructivos” sobre esto. También, manifestó que en las bases de AFIP se chequearon los momentos y los lugares de pago de las cuotas del monotributo, y determinaron que eran “por lote”, es decir en el mismo banco, el mismo día a la misma hora. Por otro lado, refirió que muchos de los monotributistas fueron empleados hasta diciembre del año 2009, e incluso algunos luego del allanamiento volvieron a ser exteriorizados como empleados cuando LIOTTI y RAMÍREZ constituyeron ASH Calzados S.A. Respecto de la determinación de deuda expresó que hicieron un análisis respecto de cada persona. El primer presupuesto a corroborar fue si hubo una efectiva prestación de servicios, porque si no, no se podía afirmar que había una relación de dependencia. No solo eso, sino que esa prestación de servicios tenía que ser en relación de dependencia. Eso también lo chequearon. De los que no pudieron acreditarlo, quedaron fuera del ajuste y no integraron la determinación. Que hicieron la determinación de deuda en base a los aportes y contribuciones de la Seguridad Social. Expresó que existe otro componente que es obra social que quedó fuera de la determinación (porque si bien la AFIP tiene potestad para chequearlo, esto fue delegado





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

en las obras sociales). Además, expresó que la base remuneratoria se hizo sobre lo que dijeron los monotributistas en sus declaraciones testimoniales y también en base a los convenios colectivos de trabajo. Posteriormente, refirió que no correspondía tener en cuenta los pagos del monotributo para efectuar el ajuste y literalmente dijo: “porque es otra cosa, es otra especie. Eso es tratar de compensar importes de distinta naturaleza. No corresponde esa compensación, esos pagos son de distinta especie”. Finalmente expresó que la determinación de deuda que ellos efectuaron, fue revisada por otra instancia administrativa.

Además, se recordó que obra en autos la pericia realizada como medida de instrucción suplementaria, y que los peritos Marcelo Eduardo Domínguez (perito contador oficial del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal) y Néstor Alejandro García (perito contador de parte por la querella AFIP), dieron respuesta a los 15 puntos periciales contables encomendados por este Tribunal.

Dijo que esa parte quiere resaltar el punto 9 de esa pericia (que respondía al siguiente interrogante: “*Teniendo en cuenta las personas que prestan servicio en las condiciones detalladas por AFIP y considerando el tipo de trabajo que desarrollaba cada empleado, así como los convenios colectivos que rigen cada actividad (Sindicato de Empleados de Comercio y Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina) se requiere realizar el cálculo del salario y, sobre ellas, contribuciones y aportes mensuales correspondientes al sistema único de la seguridad social de los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015*”), al que los peritos contestaron que: “*Teniendo en cuenta las personas que prestan servicio en las condiciones detalladas por AFIP, así como los convenios colectivos que rigen cada actividad (Sindicato de Empleados de Comercio y Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina), los peritos actuantes no tenemos objeciones que formular al cálculo de los aportes y contribuciones de la AFIP por los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, los cuales ascienden a la suma total de \$ 4.700.253,83 por esos períodos*”.



Asimismo, se indicó que obran en autos los legajos de inscripción de los cuales surge que todas las personas que atendían los locales de venta se encontraban incluidas en la categoría "H" de monotributo y que varios de ellos se registraron ante el fisco en una fecha temporalmente cercana y fijaron un mismo domicilio fiscal y/o comercial en donde -justamente- funcionaba un local comercial de la marca "ASH". Dichos legajos obran a 68/375 de los autos principales, y los anexos I y II formados a fs. 57.

A su vez, que se cuenta con la totalidad de la documentación reservada en secretaría que pudo ser analizada y revisada por las partes en este debate. En particular, esa parte destacó las más de veinte cajas de documentación secuestrada en los allanamientos realizados en los locales comerciales y fábricas de la empresa de calzados y todos aquellos informes y actuaciones producidas por AFIP como antecedentes administrativos para arribar a la determinación de deuda reclamada.

Por último, citó la prueba que consideró “más trascendental”, dada por las declaraciones testimoniales que los monotributistas brindaron en este debate. En ese sentido, dijo que -a esta altura- los monotributistas ya se deben ser correctamente denominados como “empleados” pues expusieron en sus declaraciones testimoniales determinadas cuestiones que evidencian la enmascarada relación laboral y la indiscutible dependencia y subordinación que en realidad existía entre ellos con LIOTTI y RAMÍREZ.

Al respecto, señaló que oímos en estas audiencias numerosos testimonios de empleados de locales comerciales y fábricas que describieron el procedimiento por el cual llegaban a vincularse con la cadena de zapaterías a través de *curriculum vitae*, publicaciones en páginas de internet como “bumerang” o a través de algún contacto particular, que también mencionaron la orden directa que impartían LIOTTI y RAMÍREZ de inscribirse en el régimen de monotributo de modo excluyente para conseguir el empleo, como así además que éstos eran quienes realizaban los pagos mensuales de las cuotas correspondientes.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Asimismo, señaló que los testigos refirieron que utilizaban facturas a sus nombres pero que no eran generadas por ellos, sino que eran entregadas junto con la mercadería por los titulares de la empresa.

También destacó que los empleados hicieron hincapié en las indicaciones que daban LIOTTI y RAMÍREZ respecto a cómo debían proceder y actuar ante la presencia de personal de organismos públicos en los locales comerciales o fábricas.

En definitiva, señaló que -a partir de las declaraciones testimoniales prestadas en el juicio por los trabajadores de ASH- se habían podido comprobar los siguientes “pilares básicos” de la maniobra constatada: 1) La calidad de “jefes” de LIOTTI y RAMÍREZ; 2) La inscripción en monotributo como cuestión excluyente para obtener el empleo y su correspondiente pago mensual; 3) La impresión de facturas a nombre de los empleados; 4) La suscripción de contratos de locación; 5) La rotación de empleados por distintos locales comerciales; 6) el pago por los servicios; 7) Las órdenes y pautas de trabajo impartidas por LIOTTI y RAMÍREZ; 8) La conclusión de la relación laboral y 9) La creación de una sociedad a nombre de empleados (los cuales desarrollarían más adelante).

Así, al igual que lo indicado por los letrados de la querella, a partir los representantes de la Fiscalía consideraron que -de los elementos de prueba previamente enunciados- puede afirmarse que se encuentran presentes los aspectos objetivos y subjetivos de los tipos penales dentro de los cuales se subsumen los hechos objeto de análisis en el presente juicio.

En cuanto al encuadre jurídico, se indicó que la conducta atribuida a Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ encuadra en lo prescripto por los artículos 7° de la ley 24.769, modificada por ley 26.735 (vigente al momento de los hechos) y actual artículo 5° de la ley 27.430; esto es, la evasión del pago de aportes y contribuciones correspondientes al sistema de la seguridad social. Ello, por los períodos junio de 2013; diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015.

En este sentido, refirió que -sobre el encuadre jurídico- cabía una aclaración; referida a que si bien en el requerimiento de elevación a juicio fiscal el hecho correspondiente al mes de diciembre de 2014, fue



#32859976#347198392#20221027213627864

tipificado en el artículo 8 inciso a) de la ley 24.769 (esto es, evasión agravada por el monto), lo cierto es que al día de la fecha rige la ley n° 27.430 (publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017), la cual aprobó en su artículo 279 un nuevo Régimen Penal Tributario, por la que se aumentaron los montos a partir de los cuales resultan punibles los delitos tributarios.

En razón de ello, manifestó que esa parte en la actualidad se encuentra en condiciones de aplicar retroactivamente dicha ley al presente caso al considerarla más benigna y, para ello, corresponde estar a las consideraciones del fallo de la CSJN “VIDAL Matías Fernando Cristóbal y otros s/ Infracción Ley 24.769” (rto. el 28 de octubre de 2021) y a la instrucción de la Procuración General de la Nación 87/21, por la cual se resolvió dejar sin efecto la instrucción general dictada por la Resolución PGN 18/18, del 21 de febrero de 2018 a partir de la cual el Ministerio Público Fiscal debía mantener la posición que sostenía que una mera actualización de montos no podía representar como resultado la aplicación de una ley penal más benigna.

En ese sentido, a su vez, se destacó que, al rechazar la suspensión de juicio a prueba con fecha 19/3/2020, este Tribunal expresamente dispuso: *“HACER LUGAR -PARCIALMENTE- A LA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE LA LEY N°27.430 COMO LEY PENAL MÁS BENIGNA, únicamente en lo relativo al período fiscal de diciembre de 2014 y, en consecuencia, encuadrar legalmente a ese suceso que conforma el objeto procesal del expediente como presuntamente constitutivo del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, previsto en el art. 5° de la citada ley 27.430 (art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional)”*.

Despejada esa cuestión, el representante de la Fiscalía sostuvo que esa parte sostiene que Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ deben responder en calidad de coautores de la maniobra pergeñada.







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Recordó cuál es el bien jurídico que la norma protege al penar este tipo de conductas; como así también mencionó que los elementos que integran el tipo penal básicamente son los siguientes: 1) la condición de obligado, 2) la utilización de ardid o engaño y 3) la evasión total o parcial del pago de aportes y contribuciones al fisco nacional.

En cuanto a la condición de "obligado", refirió que la figura de evasión previsional es un delito de autor especial que solo puede ser cometido por el sujeto de la específica relación previsional, en el caso de la firma ASH (la cual no se encontraba constituida legalmente al momento de los hechos, sino que actuaba como nombre de fantasía).

Los obligados al pago, según indicó, son los imputados LIOTTI y RAMÍREZ. En ese sentido, refirió que la calidad especial requerida por el tipo legal surge de un adecuado estudio de las normas relativas a la Seguridad Social. Recordó que la ley 24.241 a través de sus artículos 2, 10, 11 y 12 de ese texto legal establece las obligaciones de los empleadores de descontar de las remuneraciones que pagan a los trabajadores en relación de dependencia los aportes a la Seguridad Social y depositar las contribuciones a su cargo en el Sistema único de Seguridad Social; resultando, por tanto, autores de este delito los empleadores independientemente de su inscripción o registración formal.

En ese sentido, indicó que a la luz de las pruebas recabas en este juicio, se colige con evidencia que LIOTTI y RAMIREZ reúnen en los hechos las características necesarias para ser considerados empleadores y, como tales, responsables de las obligaciones previsionales nacidas de la explotación de la cadena de zapatos que llevaban adelante.

Es que, según dijo, ahora tenemos la certeza absoluta de que las personas que cumplían funciones en el proceso productivo y de comercialización del calzado de la marca "ASH" recibían directivas tanto de Marcelo LIOTTI como de Liliana RAMIREZ sobre cuestiones esenciales del desarrollo de la actividad laboral.

En definitiva, entendió que los numerosos testimonios recibidos en este debate sumado a la totalidad de las pruebas recibidas valoradas en forma conjunta e integrada dan cuenta de la existencia de una



#32859976#347198392#20221027213627864

única explotación comercial, dedicada a la fabricación y comercialización de calzado bajo el nombre de fantasía "ASH", cuyos responsables resultan ser Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMIREZ pues de modo evidente tenían el manejo del negocio de fabricación y venta de calzado.

En efecto, consideró que se encuentra irrefutablemente acreditado que los nombrados eran quienes organizaban toda la estructura industrial y comercial de la marca "ASH"; se encontraban a cargo de la administración, contrataron al personal y adoptaron de forma conjunta la decisión de ocultar la relación laboral ante el fisco.

Asimismo, mencionó que si bien la deuda determinada por el organismo recaudador fue imputada en cabeza de LIOTTI y que a preguntas de esa parte el testigo Oneto refirió que no fue notificada a RAMÍREZ, lo cierto es que no quedan dudas hoy en día de su calidad de empleadora.

En efecto, indicó que -más allá de la determinación de deuda en cabeza de LIOTTI-, las cuantiosas pruebas demuestran que RAMIREZ resulta coautora de la maniobra, toda vez que: 1) en los registros domiciliarios llevados a cabo en las actuaciones se secuestraron anotaciones que dan cuenta que la nombrada era indicada como uno de los contactos de la administración "ASH" y se solicitaba que se envíen informes sobre el armado de las vidrieras al mail ["/ d r ramirez@hotmail.com](mailto:/ d r ramirez@hotmail.com); 2) se verificaron compras de materia prima realizadas por RAMÍREZ; 3) Solo por enunciar uno, en el local comercial sito en Cuenca 2921 el controlador fiscal se encontraba a su nombre; 4) Firmó -o bien, su nombre aparecía impreso- como inquilina autorizada (locadora) de numerosos contratos de locación por “el alquiler de parcela de los locales comerciales”; 5) La extensa cantidad de testigos que se presentaron en este juicio oral, manifestaron responder a las órdenes de Liliana RAMÍREZ, algunos de ellos refirieron que en algunas oportunidades retiraba la recaudación o bien que se la entregaban a ella; 6) el día 30 de abril de 2015 (días después de los allanamientos realizados en el marco de la presente), Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMIREZ, constituyeron la sociedad "ASH CALZADOS S.A.", siendo ellos los únicos accionistas y autoridades (presidente y directora suplente,





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

respectivamente) y dicha sociedad contrató como empleados a parte de los monotributistas; 7) Se hallaron numerosos registros ante el SECCLO, de conciliaciones obligatorias en las que RAMÍREZ y ASH CALZADOS S.A. representaron a la cadena de zapaterías.

Por ello, interpretó la Fiscalía que, si bien la intervención de RAMÍREZ de modo más frecuente puede verse en los locales, ello no la exime de responsabilidad en cuanto a su calidad de responsable de los empleados que prestaban funciones en las fábricas puesto que, según indicó, se trataba de una unidad de explotación en la cual los coautores se dividían las funciones, existía un solo componente económico y empresarial, una única estructura fabril y comercial con la utilización de mano de obra inscripta en régimen simplificado con el objetivo de evadir aportes y contribuciones y de esa forma, enmascarar el verdadero vínculo de dependencia laboral.

Además, tuvo por probado el ardid o engaño requerido por la figura penal. Sostuvo que se trata del despliegue de maniobras con la capacidad de modificar el objeto de la obligación previsional con lo cual se expone una situación aparente distinta a la correspondiente.

Recordó que la doctrina sostiene que *“la conducta engañosa, podrá relacionarse con el aspecto material, el personal, el espacial o el temporal de la prestación laboral, o con el aspecto subjetivo o cuantitativo de la obligación previsional, en tanto y en cuanto resulten ser, por sus características, acciones tendientes a la modificación (disminución o eliminación) aparente de la obligación previsional de un sujeto determinado”* y prosigue: *“tanto la registración como autónomos a quienes se encuentran en realidad en una relación de dependencia; como la omisión de declarar a personal bajo relación de dependencia, son la exteriorización de una falsedad de distintos aspectos de la obligación relacionada con la seguridad social”* (Catania Alejandro, Estudio sobre la ley 24.769, Editores del Puerto, 2005, pág. 167).

En consecuencia, indicó que -definitivamente- el ejemplo traído a estudio por la doctrina se identifica en plenitud al caso objeto de debate. Ello, toda vez que las maniobras desplegadas por LIOTTI y



RAMÍREZ, según consideró, consistieron en crear una pantalla a través de la invención de la figura de “asociados” para quienes en realidad eran sus empleados. Ello, con el fin de evadir el pago de los aportes y contribuciones destinadas a la seguridad social.

Prueba de ello, lo constituyen no solo las declaraciones testimoniales de los empleados sino también las órdenes impartidas y que quedaron registradas luego del secuestro de documentación de cada uno de los allanamientos: "Nunca firmar nada"; "No recibir correspondencia que no sea para sí mismo", “no responder por otros asociados, responder solo por sí mismos”; “no mostrar facturas de otros socios a la AFIP, al Ministerio de Trabajo ni a la Municipalidad. Solo mostrar facturas propias, en caso de no tener facturas, contestar "están en la imprenta", "en caso de firmar cualquier papel pueden quedar fuera de la sociedad".

Dichas pruebas, según indicó, demuestran el claro ardid definido por Soler como “*el astuto despliegue de medios engañosos*” en el que se requiere “*el despliegue intencional de alguna actividad cuyo efecto sea el de hacer aparecer a los ojos de cierto sujeto, una situación falsa como verdadera y determinante*” (SOLER, Sebastián tratado de derecho penal T. IV pág. 272 y ss.).

Consideró que, definitivamente, la maniobra pergeñada por LIOTTI y RAMÍREZ consistió en crear la figura de “asociados” a los fines de aliviar la carga provisional que por ley les correspondía honrar como contribuyentes y solo pudo correrse el velo de esa situación a partir de la intervención del organismo recaudador.

En cuanto al verbo típico de la figura, recordó que se trata de evadir. Indicó que la evasión se encuentra prevista como un delito de varios actos, pues se compone de dos conductas: una activa y otra meramente omisiva. El primero de los actos, está compuesto por acciones tendientes a modificar alguno de los aspectos de la obligación previsional. El segundo aspecto, es la pura omisión del pago.

En el caso de autos, sostuvo que el verbo típico se encuentra presente de modo claro e incuestionable, pues la falta de registración de los empleados que en realidad se desempeñaban bajo relación de dependencia





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

en la fabricación y comercialización de calzado femenino en Argentinian Shoes y su consecuente inscripción como monotributistas, provocó la evasión de aportes y contribuciones de la Seguridad Social.

Finalmente, dijo que el hecho se encuentra consumado; para lo que recordó que la jurisprudencia tiene dicho que *“... para considerar que se ha constituido aquella acción típica no se exige que la conducta de evasión llevada a cabo por el sujeto activo sea exitosa en el sentido en que aquélla no pueda ser detectada por el órgano recaudador, pues de lo contrario se desvirtuaría el fin del procedimiento de fiscalización”* (confr. Reg. N° 361/07, de la Sala “B”).

Por último, mencionó que debía analizarse el monto de deuda reclamada, porque es la propia ley la que establece el criterio. Así, refirió que -en este caso, por aplicación de la ley penal más benigna- resulta claro que el monto debe superar la suma de \$200.000 por cada período.

En ese sentido, mencionó que los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015 exceden ese monto en todos los casos y por lo cual permanecen imputados en este juicio. Sobre ello, dijo que debe detenerse para analizar el ajuste realizado por el organismo recaudador por orden del juez instructor.

Recordó que tanto LIOTTI como RAMÍREZ en sus declaraciones indagatorias en instrucción objetaron la forma en que se determinaron los montos de deuda y sostuvieron que se basaron en meras presunciones, es decir que la determinación se realizó sobre base presunta. Sin embargo, mencionó que “esta construcción creada por la defensa en instrucción, debe ser derribada en este preciso momento”.

Así, dijo que no podemos soslayar que -para el cálculo del monto de las obligaciones previsionales evadidas- se tuvo en consideración a todas aquellas personas que prestaron funciones, el tipo de trabajo que desarrolló cada empleado y los convenios colectivos que rigen cada actividad. Que en esta instancia pudimos escuchar al inspector Prando y al Supervisor Oneto, quienes efectuaron el ajuste requerido por el Juez. Recordó que a preguntas de esa parte Prando explicó que él hizo la determinación de deuda. Que para ello se analizaron los relevamientos de



#32859976#347198392#20221027213627864

personal realizados, se citaron a muchos de esos monotributistas a declaración testimonial (aunque no todos concurrieron) y también se analizaron los distintos sistemas del organismo para chequear la relación anterior de estas personas con Liotti. También se valoró que después de 2015 Liotti constituyó la sociedad ASH CALZADOS, en la que se incorporó a muchas de estas personas como empleados. Que para determinar la deuda se trató de constatar lo que se había denunciado y que se den las condiciones típicas de una relación de dependencia (subordinación económica, técnica y jurídica), con los elementos que fueron encontrados en los allanamientos. Que los períodos de deuda se determinaron en función de la fecha de ingreso que manifestaron los empleados, ya sea en la declaración testimonial o en los relevamientos. Que los casos que no tenían relevados o declarados en testimonial, consideraron la fecha de alta en el Monotributo. Que, hubo casos que no fueron ajustados (cerca de 70), porque no se pudo comprobar las notas típicas de una relación de dependencia, puntualmente la prestación de servicio. Que, en cuanto a los conceptos que se ajustaron, refirió que se ajustó desde enero 2010 a marzo 2015 aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Además, indicó que, dentro del sistema existen otros conceptos (como puede ser obra social y ART), sobre el cual ellos no hicieron ningún ajuste, porque lo que es obra social está delegado a obra social, lo mismo que ART, la AFIP tiene la facultad de determinar lo que se hizo, aportes y contribuciones. Que el pago del monotributo no se tuvo en cuenta para hacer el ajuste porque ello no corresponde ya que no tiene nada que ver con la deuda que su ajuste fue revisado, porque la determinación de deuda fue impugnada por Liotti, y la revisó la División Técnico Jurídica, Sección de Impugnaciones, a cargo de Natalia Terragno.

A su vez, el supervisor Oneto expresó que se hizo un análisis respecto de cada persona. El primer presupuesto a corroborar fue si hubo una efectiva prestación de servicios, porque si no, no se podía afirmar que había una relación de dependencia. De los que no pudieron acreditarlo, quedaron fuera del ajuste, no integraron la determinación. No solo eso, sino que esa prestación de servicios tenía que ser en relación de dependencia. Eso también lo chequearon. Que hicieron la determinación del ajuste en base a los aportes y contribuciones de la seguridad social, hay otro





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

componente que es obra social que quedó fuera de la determinación (porque si bien la AFIP tiene potestad para chequearlo, esto fue delegado en las obras sociales). Que no correspondía tener en cuenta los pagos del monotributo para efectuar el ajuste, “porque es otra cosa, es otra especie. Eso es tratar de compensar importes de distinta naturaleza. No corresponde esa compensación, esos pagos son de distinta especie”. Que, la determinación de deuda que ellos efectuaron, fue revisada por otra instancia administrativa, hay un procedimiento administrativo de doble instancia que así lo establece.

Asimismo, como ya fuera dicho, mencionó que obran incorporados a la causa la Resolución N°183/17 de fecha 28/07/2017 junto con el Dictamen Jurídico N°48/17 por el cual no se hace lugar a la impugnación interpuesta por el contribuyente LIOTTI y se confirma la deuda e intereses intimados en su totalidad.

Pero no solo ello, sino que -según dijo- el método de cálculo utilizado por el organismo recaudador fue convalidado por la Cámara de Apelaciones del fuero Sala B al revisar los procesamientos recurridos por las defensas al sostener la base presunta de la deuda.

Y aún más, dijo, en esta instancia se realizó una pericia contable, y en el punto 9 de aquella los peritos concluyeron que teniendo en cuenta las personas que prestan servicio en las condiciones detalladas por AFIP, así como los convenios colectivos que rigen cada actividad (Sindicato de Empleados de Comercio y Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina), no tenían objeciones que formular al cálculo de los aportes y contribuciones de la AFIP por los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, los cuales ascienden a la suma total de \$ 4.700.253,83 por esos períodos”.

Por ello, indicó que no pueden quedar dudas respecto al modo que se llevó a cabo el ajuste.

En cuanto al tipo subjetivo, se destacó que el tipo penal previsto en el artículo 7 de la ley 24.769 y sus modificatorias, actual



#32859976#347198392#20221027213627864

artículo 5 ley 27.430, requiere para la configuración en su faz subjetiva el dolo directo de los autores.

Indicó que la intervención dolosa de LIOTTI y RAMÍREZ en calidad de coautores se encuentra suficientemente acreditada, pues los nombrados conocían la existencia de las obligaciones tributarias correspondientes y decidieron construir una ficción a la que llamaron “asociados” y de esa forma enmascararon una real relación de dependencia de sus trabajadores.

Expresó que esa parte pudo analizar cada uno de los testimonios brindados por los monotributistas en esta sede y, con ello, no solo escuchamos sus palabras, sino también sus contextos socioeconómicos y familiares. De allí que solo podemos arribar a una conclusión: que LIOTTI y RAMÍREZ abusaron y se aprovecharon lamentablemente de las pésimas condiciones económicas de esas personas y a partir de allí, forjaron las bases de las maniobras fraudulentas.

En cuanto a la calidad de “jefes” de Liotti y Ramírez, indicó que las declaraciones de los testigos -verdaderos empleados- son el claro reflejo de la maniobra perpetrada por los imputados, quienes ya no quedan dudas eran los verdaderos dueños de esta unidad empresarial cuyo nombre de fantasía era Argentinian Shoes (citó fragmentos de las declaraciones de los testigos Andres Javier Pérez Diego Javier Orellano, Esteban Javier Marrero, Oscar Omar Almada, Gonzalo Barila, Cristian Gabriel Rocdan Santiago Ojoli, Mauro Damian Salcedo, Gabriela Isabel Caldentey, Daniel Leandro Rodríguez, Gustavo Jose Galparoli, Alberto Cardozo, Carlos Alberto Lara, Leonardo Damian Falconier, Lucas Emanuel Barbieri, Mario Romero, Matias Daniel Aguirre.

En cuanto a la inscripción en monotributo como cuestión excluyente para obtener el empleo y su correspondiente pago mensual, indicó que a partir de las declaraciones recibidas se pudo comprobar que LIOTTI y RAMÍREZ desplegaron intencionalmente una maniobra con el solo propósito de hacer aparecer a los ojos del organismo recaudador una situación falsa como verdadera, montaron una ficción, para lo cual se aprovecharon de la precaria situación económica de sus empleados a







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

quienes imponían como cuestión excluyente para obtener el trabajo inscribirse como monotributistas ante la AFIP.

Dicho extremo se encuentra corroborado, según indicó, a partir de las declaraciones de Jorge Jonatan Cardozo, Andrés Javier Pérez, Diego Javier Orellano, Oscar Omar Almada, Diego Sebastián Cordoba Reggi, Marcos Javier Peralta Mauro Damián Salcedo, Cristian Samuel Azcarate, Daniel Leandro Rodríguez, Venancio González Cardozo, Alberto Cardozo, Fermin Jourdan (entre otros)

Incluso, refirió que muchos de los testigos nos explicaron en este debate que LIOTTI y RAMÍREZ modificaban la clave fiscal para luego poder manejarla y controlarla, nota distintiva una vez más de esta situación de aprovechamiento de las necesidades de trabajo de sus empleados con el solo fin de poder controlar la ficción de los asociados monotributistas.

Asimismo, refirió que el tercer pilar de esta maniobra engañosa resulta ser la impresión de facturas a nombre de los monotributistas encomendada por LIOTTI y RAMÍREZ, todo lo cual era parte de la ficción llamada “asociados” (esto es, para aparentar que los trabajadores eran independientes), a quienes les emitían facturas para que documenten parte de las ventas como propias. Citó, en aval de dicha postura, los testimonios de Jorge Jonatan Cardozo, Andres Javier Pérez, Diego Javier Orellano, Maximiliano Eduardo Torres, Jonathan Adrian Nicola, Gonzalo Javier Gonzalez, Fermin Jourdan, Leonardo Damian Falconier

Además, dijo que el cuarto elemento engañoso que se detectó es la suscripción de contratos de locación o al menos, la aparición de los nombres de los monotributistas en esos documentos. En ese sentido, refirió que la gran mayoría de los declarantes no reconocieron o recordaron vagamente que les entregaban recibos en concepto de pagos y que debían archivar esos documentos en carpetas. Sostuvo que los documentos titulados “contrato de locación” en los cuales aparecían RAMÍREZ y/o LIOTTI como locadores y los monotributistas como locatarios, nos demuestran una vez más que los coautores LIOTTI y RAMÍREZ



#32859976#347198392#20221027213627864

confeccionaron estos documentos para que protagonicen la ficción. Esta simulación de empresa de “asociados” en la cual todos van a riesgo y comparten las ganancias. Lo cierto es que -según indicó- las prueban echan por tierra esta fábula y demuestran una vez más la intención y voluntad de los imputados de evadir las cargas tributarias a través de las maniobras fraudulentas. Citó las declaraciones testimoniales de Jorge Jonatan Cardozo, Diego Javier Orellano, Diego Sebastián Cordoba Reggi, Gonzalo Barila, Guido Laurelli, en aval de lo indicado.

Por su parte, en cuanto a la rotación por distintos locales comerciales que debían hacer los monotributistas, refirió que ese extremo se encuentra comprobado, entre otros, a través de las declaraciones de Jorge Jonatan Cardozo, Andres Javier Pérez, Diego Javier Orellano, Esteban Javier Marrero, Oscar Omar Almada, Jonathan Adrian Nicola, Gustavo José Galparoli; a partir de cuyo análisis indicó que cabía preguntarnos ¿por qué un asociado que trabaja en determinado local a su propio riesgo colabora con otro asociado que tiene su domicilio en otro local? ¿Por qué LIOTTI o RAMÍREZ daban esa directiva? e indicó que la conclusión es clara: la figura de asociados no existe, los empleados cumplían órdenes y rotaban por los distintos locales de la Capital Federal dependiendo de las ausencias y el volumen de trabajo. (esto, dijo, lo resumió el testigo Cardozo con sus propias palabras por lo cual las del Ministerio Público sobreabundan: la rotación era en función de las necesidades de la empresa).

En cuanto al pago por los servicios de los monotributistas, indicó que se había acreditado que los empleados de los locales comerciales retiraban el dinero de la caja y lo registraban en una planilla para que LIOTTI y RAMÍREZ puedan controlarlo, y ese extremo estaba acreditado a partir de, entre otros, las declaraciones de Jorge Jonatan Cardozo, Esteban Javier Marrero, Cristian Samuel Azcarate, Daniel Leandro Rodríguez, Gustavo José Galparoli, Venancio González Cardozo, Alberto Cardozo. Así, analizados los testimonios, sostuvo que de allí podía advertirse que los monotributistas no eran “asociados” sino empleados, y que lo que en realidad abonaban los responsables de la empresa era un sueldo y como tal debían registrarlo.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Además, indicó que surge claramente que los trabajadores involucrados se hallaban sometidos a un régimen laboral estrictamente pautado y organizado, remunerado, que incluía un régimen horario y penalidades para el caso de incumplimiento.

En cuanto a las órdenes de trabajo que impartían los imputados, recordó los testimonios de Diego Sebastián Cordoba Reggi, Gonzalo Barila, Maximiliano Eduardo Torres, Cristian Gabriel Rocdan, Santiago Ojoli, Matias Daniel Aguirre, a la vez que señaló el documento que reza “... nunca firmar nada...”, que daba cuenta -entre muchos otros- de las órdenes que recibían los trabajadores.

Al respecto, consideró que *“Las pruebas son claras, irrefutables, incuestionables. Las ordenes sobre como debían actuar los empleados en caso de que se presentara personal de algún organismo público como AFIP o Ministerio de Trabajo eran claras. No firmar nada. ¿Por qué Liotti y Ramírez decían lo que debían manifestar los monotributistas? ¿Por qué los monotributistas no debían firmar? Las respuestas son indiscutibles. Porque Liotti y Ramírez sabían que los monotributistas eran sus empleados y trataron de enmascarar esa relación. De otro modo no se explica porque un supuesto asociado debería respetar semejantes pautas”*.

Por otra parte, en cuanto a cómo finalizaba la relación laboral entre los monotributistas y LIOTTI y RAMÍREZ, refirió que de las declaraciones testimoniales podemos observar algunos conceptos importantes como: “me echaron” “indemnización” “telegrama” “acuerdo conciliatorio”, todas frases y palabras que remiten a una evidente relación laboral lejos, muy distante de la figura de monotributistas asociados que intentaron construir LIOTTI y RAMÍREZ. Citó los dichos de los testigos Guido Laurelli, Gabriela Isabel Caldentey, Daniel Leandro Rodríguez, Gonzalo Barila, Pablo Sebastián Barrios, Jonathan Adrian Nicola y Matias Aguirre.

Además, indicó que LIOTTI le dio una orden a sus empleados Jourdan, Ruffo y Lara para crear una sociedad a su nombre de modo excluyente para mantener el trabajo. En aval de dicha afirmación, recordó



#32859976#347198392#20221027213627864

los dichos de Fermín Jourdan y Carlos Alberto Lara. Así, valoró que *“Definitivamente, vemos que Liotti y Ramírez no solo encubrían una relación laboral de dependencia, sino que utilizaron a sus empleados para constituir una sociedad, exponiéndolos a deudas y aprovechándose de la necesidad de trabajo de cada uno de sus empleados. Otra condición extorsiva más, para que estas personas puedan mantener su trabajo”*.

Finalmente, recordó que nada cambió cuando se constituyeron las sociedades Argentinian Shoes S.A. y Calzados Lafuente SRL e incorporaron a ciertos monotributistas, pero esta vez como empleados en relación de dependencia legalmente inscriptos. Recordó los dichos del testigo Nestor Fabian Enciso Escurra e indicó que, sea como monotributistas asociados o inscriptos en las nuevas sociedades constituidas, las condiciones de los trabajadores eran idénticas.

Por ello, concluyó que los trabajadores siempre se encontraron en una relación de dependencia para con LIOTTI y RAMÍREZ; relación que, según indicó, estaba *“enmascarada en los períodos imputados en este debate con el único fin de evadir los aportes y contribuciones previstos por ley”*.

Finalmente, analizó los descargos que realizaron LIOTTI y RAMÍREZ. Recordó que RAMÍREZ manifestó en la etapa de instrucción que la acusación es totalmente falsa, que nunca tuvo a cargo la contabilidad de ASH, que solo se encontraba a cargo del área de diseño y marketing de la empresa (operaciones que lejos estaban de configurar una posición de poder en la firma mencionada como para presumir que tenía empleados a su cargo); además de que cuestionó el modo en que se ajustó la deuda. Recordó que en este debate RAMÍREZ no declaró. Respecto de las declaraciones vertidas por RAMÍREZ en instrucción, el Sr. Fiscal manifestó que *“... resulta inverosímil a esta altura del debate, que fuera quien se encargara de las cuestiones de marketing y diseño de la empresa. Por el contrario, surge de las declaraciones de las decenas de empleados que declararon en este debate que ella se encontraba en una situación de poder, quien estaba a cargo de los locales, quien tomaba las decisiones e impartía todo tipo de órdenes además de -en algunas oportunidades- recibir el dinero de la recaudación. Además, en los registros domiciliarios*





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*se secuestraron anotaciones que dan cuenta que la nombrada era indicada como uno de los contactos de la administración "ASH"; se verificaron compras de materia prima realizadas por RAMIREZ, el controlador fiscal de algunos locales se encontraba a su nombre, firmó -o bien, su nombre aparecía impreso- como inquilina autorizada (locadora) de numerosos contratos de locación por “el alquiler de parcela de los locales comerciales”, se hallaron numerosos registros ante el SECLO, de conciliaciones obligatorias en las que RAMIREZ y ASH CALZADOS S.A. representaron a la cadena de zapaterías y además, como ya expusimos, con posterioridad a los allanamientos creó junto a Liotti la empresa ASH S.A. en la cual se inscribieron como personal en relación de dependencia a monotributistas. Todo ello, demuestra el claro dominio del hecho por parte de Liliana Delfina Ramírez quien fue una pieza fundamental en la creación y la puesta en funcionamiento de esta ficción llamado ‘monotributistas asociados’”.*

Por su parte, el Sr. Fiscal recordó que LIOTTI en este juicio expresó que eran todos monotributistas, y que “lo hicieron durante un tiempo pensando que todo era perfectamente legal, porque de hecho pagaban todos los aportes, incluso hubo personas que se jubilaron con este sistema de monotributos, que tenían cobertura médica, obra social, hubo gente que se operó, hubo mujeres que cubrieron los embarazos. Parecía que estaba todo bien hasta que tuvieron el allanamiento, y ahí AFIP dijo que no se podía trabajar así y dejaron de hacerlo, simplemente eso. Que fue ahí cuando mucha gente se fue y empezaron los juicios y los litigios. Que eso es todo lo que quería decir. Que no les parecía algo ilegal, incluso porque veían que en otros lugares también lo hacían, empresas grandes incluso, o en municipios, pero eso no le parecía ilegal. Sin embargo, la Fiscalía entendió que “... no resulta creíble que LIOTTI no conociera que el régimen de Monotributo no era el aplicable al presente caso, pues resulta ser una persona con amplia experiencia comercial y empresarial y manejaba personalmente la firma en lo que respecta a la estrategia comercial, la marcha de los negocios y llevaba el control de las ventas junto a Ramírez a través de los datos que plasmaban los empleados en el sistema en red. A ello, debe sumarse que tanto Liotti como Ramírez impartían ordenes en caso que se presentaran de algún organismo público



#32859976#347198392#20221027213627864

*¿por qué no firmar nada? ¿por qué no exhibir los talonarios de facturas? Definitivamente, sus dichos resultan inverosímiles”.*

En definitiva, la Fiscalía entendió que había quedado claro que tanto LIOTTI como RAMÍREZ impartieron instrucciones a los empleados sobre cómo inscribirse en el monotributo, cómo facturar, como cobrar por sus servicios, todo ello con la clara intención de ocultar la verdadera relación laboral de dependencia que mantenían con el objetivo final de defraudar al estado y obtener de esta forma un beneficio económico personal.

Señaló la Fiscalía que la tarea de los trabajadores se desarrolló en el marco de una estructura industrial y comercial ajena, dirigida técnicamente por los imputados (que ocupaban y desarrollaban la función organizadora y la disciplinaria), recibiendo a cambio una remuneración monetaria fija (independiente de los beneficios o pérdidas del negocio) lo que echa por tierra la calidad de asociados.

Así, sostuvo el acusador público que -a entender de esa parte- existen reunidas pruebas serias, precisas y concordantes que permiten afirmar, con la certeza que exige una condena penal, que LIOTTI y RAMÍREZ tenían conocimiento acerca de la maniobra pergeñada para evadir sus obligaciones tributarias y la llevaron a cabo montando una ficción; y que no existen en autos causales de justificación, ni tampoco se advierten supuestos de legítima defensa, ejercicio de un derecho o estado de necesidad justificante, lo que necesariamente lleva a concluir la existencia de antijuridicidad de la conducta desplegada por los imputados.

En cuando a la determinación de pena, el Sr. Fiscal dijo que, conforme las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del C.P., había valorado: la naturaleza de la acción y los medios empleados; la extensión del daño: las evasiones del pago de aportes y contribuciones por los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, los cuales ascienden a la suma total de \$ 4.700.253,83 por esos períodos; y su participación en el hecho en carácter de coautores.

Como atenuantes, consideró las condiciones y antecedentes personales de los imputados, conforme surge de los certificados remitidos





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

por el Registro Nacional de Reiniciencia de fecha 13/9/2022 en donde los imputado no registran antecedentes computables; el extenso trámite del proceso, su buen comportamiento procesal, su reinserción social y la normal impresión causada en la oportunidad del debate.

Así las cosas, de acuerdo a los motivos expuestos durante su alegado, el Sr. Fiscal General acusó a Marcelo Julián LIOTTI y a Liliana Delfina RAMÍREZ como coautores penalmente responsables por la evasión del pago de las sumas totales de \$ 4.700.253,83 en concepto de aportes y contribuciones por los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015. Ello, en los términos de los artículos 7° de la ley 24.769, modificada por ley 26.735 (vigente al momento de los hechos) y actual artículo 5° de la ley 27.430 y solicitó que al fallar se les imponga la pena de 3 (tres) años de prisión cuyo cumplimiento puede ser dejado en suspenso (artículo 26 CP).

Además, solicitó que se imponga a LIOTTI y RAMIREZ una multa de noventa mil pesos (\$90.000) para cada uno de ellos, conforme lo dispone el art. 22 bis del CP. Al respecto, sostuvo que *“El delito de evasión tributaria es un delito económico que trae como consecuencia que se produzca en las arcas públicas una insuficiencia de fondos a los fines de cumplir con sus funciones básicas, siendo el único objetivo por parte de quienes lo cometen el ánimo de lucro”*.

Todo ello, conforme a lo prescripto en los arts. 7 de la ley 24.769 según ley 26.735, y 5 de la ley 27.430; artículos 40, 41, 45 y 29 inc. 3° del C.P., y 530, 531 y cctes. del C.P.P.N.

Por último, el Sr. Fiscal General manifestó que -de las probanzas colectadas durante el juicio- surgía que Darío Joaquín Meinet (DNI 35.242.043) y Jérica Ramírez (DNI 34.182.007) podrían haber participado en la evasión de aportes y contribuciones de la Seguridad Social que aquí se juzga, por lo que -pese al tiempo transcurrido- entendía que correspondía extraer testimonios de las partes pertinentes y remitirlas al Juzgado Nacional en lo Penal Económico que por turno correspondiera a fin de que se investigue dicha cuestión.



#32859976#347198392#20221027213627864

Ello, según indicó, surge de los siguientes circunstancias:

*“Recordemos que el testigo Jorge Jonatan CARDOZO expresó que la hermana de Ramírez también estaba a cargo y quienes le pidieron que abandone el local fueron la hermana de Liliana Ramírez y Darío Meinet. Andrés Javier PÉREZ expresó que reportaba a la hermana de Ramírez. Diego Javier ORELLANO expresó que “Darío” que podría ser Meinet pasaba a buscar la recaudación del día de los locales, y a corroborar cómo estaba todo. Que Jesica también iba al local. Ambos retiraban la recaudación, y les preguntaban cómo había sido el día de trabajo. Esteban Javier MARRERO informó que al final del día, la administración de ASH buscaba el dinero de lo vendido. Que la administración estaba compuesta por la hermana de la imputada (Jésica Ramírez). DIEGO SEBASTIÁN CORDOBA REGGI refirió que Darío Meinet fue el que lo llamó para la entrevista. Que Jesica Ramírez también tenía un rol, ambos eran los supervisores. JONATHAN ADRIAN NICOLA expresó que la persona que le dijo que tenía que hacerse monotributista se llamaba Darío, que era como una especie de jefe, quien les llevaba la mercadería y les daba indicaciones. Recuerda que Jésica Ramírez, quien era como una supervisora, les llevaba junto con Darío la mercadería, les daba instrucciones de cómo poner las vidrieras, si había cambios de precios, era una supervisora, no estaba fija en ningún local pero iba seguido, reiteraba el dinero. SANTIAGO OJOLI expresó que, para comunicarse con Liliana o Marcelo, intermediaban Darío Meinet y la hermana de Liliana, Jésica Ramírez. Estas dos personas iban a los locales a darles presencialmente algunas órdenes directas de Liliana y de Marcelo. LEONARDO DAMIAN FALCONIER dijo que la plata de la recaudación se la llevaban a Marcelo Liotti. Si no estaba Marcelo se la daba a Darío o a Jésica (la hermana de “Lili”). Además, recordemos que obran en la documentación secuestrada escritos titulados “contratos de locación” en los que aparecen Jésica Ramírez y Darío Meinet como locadores y otros escritos para los trabajadores de los locales, en los cuales se detallan los datos de ambos y se hace saber sus números de teléfono y mails en casos de dudas. Surge evidentemente de las pruebas recopiladas en autos, que podría configurarse uno de los delitos previstos en la ley 27.430”.*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Finalmente, el Sr. Fiscal General formuló reserva de casación y caso federal.

Las conclusiones a las que arribaron los representantes de la Fiscalía, además de los argumentos que fueron expresamente citados, se apoyan en las demás circunstancias que obran detalladas en el acta de debate respectiva, a la que cabe remitirse por cuestiones de brevedad.

### **6) La defensa material de los imputados.**

#### **A) Defensa material de Liliana Delfina RAMÍREZ:**

En primer lugar, cabe recordar que, en oportunidad de ser convocada a prestar declaración indagatoria durante el debate, la imputada Liliana Delfina RAMIREZ manifestó su voluntad de no declarar; motivo por el cual se incorporó por lectura la declaración indagatoria prestada por la nombrada en la instrucción (presentó un descargo por escrito).

En ese escrito, y en lo sustancial, Liliana Delfina RAMIREZ indicó que se había desvinculado de la cadena de zapatos “ASH” y que solamente se encontró a cargo del área de diseño y marketing, pero que nunca estuvo inscripta en el Régimen de Aportes de la Seguridad Social, porque nunca tuvo empleados. Sin perjuicio de ello cuestionó el modo en que fue determinada la deuda, al entender que se habría realizado mediante la utilización de presunciones, que no resultan compatibles con el derecho penal (cfr. fs. 1626/1627).

#### **B) Defensa material de Marcelo Julián LIOTTI.**

En oportunidad de ser convocado a prestar declaración indagatoria al inicio del debate, Marcelo Julian LIOTTI manifestó que no declararía, motivo por el cual se incorporó por lectura su declaración prestada en instrucción.

En el marco de la indagatoria prestada en instrucción, LIOTTI presentó un escrito que fue tenido como parte integrante del acto de defensa. En lo sustancial, en ese escrito el imputado negó que existiera un vínculo laboral con las personas que AFIP denunció como supuestos empleados del nombrado, sobre este punto indicó que “... *Sólo había con ellos una relación comercial, que beneficiaba a cada una de las partes y quienes participaban, lo hacían a su propio riesgo y mediante la adhesión*”.



#32859976#347198392#20221027213627864

a un sistema de ventas con la modalidad de asociados...”. Indicó que el trámite para obtener CUIT, CUIL, autorización para emitir facturas y la inscripción al Régimen de Pequeños contribuyentes, es personal y que las personas que se inscribieron y adoptaron una modalidad para ejercer el comercio, fueron las personas que por su voluntad y en forma personal, tomaron la decisión de llevar adelante las acciones que les posibilitaron ser Pequeños Contribuyentes. Además, también cuestionó el método utilizado por el fisco para hacer la determinación de deuda, al entender que se realizó sobre base presunta y solicitó la realización de medidas de prueba, un peritaje contable y que se requiera a AFIP informes relacionados con los trámites de inscripción y solicitudes realizadas por las personas que fueron indicadas como empleados de los imputados (fs. 1631/1634).

Sin embargo, con posterioridad a ello (concretamente, en la audiencia del 25/08/2022), LIOTTI solicitó ampliar su declaración, en cuyo marco indicó: “... que hacían este trabajo y que eran todos monotributistas, y lo hicieron durante un tiempo pensando que todo era perfectamente legal, porque de hecho pagaban todos los aportes, incluso hubo personas que se jubilaron con este sistema de monotributos (algunas de las cuales fueron citadas a declarar en este juicio), que tenían cobertura médica, obra social, hubo gente que se operó, hubo mujeres que cubrieron los embarazos. Parecía que estaba todo bien hasta que tuvieron el allanamiento, y ahí AFIP dijo que no se podía trabajar así y dejaron de hacerlo, simplemente eso, que fue ahí cuando mucha gente se fue y empezaron los juicios y los litigios. Eso es todo lo que quería decir. Que no les parecía algo ilegal, incluso porque veían que en otros lugares también lo hacían, empresas grandes incluso, o en municipios, pero eso no le parecía ilegal”.

## **7) La defensa técnica de los imputados.**

### **A) Defensa técnica de Liliana RAMÍREZ.**

En oportunidad de efectuar su alegato, la defensa de Liliana RAMIREZ, expresó -como aclaración previa- que ningún juicio se gana antes de empezarlo, y que -en este caso- los acusadores se habían relajado, sobre la base de la supuesta prueba que dijeron haber recolectado y que entendieron era suficiente para lograr una condena. Por ello, a su entender, los acusadores habían “pecado” de un exceso de confianza en la prueba que





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

se reunió en la etapa de instrucción; se habían relajado en la valoración de esa prueba, y en la demostración dentro de esos términos en lo que debe hacerse dentro de un juicio penal.

Así, entendió el Sr. Defensor que debía haber sido por ello que, quizás, el Fiscal, de quien tiene una profunda admiración, haya modificado el orden de su alegato, exponiendo primero su conclusión y luego los fundamentos de aquella. Esta metodología usada en el desarrollo de su razonamiento, según indicó, resulta errónea a entender de esa parte, pues así se tiende a ser parcial. Esa tendencia, muchas veces pasa de manera voluntaria o involuntaria, porque lo que se quiere es llegar a determinado destino, no utilizando un razonamiento lógico deductivo en el que una prueba tras otra va llevando a determinada conclusión.

Quizá también por ello, sostuvo la defensa, sea que en la querella se haya producido un “hartazgo” en el análisis o valoración de la prueba (dijo “hartazgo”, porque esa fue la palabra que utilizó la propia querella).

Es que, como adelantó, esa relajación les hizo perder a los acusadores la perspectiva de lo que resulta determinante en un procedimiento penal (a diferencia del administrativo o laboral). En efecto, según entendió ambos acusadores se olvidaron, o estratégicamente no se expidieron sobre el aspecto más esencial, que resulta ser la existencia de una conducta típicamente relevante, es decir, la demostración más básica de la existencia de un hecho relevante para el derecho penal. Esto es el segundo estamento de la teoría del delito, y resulta determinante. Lo que no se demostró en este caso -según dijo- es que exista una conducta típicamente relevante; no se demostró que se hayan evadido aportes por un monto determinado que merezcan la atención del sistema penal; no se demostró particularmente que el monto que requiere la norma (de 200.000 pesos) haya sido efectivamente evadido en este caso.

Para ello, el Sr. defensor aclaró que no habría de extenderse en la cuestión relativa a si los montos que el tipo penal establece son elementos objetivos del tipo o condiciones objetivas de punibilidad. Si bien reconoció que una gran parte de la doctrina y jurisprudencia los consideran como esto último, es decir, como condiciones objetivas de punibilidad, en su caso entiende que el monto establecido por la Ley es una condición objetiva del tipo penal y de esto no tiene dudas, según dijo, porque de



encontrarse demostrado que la conducta no alcanza ese monto, la justicia penal no debe tomar intervención, no se corrobora el tipo penal previsto por la norma.

Así, manifestó que -para poder determinar que se han evadido el pago de aportes y contribuciones de una persona en cabeza de un empleador- lo primero que debemos demostrar (en particular, lo que debe demostrar la acusación -esto es importante-) es que existió, entre ellas, una relación laboral, de dependencia, que genera dicha obligación, respecto de todas las personas que se dicen que se evadieron aportes. Así, si no logramos demostrar esa relación de dependencia, mal podemos sostener luego que exista nacimiento de obligación alguna entre ellos, menos aún la de pagar cargas sociales.

Y si toma la peor de las hipótesis que se analizaron en el caso (esto es, la peor para la defensa), advierte que en este juicio se demostró que 36 personas que declararon en este juicio demostraron ser empleados en relación de dependencia de los aquí imputados. Se comprobó que 36 personas trabajaron en relación de dependencia. 36 personas de una nómina de 122 (de acuerdo al informe de la AFIP). Es decir, se comprobó una relación de dependencia de una nómina menor al 30% del total de las personas que conforman la nómina de la AFIP. Esto es una cuestión matemática. En este caso, en el período que mayor monto tiene, de diciembre de 2014 asciende a 474.000. Así, si lo tenemos por probado un 30% de ese monto, nos queda un monto de 142.000 pesos. Es decir, en el peor de los casos para la defensa, aun cuando se haya comprobado una relación de dependencia de las 36 personas que declararon en el juicio, igualmente no se alcanza el monto de 200.000 pesos que exige el tipo penal.

Dijo el Sr. Defensor que, para esto, hay que tener en cuenta que aquel informe que confeccionó la AFIP no es una prueba dirimente. No es una prueba dirimente porque no demuestra que haya habido una relación de dependencia de esas 122 personas que informaron. Es cierto que para su elaboración se valieron de presunciones totalmente ajenas al sistema de enjuiciamiento penal (que tienen que ver con el ámbito administrativo, o laboral). Recordemos que la forma en que son válidas las presunciones en ese ámbito tienen que ver con el in dubio pro operario (estar en favor del empleado, cuando se pueda discutir alguna relación laboral, justamente





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

porque el empleado tiene dificultades probatorias, menos recursos, etc.; entonces la ley le da eso a su favor). En el procedimiento penal, de forma contraria, rige el in dubio pro reo, la presunción de inocencia. Ello, porque el Estado reconoce en el justiciable una persona en inferioridad de condiciones respecto al aparato estatal, por lo que es la acusación la que mantiene la carga de la prueba. Mientras en el proceso laboral la carga de la prueba la tiene el empleador, en el ámbito penal la carga de la prueba recae sobre el acusador; es una diferencia sustancial. Si nosotros utilizamos las presunciones que utilizó la AFIP, estamos yendo en contra de los estamentos básicos que rigen el proceso penal.

Aclaró que lo que quiere decir con todo esto es que era responsabilidad de la acusación demostrar que las 122 personas que fueron informadas por la AFIP efectivamente tuvieron una relación de dependencia respecto de los imputados (LIOTTI y RAMÍREZ). Esto es lo que nos exige la Constitución Nacional y el código procesal. Y esta carga que le incumbe a la acusación.

Al respecto, citó un fragmento de exposición del Sr. Fiscal General, Dr. Marcelo Agüero Vera, en otro caso, en cuanto a que es una función indelegable del MPF la búsqueda de la verdad, pero esa búsqueda de por sí no puede convertirse en la mera confirmación de las hipótesis acusatorias, pues esto sería incompatible con el deber de objetividad, que le impone también averiguar sobre la prueba de descargo, pues es un órgano de justicia y no un órgano de mera persecución.

Por eso, dijo que, en este caso, ese análisis debió haber caído en los acusadores, y no hacer una remisión lisa y llana a una determinación de deuda que pudo haberse producido dentro del ámbito administrativo, relacionado con el aspecto laboral.

Entonces, entendió la defensa que para demostrar que efectivamente existió una evasión de aportes de esas 122 personas, lo que debió haber hecho la acusación es citar a todas esas personas, para comprobar si efectivamente existió -o no- una relación de dependencia entre los imputados (particularmente, su asistida) y los monotributistas (que los acusadores sostienen que eran, en verdad, empleados).

Dijo que esto no lo hicieron los acusadores, y desconoce el motivo, pero lo cierto es que, cuando uno afronta un juicio, hay que saber diferenciar cuándo una prueba es necesaria y cuando puede ser



#32859976#347198392#20221027213627864

sobreabundante. En ese sentido, indicó que esa defensa puede entender que quizás para alguien pueda no ser relevante escuchar a 122 personas. Pero para demostrar la relación de dependencia laboral, aquel elemento es esencial. No se puede afirmar que una persona -que no conocemos, y que nunca escuchamos- efectivamente haya trabajado para alguien, que haya puesto su tiempo a disposición a cambio de una remuneración. Todo este contenido no puede atribuírsele, no se puede afirmar lo que se desconoce, lo que no escuchamos. Entonces, una prueba es sobreabundante cuando versa sobre los mismos puntos, cuando existen otras pruebas, de similar tenor, es decir, otros testimonios, que tengan por objeto demostrar una misma cuestión. Por ejemplo, será sobreabundante si citamos a 122 personas para que nos digan que, sobre la calle Callao, existía un local de venta de calzados denominado ASH.

Ahora, según el defensor, si queremos determinar que cada una de esas personas tenía una relación de dependencia con su asistida, entonces sí es determinante escuchar a cada una de esas 122 personas, porque no vale que alguien venga a decir que tal persona trabajaba para tal otro, no tiene ninguna validez y eso también viola lo que es el derecho de defensa, no tiene capacidad de controlar esa prueba, de interrogar al testigo, de ver si esa relación laboral cumple con los requisitos básicos que se requieren para que exista una relación de dependencia (subordinación económica, etc.). No sabe por qué las acusaciones desistieron de esa prueba (quizás fue por el exceso de confianza al que hizo referencia), pero lo cierto es que dentro de este debate escuchamos testimonios que nos demuestran que escuchar a todas esas personas sí era esencial.

Por ejemplo, el testigo Rodríguez (uno de los monotributistas), dijo que tenía deudas con la AFIP porque una vez que se había desvinculado de ASH había seguido como monotributista. Recordemos que las planillas que confeccionó la AFIP fueron, en muchos casos, porque las personas seguían anotadas como monotributistas (más allá de algún relevamiento de personal que se hizo). Y si el testigo Rodríguez nos dice que siguió anotado como monotributista pese a haberse desvinculado de ASH, cómo podemos tener por probada la relación de dependencia a través de ese parámetro, cuando el propio testigo nos dijo que ya no trabajaba más allí, pese a seguir registrado como monotributista. Esta prueba fue escuchada en el debate y merecía ser valorada





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

correctamente a efectos de determinar si teníamos que seguir escuchando o no a los demás testigos.

Aclaró en este punto que, si bien durante el debate la defensa no objetó esos desistimientos, ello no tiene relevancia alguna, pues la defensa no tiene obligación alguna de demostrar nada, de hecho esos testigos no habían sido ofrecidos por esa defensa, por lo que esa falta de oposición a los desistimientos no puede ser enrostrada a esa parte, pues es una carga de la acusación probar su hipótesis incriminatoria.

Entonces, en vez de hartarse, consideró que lo que debieron hacer los acusadores era modificar su estrategia. En vez de tener a cada testigo durante 40 minutos, preguntándole sobre la facturación u otras cuestiones, se hubieran limitado a preguntar, en 10 minutos, lo que resultaba estrictamente necesario a sus intereses (si había prestado servicios, hasta cuándo, y quienes eran sus jefes).

Pero, dijo el defensor, no lo hicieron, porque no les importó, y luego pretenden que llene esos espacios vacíos efectuado presunciones de lo que los testigos hubieran dicho. Esa presunción no es válida.

Incluso, indicó el Sr. Defensor que se encuentra demostrado que hay personas que integran la lista de la AFIP que tienen vínculos familiares con los imputados, que no pueden considerarse como empleados. Esta falta de análisis del contenido del informe de la AFIP, incluso ha llevado -cree que inconscientemente- a la Fiscalía a sostener un contrasentido en su alegato. En efecto, dentro de la nómina hay cinco personas que son familiares. Estos son el caso de Melisa Ivana Liotti, Anabela Ramírez, Micaela Ramírez, Jélica Soledad Ramírez y Darío Joaquín Meinet. Son todas personas familiares de los imputados. La doctrina indicó otros casos de trabajo familiar, entre hijos mayores y padres, o entre hermanos, cuando estas personas conviven en el mismo hogar, forman parte de una misma comunidad familiar y el resultado del trabajo integra un mismo patrimonio que la sostiene. Se ha señalado que en esos supuestos no se configura una relación de trabajo pues no se trabaja para un tercero sino para una comunidad de la que se participa. La tarea sería un aporte a una sociedad, regular o de hecho, constituida por los miembros de una familia, que excluye a la relación laboral (VÁZQUEZ VIALARD, Antonio, Tratado de Derecho del Trabajo, Bs. As. 1982, tomo III, p 444).



Es decir, que estas relaciones laborales, que dentro del ámbito del derecho laboral no constituyen relaciones de dependencia laboral (de acuerdo a esa presunción), en este debate así se las ha considerado. Esta presunción (contraria a la referida), no es válida en el ámbito penal, siquiera lo es el ámbito laboral.

Asimismo, el letrado defensor aclaró que, cuando dijo que hay una contradicción insalvable en el alegato de la Fiscalía, se refiere a que el Fiscal solicitó la extracción de testimonios respecto de Jesica Ramírez y Darío Meinet. Es decir, estas dos personas, según la Fiscalía, podrían ser coautores, partícipes, o instigadores de la conducta que se les endilga a su asistida y al Sr. LIOTTI. Aquí está la contradicción. Es decir, lo que tiene que entender -según el alegato de la Fiscalía- es que Jérica Ramírez y Darío Meinet tendrían que haberse evadido el pago de aportes a sí mismos. Esto es una inconsistencia total: cometer un delito en contra de sí mismo. Esto es otra situación que le parece que deriva del relajo de los acusadores que ya refirió, de analizar debidamente la prueba.

Asimismo, agregó que respecto de los otros tres familiares se da lo mismo: si no podemos sostener, desde el punto de vista del derecho laboral, que efectivamente eran empleados en relación de dependencia, tampoco se puede afirmar que se haya evadido el pago de sus aportes o contribuciones.

En ese sentido, el Sr. defensor indicó que si sacamos a esas 5 personas de la nómina de empleados, debían -consecuentemente- descontarse los aportes que debieron haber sido pagados para ellos. Sobre ello, valoró que podría decirse que la cuenta que le va a dar es insignificante, pero si sacamos por proporción cuál sería el aporte por mes de esas 5 personas sería un total de 8.488 pesos. Así, advirtió que este monto es dirimente. Por ejemplo, respecto del primer período por el que están siendo acusados, que asciende a un monto total de \$ 207.126 pesos, esto no sería delito. Es decir, aun desde esta insignificancia se ve modificada sustancialmente la acusación desde el punto de vista de la fundamentación.

Ahora bien, el Sr. defensor mencionó que esta cuenta tampoco corresponde que la saque él, ni tampoco el Sr. Juez, le parece que tendría que haberla hecho un perito. Esto debería haber sido parte de una pericia, o habiendo valorado la prueba del debate debería haberse hecho un







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

pedido adicional de prueba, ya que -como dice- si se descontaba gente de esta nómina correspondía realizar un nuevo cálculo. Pero, aún así, si consideramos el peor escenario para esa defensa, aun así la cuestión ofrece otro reparo.

Porque los testigos que escuchamos en este debate, tampoco pueden ser todos tenidos en cuenta en contra de su asistida y así sostener que hubiera una relación de dependencia, pues dentro de aquellos hay personas que refirieron que tenían litigios (abiertos o cerrados), contra los imputados, lo que pone en crisis sus declaraciones por tener un interés en el desarrollo de este proceso. Dijo que es cierto que esa parte introdujo el planteo acerca de la exclusión de esos testimonios y que V.E. no hizo lugar a ello, por lo que se mantuvo la protesta y reserva de recurrir en casación ante la eventual valoración de aquellos en una sentencia condenatoria, por lo que no tiene sentido repetir aquí, más que mantener la reserva de casación. Subsidiariamente, vale aclarar que, aun cuando se permita la inclusión de aquellos en el debate, su valoración impone descartarlos como prueba en contra de su asistida, y por ende, descontarlos también de la liquidación de la deuda. Dentro de este grupo de testimonios, ha sido paradigmático el primero de ellos, el de Jonathan Cardozo, mediante el que se corroboró la alegación de la defensa acerca de la parcialidad, voluntaria o no, con la que se encontraba declarando. Recordemos que el testigo dijo haber hablado con soltura y total libertad con los agentes de la AFIP, sin embargo, en el relevamiento, en ningún momento mencionó a la Sra. RAMÍREZ como supuesta empleadora, siquiera la mencionó.

Así, el defensor se preguntó cómo es que habló libremente en aquella ocasión (en el relevamiento) y ni siquiera mencionó a RAMÍREZ (ni como su empleadora ni como nada), y aquí en el juicio nos dijo otra cosa (que RAMÍREZ era la dueña). Cuando se le preguntó por qué de esta contradicción no supo explicar el porqué de esta contradicción. Pero, se preguntó, ¿hay alguna razón por la que el testigo Cardozo puede haber cambiado su declaración? Para esa defensa sí, y es que quedó evidenciado en este juicio que el testigo Cardozo tenía el expediente laboral al costado de él (e incluso hubo que decirle que no lo lea), en el que se empapó de este expediente penal.

Dijo que debía recordarse que la objeción de esa defensa fue justamente porque los testigos habían tenido acceso al expediente penal, a



#32859976#347198392#20221027213627864

través del expediente laboral (por el pedido de certificación, en el que se remitió el auto de procesamiento), en donde conocieron cuál era la afirmación criminal que se les endilgaba a LIOTTI y RAMÍREZ. Obviamente, también recibió asesoramiento de su abogada luego del relevamiento (esto lo dijo el propio testigo, expresamente lo manifestó). Es lógico que dijo -o fue asesorado- para que diga lo que tenía que decir.

En sentido similar, la defensa indicó que otro de los casos que resultan paradigmáticos, es el del testigo Ojoli (quien forma parte de estos testigos que tienen juicios laborales contra su asistida). El testigo Ojoli dijo que había perdido su juicio por culpa de su abogado. Sin embargo, se remite al expediente judicial laboral del Sr. Ojoli (y esto, sostuvo la defensa, forma parte de la prueba de este debate, porque está informado el número de expediente laboral en el informe de la AFIP, y ese expediente es un expediente público), y advierte que no perdió por culpa de su abogado ni mucho menos. En ese expediente judicial hubo sentencia por parte del Juez y al Sr. Ojoli no se le dio la razón; específicamente, un juez laboral dijo que el Sr. Ojoli no había trabajado en relación de dependencia en el período que aquí forma parte de la imputación. El número y carátula de ese expediente está mencionado en el informe de AFIP, como ya dijo. Entonces, no sabe si es que el Sr. Ojoli, actualmente, acomodó su relato para favorecer su situación, si tiene cierto resentimiento por haber perdido ese juicio laboral, no lo sabe y no le interesa. Pero lo que sí sabe, es que en ese expediente laboral se dijo que no se había comprobado la relación de dependencia de Ojoli con los imputados antes del 2015, y en este expediente penal se pretende decir lo contrario. Así, la pretensión de la acusación y una eventual sentencia en ese sentido causarían lo que se conoce como escándalo jurídico. Dos sentencias que, sobre una misma cuestión, resultan contradictorias.

Por ello, entendió que una correcta valoración de este tipo de declaraciones (que hace extensiva a la de Orellano, Córdoba Reggi, Nicola, Rocdan, Laurelli y Gonzalo Gonzalez) hace que no puedan tenerse en cuenta para demostrar la relación de dependencia en esos casos (esto es, que esas personas no puedan integrar la nómina de personas que, según la acusación, habrían trabajado en relación de dependencia para su asistida). Esta cuestión, incluso, hace mella en lo que puede ser la elaboración de





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

presunciones respecto de todas las demás personas que no declararon, estas circunstancias tranquilamente podrían replicarse.

Citó al respecto la declaración del Sr. Herrera: quien dijo que no cumplía horarios, que iba a trabajar cuando quería. Así, indicó que -en este caso- no se encuentran corroborados los extremos básicos requeridos para tener por acreditada una relación de dependencia. Si la esencia del trabajo en relación de dependencia, más allá de los aspectos técnicos, es que alguien ponga a disposición su tiempo en favor de otro y reciba una remuneración preestablecida por ello, y tenemos demostrado que -en el caso de Herrera- esa disponibilidad de tiempo no la fijaba el supuesto empleador, sino que la decidía el nombrado, lo que tenemos por acreditado, más bien, será una prestación de servicios del nombrado.

Aclaró al respecto que si bien no desconoce que existen otros pasajes de la declaración del nombrado que pueden volcarse hacia la posición de la fiscalía y la querella, pero de todas maneras esto que remarcó es insoslayable. Sin duda existe aquí ese gris que la acusación pretende desechar.

Entonces, consideró la defensa que estas cuestiones que nos generan dudas sobre si se pudo comprobar la relación de dependencia incluso en alguna de las personas que declararon en este debate, le hacen pensar o sostener qué es lo que habría pasado respecto de aquellas otras personas que no declararon, qué podrían haber dicho. Así, indicó que, si tuvimos la oportunidad de escuchar a monotributistas que nos dejen dudas, qué podría haber pasado con todos aquellos que no declararon, y no es nuestra tarea poner en palabras lo que no hemos escuchado.

Recordó que una presunción constituye una operación intelectual según la cual, sobre la base de la acreditación de un hecho (hecho base o indicio) se deduce otro (hecho presumido) siendo que aquel proceso deductivo por el cual se enlaza aquel hecho acreditado con el desconocido debe encontrarse sustentado en reglas de la lógica, a la normalidad de los casos, experiencia, orden natural de las cosas, criterio humano y nexo causal.

Sin perjuicio de lo anterior, constituye una exigencia, máxime a los efectos de sustentar una sentencia de condena, que el hecho cierto del cual se deriva la presunción, sea susceptible de interpretarse en un único sentido, pues resulta improcedente admitir la presunción cuando el



#32859976#347198392#20221027213627864

razonamiento lógico efectuado permite arribar a más de una solución posible y las mismas no sean similares (del voto del juez García Berro, fallo 1789 del 2014, TOPE 1). Es decir, si ese hecho acreditado nos permite arribar a distintas conclusiones, esa deducción no es válida.

En consecuencia, valoró la defensa que, si tenemos personas que aquí declararon, otras que no declararon pero no pueden ser contadas dentro de la nómina, y personas que declararon y no pueden estar dentro de la nómina, entonces mal podría llegarse a una presunción que demuestre que estas 86 personas que no declararon hayan mantenido esta relación de dependencia con la Sra. RAMÍREZ.

La existencia de estas diferentes hipótesis demuestra un estado de incerteza que, por lo menos, torna plenamente aplicable la cláusula del art. 3 del CPPN, reglamentaria del art. 18 de la CN; por lo que consideró la defensa que debe absolverse a su asistida.

Subsidiariamente, solicitó la absolución de su asistida Ramírez, en orden a que la determinación de deuda efectuada por la AFIP no puede constituir prueba en su contra, toda vez que, en el procedimiento, tanto administrativo como penal, según dijo, se han vulnerado principios constitucionales elementales, como son el derecho de defensa en juicio e igualdad.

En primer lugar, respecto de la violación del derecho de defensa, refirió que, más allá de las constancias documentales que formaron parte de la prueba incorporada por lectura, ha quedado debidamente demostrado en este juicio que a la Sra. RAMÍREZ se la excluyó del procedimiento administrativo de determinación de deuda teniendo como consecuencia directa y necesaria, la imposibilidad de ejercer actos de defensa, controlar la prueba, la acusación, participar mediante la producción de prueba, valoración o interpretación, derecho recursivo, etc., todo ello en desmedro directo de sus derechos constitucionales.

Así, valoró que no existe motivo, razón ni justificación alguna que hubiera permitido a la repartición pública excluir a su asistida del procedimiento administrativo cuando, si bien se concluyó únicamente acerca de la responsabilidad del Sr. LIOTTI, se produjo prueba que luego fue incorporada en directo perjuicio de ella, más aún, se la mencionó como partícipe de la llamada “unidad económica” del LIOTTI. Entonces, dijo que





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

si bien la conclusión no la incluye, todo el procedimiento sí, y de hecho se la acusa y luego es utilizada para acusarla dentro del proceso penal.

Estas últimas circunstancias son trascendentales para demostrar la inviabilidad de tener como prueba el procedimiento administrativo del que se la excluyó, porque en momento alguno se respetaron en él sus derechos constitucionales, como ya dijo el derecho de defensa en juicio y, por consiguiente, el debido proceso. Ese derecho de defensa, debe ser entendido en sentido amplio (no solo en lo que hace al proceso penal, sino también al administrativo). Y si alguna duda le cabe a alguien acerca de estos principios como determinantes para la afirmación acerca de la invalidez del procedimiento, vale recordar que ha sido la propia Corte Interamericana de Derechos en el precedente Baena contra Panamá (cuya aplicación es obligatoria para todos nosotros), por el que se sostuvo que en cualquier materia, inclusive en la laboral y administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno ellos el respecto de los derechos humanos: es un derecho humano obtener todas las garantías que permitan obtener soluciones justas, no estando la administración exceptuada de observar este deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el proceso administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

Así, remarcó que la justicia realizada a través del debido proceso legal, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los estados no pueden sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las garantías del art. 8 de la CADH, en el caso de sanciones disciplinarias y no penales. Permitirle a los Estados dicha interpretación, equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso. Es clarísima la CIDH, en el proceso administrativo le incumben a la Sra. Ramírez los mismos derechos que en este proceso penal, y sostener una acusación -o llevar adelante toda una investigación en la que se la menciona como responsable de toda esta maniobra- debió haber habilitado su participación en el proceso.

Es más, según dijo la defensa, esta cuestión quedó acreditada en este debate. Recordó que, cuando esa defensa le preguntó al Sr. Mozetic (funcionario de AFIP que intervino en el procedimiento) para qué se notifica a alguien acerca de la determinación de la deuda, sin ninguna hesitación dijo que “claramente” era para respetar el derecho de defensa.



#32859976#347198392#20221027213627864

Derecho que a la Sra. Ramírez, como podía observarse, no se le respetó. En consecuencia, al no haberse respetado ese derecho de defensa en el proceso administrativo, es lógico que esa prueba no pueda ser usada en su contra en esta causa, porque en ningún momento tuvo la posibilidad de controlarla, de debatirla, de ofrecer prueba, de excluir prueba, de interrogar a aquellas personas que integran esa nómina, etc. Recordemos que muchas de esas personas que integran esa nómina no fueron convocadas a este debate, con lo cual, se preguntó ¿de qué manera pudo haber controlado esa prueba la Sra. RAMÍREZ?, y consideró que de ninguna.

Por ello, entendió la defensa que esa determinación de deuda no puede ser utilizado en contra la Sra. RAMÍREZ y, al excluírsele, no habiendo otra línea de prueba independiente que permita llegar a la conclusión para la determinación de la deuda, es que no puede tenerse por probado el ilícito y, en consecuencia, corresponde su absolución.

Por otra parte, sostuvo la defensa que el hecho que la determinación de la deuda le haya sido imputada únicamente al Sr. LIOTTI, es decir, no se la haya incluido a la Sra. RAMÍREZ y luego se haya utilizado esa determinación para sostener la acusación penal, ha derivado en una afectación insalvable del derecho de igualdad (de que todas las personas tengan los mismos derechos en las mismas situaciones; igualdad es para todos los casos idénticos, cfr. fallo “Napoli” de la CSJN), garantía que el Estado Nacional tiene la obligación de velar incansablemente, desde todos sus ámbitos de actuación. Y dijo ello porque a la Sra. RAMÍREZ ahora se le dice que evadió el pago de aportes, y en aquel momento no se le dijo ello. Qué causó esto (según consideró): que la Sra. RAMÍREZ no tenga los mismos derechos que otras personas que estaban en su misma situación. Por ejemplo, no tuvo la posibilidad concreta de acceder a los institutos de extinción de la acción penal que regula el Código Penal y otros, como la Ley de Solidaridad, no contó con la posibilidad de adherir a un plan de pagos, pagar por completo, llegar a un acuerdo conciliatorio, etc. Así, como vemos, todas las personas que poseen causas por evasión impositiva tuvieron la posibilidad de afrontar el pago de sus deudas ante el Fisco y solicitar la extinción de la acción por esos medios. La Sra. RAMÍREZ, pese a estar imputada en los mismos términos, jamás tuvo esa posibilidad. ¿Por qué? Porque la AFIP, es decir, el Estado, así lo dispuso.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Por ello, entendió que esa determinación de deuda tampoco puede ser utilizada en su contra por habérsele afectado el derecho a la igualdad y, ello, también deriva en que se deba dictar la absolución de su asistida.

Aclaró que por esto no estaba planteando la nulidad de la determinación de deuda, sino que esa determinación de deuda no puede ser valorada en contra de ella, pero no son nulidades.

En tercer término, sólo para el caso que el Tribunal entienda que se encuentra probado el hecho y configurado el tipo penal en juego, el Sr. Defensor postuló la absolución de RAMÍREZ en orden a no haberse demostrado su participación en él, con el grado que la acusación que le ha dirigido.

Dijo que, tratándose de un hecho de delicta propia, no se halla comprobada con el grado de certeza que la etapa requiere, la calidad de empleadora por parte de su asistida, ni de su capacidad para tomar la decisión necesaria para concretar la conducta omisiva en el pago de los aportes.

Para ello, dijo que reconocía que no se ha alcanzado la misma certeza negativa que en los puntos anteriores, pero sostuvo que sí prevalecía un estado de duda suficiente como para impedir el dictado de una condena.

En ese sentido, refirió que es cierto que muchas de las personas que declararon la señalaron con el rol de dueña, pero no todos los testimonios han sido en ese sentido. De hecho, según indicó, hay varios testimonios que han sido contrarios a eso.

Antes de pasar a esos testimonios, sostuvo que hay algunos que no pueden ser valorados (como el de Cardozo o el de Matías Aguirre). Este último, no solo dijo que RAMÍREZ era la dueña, sino que incluso dijo que pasaba a buscar la recaudación todas las noches. Esto, en contra de todas las declaraciones que habíamos escuchado; incluso la persona que tenía a su cargo, o su función pasar a buscar la recaudación (Falconier, Araniega, Barbieri), dijeron lo contrario: que ellos iban a buscar la recaudación, y se la llevaban a Liotti al domicilio de Rivadavia. Entonces, Aguerre nos miente, no dijo la verdad (esto es una cuestión matemática, es una declaración contra tres declaraciones; que encima esas tres declaraciones dijeron que era su función específica la de buscar la



#32859976#347198392#20221027213627864

recaudación). Otra declaración que no debe ser tomada en cuenta es la de Ojoli (conforme ya lo dijo).

Agregó en este punto, que quizás los testigos Aguirre y Ojoli declararon en la forma en que declararon, señalando con tanto énfasis a su asistida como su empleadora. Quizás, y esto es habitual en las declaraciones que se dan en sede penal, quisieron descargar un poco de la responsabilidad que le atribuyeron otros testigos a ellos. Por ejemplo, el testigo Orellano dijo que había sido Matías Aguirre quien la había ordenado hacerse monotributista, Peralta dijo que fue Aguirre quien lo hizo entrar, Alanis dijo que la entrevista la tuvo con Ojoli y que no tuvo contacto con Ramírez ni Liotti, Laurelli dijo que dejó su CV y lo llamó Ojoli, y que éste le pidió que se haga monotributista, que a Ramírez la había visto una sola vez. Entonces quizás todas estas cuestiones que los señalaban a estos testigos con un rol distinto del que dijeron tener, hayan hecho mella en su relato, en su intención de desligarse de cierta responsabilidad.

Ahora bien, sostuvo la defensa que muchos testigos que declararon y que pertenecían a los locales (que es donde más se la ubica a su asistida), introdujeron algunas cuestiones que tienden a dudar acerca de cuál era el rol de su asistida. Por ejemplo, recordó que Orellano dijo que no trataba con ella, que rara vez la vio en los locales; Marrero dijo que alguna vez pasó por el local; Almada dijo que a Ramírez la vio en alguna oportunidad; Herrera dijo que no sabe quien estaba a cargo de la administración; Torres que la vio dos o tres veces en su vida; Barrios que alguna vez la vio, que lo invitaron a un cumpleaños; Azcarate dijo que alguna vez la vio en el local.

Así, entendió que toda esta gente estaba en los locales y no la señalan a su asistida con ese rol preponderante que se le pretende endilgar.

Además, dijo que a la par de estos testimonios, tenemos otros que dicen totalmente lo contrario, y -según entendió- es importante escuchar estos otros porque son de la gente que más tiempo estuvo trabajando con esta empresa de calzados. Así, recordó que Alberto Cardozo dijo que nunca habló con RAMÍREZ, que iba al lugar de trabajo como esposa de LIOTTI; Fermín Jourdan dijo que trabajó desde el año 92, que fue encargado en un momento, y que no sabe que función tenía RAMÍREZ, que solo la vio pasar; Falconier dijo que pasaba a buscar la recaudación y se la llevaban a LIOTTI, que rara vez se la dejaban a RAMÍREZ y solo







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

cuando no estaba LIOTTI; Aranega dijo que retiraba la recaudación y se la daba a LIOTTI, que no recordaba dársela a la Sra. RAMÍREZ; González Cardozo dijo que trabajaba desde el 97 y no sabe qué rol tenía RAMÍREZ, que no tiene trato con ella; Barbieri dijo que la recaudación se la llevaban a LIOTTI, que tal vez alguna vez se la dejaron a Liliana RAMÍREZ pero que no lo recuerda.

Así, el letrado de la defensa indicó que esta gente que trabajaba desde hacía mucho, hace 30 años, no le otorgó un rol preponderante a la Sra. RAMÍREZ, lo que resulta más que llamativo.

Recordó que *“esta gente no solo trabajaba en los talleres, sino que también participaba de reuniones sociales, estaba en el grupo de WhatsApp, es decir, todos estos conocimientos que tenían de ella”*, por lo que, de haber corroborado el rol que se le pretende dar, así lo habrían expuesto en este debate, sin embargo, dijeron que RAMÍREZ estaba allí y que no sabían qué rol cumplían; difícilmente una empleadora, una dueña, pueda pasar desapercibida para personas que tienen 30 años trabajando en la empresa.

Además, recordó la defensa que otra de las cuestiones que surgió de este debate es cómo se incorporó la Sra. RAMÍREZ a esta empresa. Indicó que ella misma manifestó que comenzó a trabajar desde temprana edad, y que luego formó una relación con LIOTTI; que si bien pasó a estar en una situación distinta (se habían casado y actualmente conviven). Esto, dijo el defensor, fue corroborado con el testigo Lara, que dijo que trabaja hace 30 años en la empresa, quien dijo que LIOTTI era una empresa familiar de larga trayectoria, y que Liliana allá por el 95/98 trabajaba en las mismas condiciones que las de él; que luego se casó con LIOTTI y allí empezó a hacerse cargo de ciertas cuestiones que tenían que ver con los locales (esto es, empezó a tener otra actividad distinta a la que venía teniendo). Esta es la forma en que se incorpora RAMÍREZ a la empresa (no solo lo dijo ella, lo dice también ese testigo).

Así, el defensor valoró que, obviamente, cuando uno se incorpora a un negocio familiar (a raíz de mantener un vínculo con alguno de ellos), empieza a cumplir ciertos roles que no tienen que ver con el de un simple empleado, o roles menores, sino que empieza a tener cierto rol de responsabilidad por tener cierta confianza con las personas dueños del negocio, y esto explica el por qué del rol que ocupó la Sra. RAMÍREZ (en



#32859976#347198392#20221027213627864

concreto, por qué ocupó el rol que tuvo en los locales comerciales, más allá de las salvedades ya efectuadas).

Esto, incluso, dijo el defensor que lo explicó la propia RAMÍREZ, cuando indicó el rol que tuvo con relación al diseño y al marketing. Respecto a ello, sin embargo, aclaró lo siguiente. Indicó que se dijo que porque tenía esta función (de diseño), también estaba a cargo de los talleres. Esta afirmación, sin embargo, fue en contra de toda la prueba producida en el debate, puesto que la gente que trabajó en los talleres ni la menciona a ella, ni la conocían como dueña, dijeron que no tenía ningún rol, que no les daba ninguna orden. Entonces, se preguntó cómo es que decimos que los testigos no mienten, pero mienten. Así, consideró que estar a cargo del diseño es otra cosa, tiene que ver con pensar la modalidad de los zapatos, la modalidad de la venta (cuestiones de marketing), vidrieras, muestrario, la forma en que deben mantenerse los locales, pero el desempeño de estas tareas nada nos dice sobre su rol de dueña o empleadora.

De hecho, consideró que en toda estructura tenemos personas que tienen distintos roles. Incluso, recordó que el testigo Jourdan o Cardozo dijeron ser haber sido encargados y se preguntó por qué entonces no están imputados, si ellos también impartían ordenes. Así, refirió que se había creado una ficción que el rol que tenía ella la ubicaba como dueña, pero sostuvo que ello no era así, aunque ella tenía un rol en el que sí podía impartir órdenes (como en toda estructura).

Citó como ejemplo lo que es una defensoría, juzgado o fiscalía, y dijo que *“Todos impartimos órdenes a quienes puedan estar por debajo en la jerarquía”*. Dijo que, de la misma forma, esto también se da en toda estructura societaria: quien da ordenes no necesariamente es el dueño de esa estructura.

Así, la defensa entendió que estas contradicciones, que se corroboraron las declaraciones testimoniales, hacen que exista -desde el punto de vista del derecho penal- un estado de duda que no permite dictar una sentencia condenatoria en contra de su asistida, justamente por no haberse demostrado con el grado de certeza exigido para esta etapa procesal que su asistida haya ocupado el rol que la ley requiere para ser responsable de la evasión del pago de aportes.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

En consecuencia, entendió que su asistida -subsidiariamente- también debía ser absuelta, por una cuestión de duda si se quiere, sobre el grado de participación (consideró que no se ha demostrado que haya sido coautora de este delito, ni participe en ninguna calidad).

Por último, si nada de lo anteriormente solicitado por esa defensa llegara a prosperar, el letrado defensor consideró que, en caso de recaer condena, la misma no podía exceder la mínima prevista para el delito que se le enrostra, es decir, 2 años.

Para ello, en primer lugar, consideró la escasa entidad del delito. Indicó que debía tenerse en cuenta que la norma establece un mínimo de 200.000 pesos y que, en algunos de nuestros períodos, apenas se supera ese monto (en el peor de los casos es del doble del mínimo, 400.000). Por ello, entendió que no hay un delito que sea grave y que amerite subir, como sostiene la querella, a casi el doble, el monto de la pena. Agregó que esto quedó plasmado cuando se planteó la suspensión del juicio a prueba, en cuyo marco la fiscalía dictaminó entendiendo sobre la escasa entidad del delito.

Refirió que otra cuestión que apuntó la acusación para fundar sus pedidos de pena es la importancia del sistema previsional y las cargas sociales; qué representa sobre el punto de vista de los derechos humanos. Si bien el defensor mencionó que no cuestionaría esas apreciaciones, refirió que -desde el punto de vista fáctico, en nuestro caso-, aun si los imputados fueran condenados por estos hechos, aun si fuesen responsables por estos hechos, igualmente se pagaban los monotributos, y esos monotributos -y esto lo aclaró uno de los testigos, que es inspector de la AFIP- también están conformados por una carga tributaria y de obra social. Así, entendió que todas esas cuestiones de las cargas sociales como protección de los derechos humanos estaban cubiertas, bajo otra modalidad (que era el monotributo), pero todas las personas que estaban como monotributistas tenían acceso a una obra social (de hecho la tenían), tenían derecho a una jubilación (de hecho se jubilaban). Entonces, desde el punto de vista abstracto se puede sostener cualquier cosa, pero esas afirmaciones hay que bajarlas al caso en concreto, y aquí no se da esa agravante que nos postula la acusación; por lo que tampoco podemos apartarnos del mínimo.

También recordó que se dijo que había un aprovechamiento de la gente, que estaba en una supuesta situación de vulnerabilidad, y la



#32859976#347198392#20221027213627864

verdad es que sostener eso también es un aspecto muy subjetivo que ni siquiera se apreció en los testimonios de las personas que declararon. Dijo que solo por nombrar dos testigos, Quevedo y Gonzalo González, mencionaron que les pagaban muy bien. El último dijo que pasó a ganar el doble de lo que ganaba en su trabajo anterior. Nadie, ninguno de los testigos que declaró en el juicio mencionó nada respecto de algún tipo de explotación laboral, incluso dijeron que tenían un plus los jueves, que los domingos se les pagaba doble; nadie habló de ordenes fuera de lugar, de maltrato laboral. Entonces, sostener que estas personas fueron abusadas es también negar lo que escuchamos en el debate. En consecuencia, aquello tampoco constituye una agravante que permita alejarse del mínimo.

Por otro lado, además, el señor defensor indicó que sí tenemos atenuantes. En primer lugar, las condiciones personales de su asistida; es una persona cercana a los 50 años, de demostrada capacidad laboral, que ha trabajado toda su vida, es una persona sin antecedentes penales, de costumbres ordinarias, comunes a las nuestras, no hay una expectativa de que pueda seguir delinquiendo, no es una persona “peligrosa” (aunque esto tampoco pueda constituir hoy en día un parámetro válido para agravar la penal).

Es decir, sostuvo que es una persona que no tiene ningún sentido de que se le imponga una pena de efectivo cumplimiento como ha sostenido la querella, no entiende cuál sería la ventaja de que la Sra. RAMÍREZ estuviera presa; le parece que sería mucho más deformante incluso de ser así.

Agregó que es la primera causa que su asistida tiene, como dijo, que en todo momento los imputados estuvieron a derecho, participaron de todas las audiencias de debate, estuvieron a disposición, que cada vez que tuvieron que ausentarse pidieron permiso. Es decir, tampoco hay elementos de que pueda haber algún comportamiento elusivo del accionar de la justicia o que sea necesaria su reclusión.

Estas cuestiones atenuantes, según sostuvo, también nos permiten demostrar que, de existir condena, no correspondería apartarse del mínimo.

Por consiguiente, dejó así formulado su alegato, teniendo en cuenta los pedidos absolutorios efectuados en forma escalonada, y el





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

planteo subsidiario de que, de existir condena, no se imponga una pena superior a la del mínimo.

### **B) Defensa técnica de Marcelo LIOTTI.**

En oportunidad de efectuar su alegato, la defensa de Marcelo Julián LIOTTI postuló la absolución de su asistido.

Consideró que no se ha acreditado el dolo, que esta etapa procesal exige, de que su asistido, haya obrado con total conocimiento de que su accionar implicaría una presunta evasión al pago de aportes y contribuciones destinados al sistema único de la seguridad social, en relación a los periodos mensuales junio del 2013, diciembre 2013, y los comprendidos entre febrero y marzo del 2015.

Consideró que lo que aquí es importante es verificar la verdad material que rodea los hechos que nos ocupan, y con base en el principio de primacía de la realidad, cabe desentrañar que la verdadera naturaleza jurídica de la relación existente, deviene de naturaleza netamente comercial, dada por la prestación de servicios, que hoy resultan objeto de cuestionamiento.

Al respecto, indicó que no puede desconocerse la práctica habitual y consensuada del monotributo, es sabido que es el propio Estado quien utiliza dicha figura, empleando en multiplicidad de oportunidades, a personas bajo esta forma de contratación.

Así, memoró que el art. 5 de la ley 27.430 reprime con pena de prisión de 2 a 6 años, al obligado que mediante cualquier ardid o engaño evadiera al fisco nacional, y señaló que -en el caso de autos- dicha circunstancia no se encuentra corroborada, puesto que no se advierte ardid o engaño empleado de parte de su asistido, ya que ha quedado demostrado, como lo dijera el testigo Mozetic, y que fuera corroborado por varios de los testigos citados al debate, que era el mismo LIOTTI quien abonaba mensualmente los pagos del monotributo, aportando idéntico domicilio fiscal para los asociados, en el mismo banco para cada uno de ellos. Tal cual lo afirmara el testigo Onetto en su declaración de fecha 13/05/22 los pagos eran por lote: mismo banco, mismo día, misma hora.

Así, mencionó que “¿qué ardid o engaño habría ahí, si era el mismo Liotti quien mes a mes concurría a pagar el monotributo?”



#32859976#347198392#20221027213627864

Además, la defensa mencionó que no es posible desconocer el compromiso asumido por las partes, nacido del libre acuerdo de voluntades, quienes convinieron que se ejecutaría bajo determinada modalidad que no puede, al menos a criterio de esa defensa, calificarse de fraudulenta. A título de ejemplo y a fin de no ser sobreabundante, dijo que da cuenta de ello el testigo Herrera, quien refirió en la audiencia de debate que no cumplía horarios, iba cuando quería, y por consiguiente cobraba cuando iba, que ello lo arreglaba con sus otros compañeros.

Así, la defensa indicó que -de acuerdo a ello- queda demostrado que no se advierte relación de dependencia alguna, en los términos sindicados por las partes acusadoras.

Además, sostuvo que -a diferencia de los que refiriera la querella- se escuchó a 36 personas en el marco del debate que, a criterio de esa defensa, no se mostraron vulnerables, sino por el contrario, eran personas adultas, con decisión propia, varios de ellos hoy profesionales, sin signos de sumisión alguna.

En consecuencia, la defensa sostuvo que se advierte un error de derecho en el caso, por cuanto el obrar de su asistido, tal como lo manifestara el mismo LIOTTI en la audiencia, demuestra a las claras un vicio en su voluntad, lo que se traduce en la ignorancia o concepto equivocado que ha tenido de la ley.

En ese sentido, indicó que -según el concepto de error de derecho que brinda el diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales de Manuel Ossorio- se hace referencia a: la ignorancia de la ley o de la costumbre obligatoria. Y tanto lo constituye el desconocimiento de la existencia de la norma -es decir, la letra exacta de la ley- como de los efectos de un principio legal se deducen.

Tal es así, sostuvo la defensa, que el propio LIOTTI refirió que luego de los allanamientos tomó conocimiento de que la práctica tan habitual del monotributo no correspondía, y consecuentemente, a posteriori, regularizó la situación de los empleados ante la AFIP.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Así entonces, consideró la Sra. Defensora que no se advierte el elemento subjetivo (el dolo) y que, por consiguiente, debe aplicarse, al menos, el beneficio de la duda en favor de su asistido, conforme al art. 3 del CPPN, y estarse a lo más favorable por el principio in dubio pro reo, decretándose la absolución del Sr. LIOTTI.

Por otra parte, la defensa de LIOTTI manifestó que, a contrario de lo sostenido por los acusadores, los montos correspondientes a la imputación de los períodos 06/2013, 12/2013 y 02/2014 a 03/15, fueron calculados sobre base presunta.

Sobre ello, manifestó que coincidía plenamente con su lo dicho por el letrado defensor de RAMÍREZ, Dr. Swanston, quien ha expresado que no hemos podido determinar sobre base cierta si los 122 supuestos empleados que la Administración Federal de Ingresos Públicos ha imputado a su asistido han prestado servicios, y han cumplido con los 3 pilares básicos que tanto la querella como la fiscalía solicitan para dar entidad a una relación laboral (dependencia o subordinación técnica, económica y jurídica).

Mencionó que dice esto porque, tanto la fiscalía como la querella solo han podido demostrar en el debate, la existencia de una supuesta relación de dependencia de tan solo 36 testigos que han declarado en este juicio oral y no los 122 monotributistas inicialmente denunciados por la AFIP. Por ende, según indicó, los montos que si bien son coincidentes en ambos acusadores que valieran para luego determinar la culpabilidad del Sr. LIOTTI serían montos de presuntas relaciones laborales que en este debate no hemos podido confrontar. Porque aquí es la parte acusadora quien tiene la obligación per se de demostrar el hecho ilícito.

En ese sentido, y tal lo expresado por el Dr. Swantson, la defensa de LIOTTI indicó que se desconoce el motivo del por qué los acusadores han prescindido de dicho elemento probatorio, y descansando en algunas testimoniales y en un supuesto convenio colectivo de trabajo, pero lo cierto es que la supuesta certeza de lo oído por los 36 testigos no puede servir de analogía para los restantes 86 monotributistas.



#32859976#347198392#20221027213627864

Así las cosas, consideró que no se ha acreditado que la evasión de aportes y contribuciones que se le atribuye a su asistido, haya alcanzado el monto requerido por el tipo penal. Es decir, indicó que si la condición objetiva de punibilidad enrostrada a su asistido es de \$200.000 por cada periodo fiscal, conforme la letra del art. 5 de la ley 27.430 y teniendo en cuenta que de la prueba colectada en este debate (36 testimonios) nos encontraríamos como ejemplo, que del periodo de mayor evasión, que sería marzo de 2015 de \$325.304, solo se habría evadido la suma de \$81.250, con lo cual la condición objetiva de punibilidad no se vería superada en el caso, y ello lo hace extensivo a los demás periodos ya que ha tomado el de mayor valor.

Por ende, al no haberse alcanzado el monto establecido por el tipo, nada debe analizarse en torno a dicho injusto penal, ya que los montos en los que fundaran su acusación tanto la fiscalía como la querella, involucraron a un universo de relaciones laborales, cuya existencia no ha sido demostrada en este debate, carga que le pertenece a las partes acusadoras.

Sobre ello, aclaró que los formularios confeccionados por la parte aquí querellante al efectuarse los distintos allanamientos, no pueden ser tomados por el Tribunal analógicamente como una testimonial recibida en sede judicial, máxime con el grado de certeza que requiere este estadio procesal.

En ese sentido, explicó que dichos formularios no pueden ser pruebas por sí sola, pues entonces se desvirtuaría la necesidad de un debate oral y público. Remarcó que aquí no puede dejar de citar jurisprudencia que no hace más que confirmar lo dicho por esa parte, en cuanto a que *“la incorporación por lectura de lo que declararan en la etapa de instrucción... no es legalmente pausable porque no fue debidamente controlado por la defensa en otro momento del proceso, por lo que lleva razón a la defensa y esa prueba debe ser excluida”* (voto del Dr. Bruzzone, causa Torres CCC 4894/2014 registro 824/2015). Asimismo, en fallo BAREZ, ha sido el distinguido Dr. Llerena quien sostuvo que *“no solo la defensa no tuvo oportunidad de controlar esa prueba de cargo, sino que, además, si se prescinde de tal testimonio, el resto de los elementos de*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*prueba valorados por el tribunal no permite acreditar la culpabilidad de la encartada"* (FALLO BAREZ, CCC, 76985/2016, REG 182/19).

Remarcó que de las tareas desempeñadas en pos del ejercicio de defensa efectiva, una que es crucial es la facultad de entrevistar e interpellar testigos durante el debate. Recordó que la CADH establece en su apartado f) del art. 8, inc. 2 el derecho de la defensa a interrogar a los testigos que deban hacerse presente en el tribunal. En esta inteligencia puede observarse que la convención consagra una obligación de base para el Estado parte, es decir, que al haber suscripto el tratado nos obliga a asegurar la posibilidad de, ante la jurisdicción, contradecir la prueba de cargo durante la sustanciación del proceso. Allí materializaríamos los principios del contradictorio e igualdad procesal. Y considera que la etapa del debate es el momento procesal en el que efectivamente debe de llevarse a cabo el contradictorio, es el ámbito en el que debe reinar una plena igualdad de armas, para lograr una contienda justa, de la que resulte una sentencia equilibrada.

Así, indicó que no entendía por qué los acusadores tanto particulares como estatales han omitido demostrar con el grado de certeza necesaria en esta etapa, de la relación laboral de su asistido con los supuestos 122 monotributistas o asociados de ASH, habiendo solo escuchado un escaso 25% de monotributistas en este debate.

Resaltó que los restantes 91 ni siquiera se les ha recibido en declaración testimonial ante el juez de la etapa que nos precediera, quizás en el entendimiento de que serían escuchados en la etapa de juicio oral, y reiteró que desconoce por qué las partes acusadoras han prescindido de ello.

Entonces, dijo la defensa, la discusión se suscita en la contraposición con la figura de la incorporación por lectura de formularios preimpresos de la AFIP, con datos proforma, toda vez que dichas declaraciones nunca fueron controlados por esa parte ni por la defensa de RAMÍREZ ni por el Sr. Juez. Sostuvo que la pretensa incorporación por lectura que utilizaron los acusadores para fundar su acusación, no se condice con la jurisprudencia sentada por la CSJN en el precedente BENITEZ al sostener que el tribunal de juicio fundó la sentencia de



condena en prueba de cargo decisiva que la defensa no tuvo oportunidad adecuada de controlar, ello en desmedro del derecho consagrado por los arts. 8, inc. 2, apdo. f) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.3e del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos.

Así, remarcó que no puede dejar pasar por alto que la presunta relación laboral de los 91 monotributistas no escuchados en este debate, no pudo ser probada toda vez que se careció de dichos testimonios, los cuales no fueron controlados por esta parte.

Al respecto, señaló, tal como lo efectuara este Tribunal en los autos “Calvo, Guevara, Vijarra y otros” de este Excmo. Tribunal, que la Cámara Federal de Casación Penal estableció que el juicio oral resulta ser el escenario propicio para dilucidar los extremos fácticos controvertidos, ya que es la *“... oportunidad procesal en la que, concentrados en una audiencia pública los sujetos procesales y los medios de prueba reunidos a lo largo de la investigación preliminar, se presenta como el ámbito natural en el que deberá reconstruirse el hecho sometido a estudio del modo más aproximado posible a la verdad histórica que se afirma como ocurrida y la adecuación típica que en definitiva corresponda...”* (Sala IV, Reg. 1048/19, del 29/5/2019, voto del Dr. Gustavo M. Hornos). Dicha circunstancia, según dijo, no ha ocurrido en este debate.

Así, la defensa sostuvo que, al no haberse probado la relación laboral de los monotributistas no escuchados y al no haberse alcanzado el monto requerido del delito enrostrado a su pupilo, correspondía dictar la absolución de su asistido.

Por otra parte, y en respuesta a las expresiones que efectuara la querella, la Sra. Defensora indicó que quería aclarar un punto que le había quedado resonando desde el momento de su alegato, precisamente cuando, al momento de solicitar la pena respecto del Sr. LIOTTI, en reiteradas oportunidades y con un énfasis que sorprendió a esa defensa, se había sostenido que su asistido al momento de prestar declaración había mentido.

Esta aclaración, indicó la defensora, viene a colación porque el ejercicio del derecho de defensa que usó su asistido fue ponderado al





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

momento de pedir una pena que resultó excesiva, y llamativamente de efectivo cumplimiento, con lo que claramente queda evidenciado el error en el que se incurre al momento de explicitar qué circunstancias fueron valoradas como agravantes para individualizar la pena en el monto de tres años y seis meses de prisión.

En ese marco, manifestó que quería recordarles a los Sres. querellantes que el capítulo IV de nuestro Código Procesal Penal de la Nación establece celosamente las formas y condiciones en que se deben recibir las declaraciones del imputado. Así, en ningún momento se le requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra el coacción o amenaza, ni medida alguna tendiente a obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, porque claramente, las inobservancias de estas prohibiciones acarrear la nulidad del acto. La misma no es ni debe ser tomada como un medio de prueba, sino como un acto de defensa, mediante el cual se encuentra posibilitado de expresar lo que considere conveniente en su descargo (conf. Cafferata Nores, José, La Prueba En El Proceso Penal, 2a ed., De Palma).

En consecuencia, la defensa manifestó que la querella realizó esa incorrecta aseveración, al tomar la declaración de su asistido como una mentira, lo que entendió que viola el principio constitucional receptado por nuestra carta magna en el art. 18, como así también constituye violación a los diferentes pactos internacionales receptados en nuestro país con jerarquía constitucional, a saber art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica, art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 14 inc 1º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En efecto, si la Constitución Nacional señala claramente que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, el lógico alcance de este precepto, como el reverso de una moneda significa que de ningún modo la mendacidad del imputado puede acarrearle consecuencias: de otro modo, sería ésta una vía indirecta para llegar al mismo fin aberrante que el constituyente quiso vedar, cual es forzar al imputado a confesar su delito.



#32859976#347198392#20221027213627864

Por lo tanto, indicó la Sra. defensora, las distintas versiones que pudiera haber dado el imputado, sus contradicciones y hasta sus mentiras, no pueden ser computadas en su contra.

Mas allá de lo aclarado en cuanto a la posible mendacidad de lo dicho por LIOTTI (según los dichos de la querella), la Sra. defensora aclaró que su asistido nunca mintió, simplemente se remitió a la relatar la realidad de los hechos y de la actividad comercial por el realizada.

En subsidio, y para el caso de que el Tribunal no concuerde con los argumentos vertidos en su alegato, la defensa de LIOTTI solicitó que -al momento de resolver- el suscripto se aparte de los montos de pena solicitados tanto por el Sr. Fiscal, como por el representante de la querella, por ser estos excesivos, y principalmente sin fundamento, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa. Sobre la determinación de la pena, deben regir pautas mensurativas del 40 y 41 CP.

En ese sentido, indicó que al momento de individualizar la pena la parte querellante no ha mencionado ningún atenuante a ponderar, no así el Sr. Fiscal General que, si bien han realizado una valoración de atenuantes y agravantes, lo ha hecho en forma genérica.

Consideró que en el caso concreto del Sr. LIOTTI nada justifica una pena de la cuantía excesiva requerida por el Sr. representante de la querella o la solicitada por el Sr. Fiscal.

Sobre ello, recordó, que oportunamente el letrado particular que le precediera en el ejercicio de la defensa del Sr. LIOTTI, solicitó la suspensión del juicio a prueba, la cual fuera concedida por el representante del Ministerio Publico Fiscal, en el entendimiento de que, ante la escasa afectación del bien jurídico tutelado, correspondía la concesión de la misma. Allí se hubo analizado la base presunta que había hasta ese momento sobre la determinación de la deuda, la cual a posteriori fue corroborada por el perito Marcelo Eduardo Domínguez del cuerpo de peritos contadores de la CSJN, confirmando el monto de la “escasa afectación” a la que hiciera alusión el Sr. Fiscal en la oportunidad de celebrarse la audiencia del 293 CPPN, ya que se concluyó que era el mismo





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

de \$4.700.253,83, cuyo monto fue el idéntico que se mencionara en los requerimientos de elevación a juicio.

Además, mencionó que debe tenerse en cuenta la falta de antecedentes penales del nombrado como así también que el mismo fue una persona que siempre ha estado a derecho durante el extenso proceso penal.

Consideró que ambas propuestas de pena, violan el principio de proporcionalidad porque alcanza un quantum que resulta irrazonable (mucho más, la de 3 años y 6 meses que solicitaron los representantes de la querella).

Por ello, teniendo en cuenta las circunstancias particulares que atañen a la vida familiar y profesional de su asistido, la defensa estimó que en caso de recaer condena la misma debería ser de 2 años de prisión en suspenso.

En suma, consideró que en el hipotético caso que se aplique una sanción ésta deberá conformarse por la evaluación de pautas objetivas, brindadas por los extremos contenidos por la figura penal por la cual se responsabiliza a LIOTTI y, por pautas subjetivas, derivadas de las singularidades del nombrado, más allá del hecho atribuido y en punto a su personalidad, su proyecto de vida y demás circunstancias singulares, propias de cada caso.

De este modo, consideró que se debe ponderar la ausencia de antecedentes penales, y que la conducta de su asistido ha sido siempre ajena al accionar ilícito, da cuenta de una vida arreglada a derecho, con respeto y alejado a los problemas con la ley.

Por todo ello, solicitó que, en caso de recaer condena, la misma sea por el mínimo del injusto que se reprocha, es decir, 2 años; aunque si la pena impuesta superase el mínimo, solicitó que la misma no supere el plazo de 3 años, y cuyo cumplimiento sea dejado en suspenso.

En conclusión, por todo lo indicado precedentemente, la defensa de LIOTTI solicitó que: 1) se absuelva a su asistido por los fundamentos vertidos a lo largo del alegato; 2) si ello no prosperase, que, en caso de recaer condena, se imponga la pena mínima legal o, si superase,



#32859976#347198392#20221027213627864

pena en suspenso; 3) finalmente, y encontrándose comprometidas las garantías del debido proceso legal y defensa en juicio, formuló expresa reserva de recurrir en casación y del caso federal.

**8) Réplicas, dúplicas y últimas palabras:**

En primer lugar, cabe recordar que las partes acusadoras expresaron que no harían uso de su derecho a réplica; motivo por el cual no hubo tampoco dúplica alguna. Asimismo, al darle la oportunidad de decir las últimas palabras, los imputados Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ manifestaron que no harían uso de ese derecho.

**9) Pruebas incorporadas:**

En el marco del debate se han incorporado por su recepción directa en las respectivas audiencias de debate, por lectura y/o por exhibición, los elementos de convicción que se enunciarán a continuación:

1) Fichas dactiloscópicas de los imputados.

2) La totalidad de la documentación y elementos mencionados por el Sr. Fiscal en los puntos II.2 al II.7 de su ofrecimiento de prueba.

3) Denuncia efectuada por Santiago MOZETIC, en calidad de Jefe de la Sección Penal dependiente de la Dirección de Contencioso de los Recursos de la Seguridad Social, obrante a fs. 1/11.

4) “Informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial” respecto al registro de las marcas “ASH”, “ARGENTINIAN SHOES”, “LIOTTI” y “CALZADOS LIOTTI”.

5) Informes AFIP, obrantes a fs. 39/56, fs. 67/376, fs. 381/384, fs. 386/444, fs. 445/447, fs. 895/1042, fs. 1054/1373, fs. 1376/1382, fs. 1385/1504, fs. 1505/1511, fs. 1576/1591, fs. 1592/1599, fs. 1606/1620, fs. 1621/1625, fs. 1644/1649, fs. 1653/1663, fs. 1666/1696, fs. 1701/1711, fs. 1720/1730, fs. 1733/1739, fs. 1743/1744, fs. 1748/1815 y fs. 1912.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

6) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Cuenca 2921, obrantes a fs. 511/523.

7) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Malabia 1667, obrantes a fs. 528/537.

8) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Av. Santa Fe N° 3507 de esta ciudad, obrantes a fs. 541/548.

9) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Florida N° 702 de esta ciudad, obrantes a fs. 549/590.

10) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Lavalle N° 1502 de esta ciudad, obrante a fs. 561/569.

11) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Av. Corrientes 1701 de esta ciudad, obrante a fs. 570/583.

12) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19/03/2015 practicado en el local comercial sito en Av. Rivadavia N° 3982 de esta ciudad, obrante a fs. 584/594.

13) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local comercial sito en Av. Olazábal 5113 de esta ciudad, obrante a fs. 595/604.

14) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local comercial de Av. Las Heras N° 2285 de esta ciudad, obrantes a fs. 605/615.

15) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local comercial de Av. Córdoba 4498 de esta ciudad, que adjunta, entre otros, acta de procedimiento, obrantes a fs. 615/629.



#32859976#347198392#20221027213627864

16) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local comercial de Uruguay N° 671 esta ciudad, que adjunta, entre otros, acta de procedimiento, obrantes a fs. 630/642.

17) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Corrientes N° 565 de esta ciudad, obrante a fs. 643/657.

18) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Corrientes N° 805 de esta ciudad, obrante a fs. 658/677.

19) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Callao N°61 de esta ciudad, obrante a fs. 678/690.

20) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Callao N° 298 de esta ciudad, obrante a fs. 691/705.

21) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Rivadavia N° 5402 de esta ciudad, obrante a fs. 706/724.

22) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. La Plata N° 37 de esta ciudad, obrante a fs. 725/739.

23) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en La Pampa N° 2321 de esta ciudad, obrante a fs. 740/753.

24) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Callao N° 785 de esta ciudad, obrante a fs. 754/760.

25) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en Av. Santa Fe N° 1544 de esta ciudad, obrante a fs. 761/774.







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

26) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el domicilio sito en Av. Portela N° 3031 de esta ciudad, obrante a fs. 775/789.

27) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en la calle Lafuente N° 2786 de esta ciudad, obrante a fs. 790/819.

28) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el local sito en la calle Gual N° 2340 de esta ciudad, obrante a fs. 820/853.

29) Actuaciones relativas al allanamiento de fecha 19 de marzo de 2015 practicado en el domicilio sito en la calle Lafuente N° 2780 de esta ciudad, obrante a fs. 854/889.

30) Informe expedido por la IGJ respecto de ASH CALZADOS, obrante a fs. 1520/1530.

31) Informes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad social, obrantes a fs. 1545/1575.

32) Informes expedidos por el Registro Nacional de Reincidencia respecto de RAMÍREZ (obranste a fs. 1639) y de LIOTTI (obranste a fs. 1641), y mediante DEOX 6879468;

33) Informes socio ambientales de Liliana Delfina RAMÍREZ de fs. 1933/1936 y de Marcelo Julián LIOTTI, obrante a fs. 1937/1940.

34) La totalidad de la documentación, actuaciones y elementos mencionados por la querella en el punto II.b de su ofrecimiento de prueba, a excepción de las piezas mencionadas en los puntos II.b) 2, 13, 14, 15, 16 y 17 del referido ofrecimiento, por las razones expresadas en el proveído de fecha 3.6.2020.

35) Los informes recolectados en función de la instrucción suplementaria ordenada con fecha 03/06/2020.

36) Resultado del examen pericial contable ordenado en fecha 29 de octubre de 2020.



#32859976#347198392#20221027213627864

37) Declaración testimonial de **Francisco Jesús Minetti**.

38) Declaración testimonial de **Santiago Mozetic**.

39) Declaración testimonial de **Jonathan Denis Novello**.

40) Declaración testimonial de **Leonardo Maximiliano Oneto**.

41) Declaración testimonial de **Laura Mariela Frías**.

42) Declaración testimonial de **Diego Prando**.

43) Declaración testimonial de **Gustavo Gabriel Griolio**.

44) Declaración testimonial de **Amalia Susana Rivero**.

45) Declaración testimonial de **Diego Ariel Demarchi**.

46) Declaración testimonial de **Claudio Fabián Ambroa**.

47) Declaración testimonial de **María del Carmen Yani**.

48) Declaración testimonial de **Mariano Alejandro Vitelli**.

49) Declaración testimonial de **Graciela Noemí Díaz**.

50) Declaración testimonial de **Regina Laginestra**.

51) Declaración testimonial de **Verónica Gauna**.

52) Declaración testimonial de **Jorge Jonatan Cardozo**.

53) Declaración testimonial de **Andrés Javier Pérez**.

54) Declaración testimonial de **Jonatan Leonel Gilio Ledesma**.

55) Declaración testimonial de **Luis Antonio Santos**.

56) Declaración testimonial de **Emanuel Antonio Mussin**.

57) Declaración testimonial de **Alex Michael Rodríguez Paredes**.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

59) Declaración testimonial de **Diego Javier Orellano**.

60) Declaración testimonial de **Rubén Darío Ríos**.

61) Declaración testimonial de **Hernán Agustín Tropeano**.

62) Declaración testimonial de **Guillermo Mario Stefano**.

63) Declaración testimonial de **Esteban Javier Marrero**.

64) Declaración testimonial de **Oscar Omar Almada**.

65) Declaración testimonial de **Jorge Manuel Herrera**.

66) Declaración testimonial de **Juan Carlos Ramírez**.

67) Declaración testimonial de **Rubén Mario Casco**.

68) Declaración testimonial de **Diego Sebastián Córdoba**

**Reggi.**

69) Declaración testimonial de **Agustín Maszong**.

70) Declaración testimonial de **Fernando Gabriel Bodart**

**Giraudó.**

71) Declaración testimonial de **Gonzalo Barila**.

72) Declaración testimonial de **Marcos Javier Peralta**.

73) Declaración testimonial de **Maximiliano Eduardo**

**Torres.**

74) Declaración testimonial de **Pablo Sebastián Barrios**.

75) Declaración testimonial de **Jonatan Adrián Nicola**.

76) Declaración testimonial de **Cristian Gabriel Rocdan**.

77) Declaración testimonial de **Santiago Ojoli**.

78) Declaración testimonial de **Jorge Alejandro Quevedo**.

79) Declaración testimonial de **Mauro Damián Salcedo**.



- 80) Declaración testimonial de **Gonzalo Javier González**.
- 81) Declaración testimonial de **Gabriela Isabel Caldentey**.
- 82) Declaración testimonial de **Cristian Samuel Azcarate**.
- 83) Declaración testimonial de **Daniel Leandro Rodríguez**.
- 84) Declaración testimonial de **Jonatan Alanis**.
- 85) Declaración testimonial de **Gustavo José Galparoli**.
- 86) Declaración testimonial de **Guido Laurelli**.
- 87) Declaración testimonial de **Leandro Matías Lete**.
- 88) Declaración testimonial de **Venancio González Cardozo**.
- 89) Declaración testimonial de **Alberto Cardozo**.
- 90) Declaración testimonial de **Fermín Jourdan**.
- 91) Declaración testimonial de **Carlos Alberto Lara**.
- 92) Declaración testimonial de **Leonardo Damián Falconier**.
- 93) Declaración testimonial de **Raúl Horacio Aranega**.
- 94) Declaración testimonial de **Lucas Emanuel Barbieri**.
- 95) Declaración testimonial de **Néstor Fabian Enciso**  
**Escurrea**.
- 96) Declaración testimonial de **Diego Alejandro Martínez**.
- 97) Declaración testimonial de **Mario Romero**.
- 98) Declaración testimonial de **Cesar Hernán Abregu**.
- 99) Declaración testimonial de **Matías Daniel Aguirre**.

## **II. Hechos acreditados:**





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

A) Los elementos de juicio producidos o incorporados al debate, valorados conforme las reglas de la sana crítica -tal como lo dispone el artículo 398 del C.P.P.N.- permiten tener por fehacientemente acreditado que Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ, evadieron el pago de los aportes y contribuciones de las personas que trabajaron como empleadas en relación de dependencia en los talleres fabriles y en los locales comerciales de la unidad de explotación que operó bajo la denominación “ASH” (*Argentinian Shoes*), dedicados a la producción y venta de calzado femenino, por los períodos mensuales de junio de 2013, diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, todos inclusive.

Fundamentalmente, la maniobra desarrollada por los imputados -y que se pudo comprobar en este debate- consistió en que, para el desarrollo de la actividad comercial de la cadena de zapaterías “ASH”, los imputados LIOTTI y RAMÍREZ contaron con una importante cantidad de empleados, a quienes les exigían como requisito excluyente para obtener el trabajo -o para mantener el que ya tenían en la empresa- que se registraran en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (frecuentemente denominado como *monotributo*). Ello, a fin de ocultar y enmascarar la verdadera relación de “empleado-empleador” que mantenían (es decir, con el objeto de simular que las personas que trabajaban bajo relación de dependencia eran trabajadores autónomos o independientes).

La maniobra desplegada fue constatada en los siguientes períodos y por los montos que a continuación se indican:

| AÑO  | MES        | DEUDA (APORTES Y CONTRIBUCIONES) |
|------|------------|----------------------------------|
| 2013 | junio      | \$ 207.126,98                    |
|      | diciembre  | \$ 277.132,96                    |
| 2014 | febrero    | \$ 210.760,70                    |
|      | marzo      | \$ 217.366,12                    |
|      | abril      | \$ 241.503,12                    |
|      | mayo       | \$ 233.552,85                    |
|      | junio      | \$ 388.677,51                    |
|      | julio      | \$ 263.094,23                    |
|      | agosto     | \$ 275.057,56                    |
|      | septiembre | \$ 295.504,25                    |
|      | octubre    | \$ 318.290,68                    |
|      | noviembre  | \$ 324.745,92                    |
|      | diciembre  | \$ 474.724,10                    |
| 2015 | enero      | \$ 323.901,22                    |
|      | febrero    | \$ 323.511,46                    |
|      | marzo      | \$ 325.304,17                    |

Previo a entrar en el análisis de la cuestión, debe señalarse que la Cámara Federal de Casación Penal estableció que el juicio oral resulta ser el escenario propicio para dilucidar los extremos fácticos controvertidos, ya que es la “... *oportunidad procesal en la que, concentrados en una audiencia pública los sujetos procesales y los medios de prueba reunidos a lo largo de la investigación preliminar, se presenta como el ámbito natural en el que deberá reconstruirse el hecho sometido a estudio del modo más aproximado posible a la verdad histórica que se afirma como ocurrida y la adecuación típica que en definitiva corresponda...*” (Sala IV, Reg. 1048/19, del 29/5/2019, voto del Dr. Gustavo M. Hornos).

En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que la apreciación del resultado de las pruebas para la convicción total del juez no debe ser empírica, fragmentaria o aislada, ni separarse del resto del proceso, sino que debe comprender cada uno de los elementos de prueba y su visión de conjunto (Fallos 308:641). En ese sentido, se procederá a valorar la integridad de los elementos de prueba incorporados y contradichos en el debate, de manera de formar una convicción razonada sobre cada uno de los aspectos tratados. En función de ello, se han reconstruido los hechos pasados hasta donde fue posible, sin perjuicio de señalar que el Tribunal no se encuentra obligado a valorar todas las pruebas existentes, sino sólo aquellas que resulten relevantes.

Ahora bien, a entender del suscripto, de la valoración conjunta e integral -a la luz de las reglas de la sana crítica- de las múltiples pruebas producidas e incorporadas al debate, han logrado acreditarse debidamente las siguientes circunstancias.

a) Durante el período de tiempo que conforma el objeto procesal de las actuaciones (cuanto menos), se comercializó calzado en diferentes locales ubicados en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el nombre de fantasía “ASH” (“*Argentinian Shoes*”)<sup>4</sup>.

Esta circunstancia (que no se encuentra controvertida y que surge de los diversos informes que dan cuenta de las tareas realizadas por la

<sup>4</sup> En concreto, dichos locales se encontraban emplazados en los inmuebles ubicados en las siguientes direcciones de esta ciudad: Av. Santa Fe 1544; Av. Callao 785; La Pampa 2321; Av. La Plata 37; Av. Rivadavia 5402; Av. Callao 298; Av. Callao 61; Av. Corrientes 805; Uruguay 671; Av. Córdoba 4498; Av. Las Heras 2285; Av. Olazabal 5113; Av. Rivadavia 3982; Av. Corrientes 565; Av. Corrientes 1701; Lavalle 1502; Florida 702; Av. Santa Fe 3507; Malabia 1667 y Cuenca 2921.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

AFIP), fue ratificada por la totalidad de los testigos que prestaron declaración en el debate (tanto de las personas que trabajaban en los locales comerciales, como así también por el personal de AFIP que estuvo a cargo de las tareas de fiscalización y de las personas que intervinieron en los allanamientos realizados en los inmuebles con los que operaba la empresa).

b) Los dueños de esa cadena de zapaterías “ASH” eran los imputados Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ.

La calidad de responsables de los dos nombrados, además de encontrarse determinada a partir de las tareas de investigación llevadas a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos, pudo ser acreditada a partir de las declaraciones testimoniales de las personas que trabajaron en las fábricas y en los locales comerciales donde se producían y vendían -respectivamente- los calzados de la marca “ASH”; quienes, en su gran mayoría, fueron contestes en señalar que -tanto LIOTTI como RAMÍREZ- eran los dueños de esa cadena de zapaterías, y que eran quienes tomaban las decisiones comerciales, administrativas y laborales.

Al respecto, resultan claros los testimonios que a continuación se indicarán, que sin lugar a dudas posicionan a los imputados como dueños de la marca “ASH” y como responsables de las fábricas y los locales comerciales, a saber:

- **Jorge Jonatan Cardozo** expresó que “... *Liotti y Ramírez fueron personas que lo contrataron para trabajar en la firma Argentinian Shoes, que era una empresa de zapatos...*”. Asimismo, al contestar sobre cómo era la mecánica de trabajo, contestó que los imputados eran quienes tomaban las decisiones sobre el funcionamiento de la actividad (en concreto, indicó que “... *quienes los mandaban a rotar en los locales eran Liotti o Ramírez, lo mismo con respecto a lo que dijo del cronograma de vacaciones, que Liotti y Ramírez se lo daban*”).

- **Andrés Javier Pérez** dijo que “... *conoce a Marcelo Liotti y Liliana Ramírez, porque eran sus empleadores*”; a la vez que agregó que “... *en el año 2015 trabajaba para Liotti y Ramírez en un local ubicado en Villa del Parque... Que ellos lo contrataron*” y que “... *al tiempo del allanamiento fue despedido*” por “ellos”, y aclaró que “... *cuando dice ‘ellos’ refiere a Liotti y Ramírez, porque son los dueños...*”.



#32859976#347198392#20221027213627864

- **Diego Javier Orellano**, dijo que conocía a Liotti y Ramírez y, al ser preguntado sobre cuál era esa relación, dijo que “... *trabajaba para ellos... ellos fueron los que lo contrataron, ellos eran sus empleadores...*”. Asimismo, refirió que generalmente hablaba con los imputados por teléfono, puesto que “... *ellos los llamaban y les decían cómo hacer las cosas*”.

- **Oscar Omar Almada** explicó que “... *Cuando dejó su CV, se comunicó con Marcelo y Liliana, que telefónicamente ellos dos como que lo tomaron en la empresa...*” y también indicó que “... *Su vínculo laboral terminó después del allanamiento a varios locales, ahí fue que se fue. Arreglaron y se fue... habló telefónicamente con Marcelo, a quien le dijo que no iba a trabajar más y éste le dijo que no había problema, llegaron a un acuerdo y listo. Que ese arreglo económico implicó que Marcelo le entregó plata*”.

- **Diego Sebastián Córdoba Reggi** explicó “*Que trató con Liotti y Ramírez, pero no frecuentemente... Que ellos a veces pasaban e intercambiaban un par de palabras o controlaban. Que ellos eran los dueños*”. También indicó que “... *ellos le explicaron cómo era el sistema de facturación*” y que “... *el alquiler del local lo pagaban ellos... las locaciones las manejaba tanto Liotti como Ramírez*”. En sentido similar, indicó que en los locales comerciales “... *había rotación de personal y la manejaban ellos cuando hacía falta gente o había que cubrir un franco semanal*”, y aclaró que “... *cuando dice ellos refiere a Liotti y Liliana Ramírez*”

- **Agustín Maszong** sostuvo que “... *trabaja para Marcelo Julián Liotti y para Liliana Delfina Ramírez, quienes son sus empleadores y amigos. Que tiene una amistad desde esa época, que siempre han sido amigos... Que era vendedor y respondía a Liliana y a Marcelo*”.

- **Gonzalo Barila** dijo que “... *sabía cuál era su sueldo por lo acordado con Liliana y Marcelo*”, y agregó que “... *las instrucciones las recibía de Marcelo y Liliana...*”.

- **Maximiliano Eduardo Torres** manifestó que “... *conoce a los imputados Liotti y Ramírez, que ellos eran sus empleadores,*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

que trabajaba para ellos”. Asimismo, aseguró que “... Él sabe que los dueños eran Liotti y su señora”.

- **Pablo Sebastián Barrios** dijo que “... conoce a los imputados Liotti y Ramírez porque le brindaron trabajo” y agregó que “... A Julián Liotti le informaba el monto que se vendía por día, Julián lo llamaba, o también Liliana Ramírez. Además de decírselo por teléfono, mandaban un sobre con una declaración de lo que vendía, y también cargaban las ventas en un sistema de computación que tenían”.

- **Jonathan Adrián Nicola** indicó que “... Marcelo Liotti era como el dueño y Ramírez también era la dueña, ellos eran sus jefes...”

- **Cristian Gabriel Rocdan** refirió que “... conoce a los imputados Liotti y Ramírez, del trabajo, eran sus jefes”.

- **Santiago Ojoli** refirió que “... conoce a los imputados Liotti y Ramírez, porque fueron jefes suyos cuando él trabajaba en la zapatería”. Además, en su testimonio expresó que “... Quien tomaba las decisiones administrativas de la empresa eran Marcelo y Liliana. Marcelo era más pacífico y Liliana era más estricta en todo. Si no hacían lo que decía ella, los amenazaba con que los echaba. Esas órdenes eran por llamados de teléfono”. Asimismo, agregó que “... para comunicarse con Liliana o Marcelo, intermediaban Darío Meinet y la hermana de Liliana, Jéssica Ramírez. Estas dos personas iban a los locales a darles presencialmente algunas órdenes directas de Liliana y de Marcelo. A veces Liliana y Marcelo iban a los locales, de sorpresa, a ver cómo estaban los locales”.

- **Mauro Damián Salcedo** afirmó que “... Los dueños de los locales eran Marcelo y Liliana”.

- **Gonzalo Javier González** explicó que “... A Marcelo lo vio una o dos veces, siempre el trato era con Liliana por teléfono. Las decisiones administrativas pasaban todas por ellos. A ellos les hablaba Liliana por teléfono, pero entre los compañeros siempre se habló de que las decisiones las tomaba Marcelo. Al personal de otras sucursales los llamaba Marcelo, como que se dividían las sucursales para llamar...”.



#32859976#347198392#20221027213627864

- **Gabriela Isabel Caldentey** indicó que “... En marzo del 2012 empezó a trabajar para ASH. Se enteró por una novia de su hijo que estaban convocando gente, uno de sus hijos también trabajó en ASH. Tuvieron un encuentro con el matrimonio Liotti, y les propusieron trabajar. Las decisiones comerciales las tomaban entre los dos... Marcelo Liotti y Liliana Ramírez eran los dueños de la cadena”.

- **Cristian Samuel Azcarate** explicó que “... entre los años 2013 a 2015 trabajaba justamente para Liotti y Liliana Ramírez, en Av. Rivadavia 5402. Era vendedor... Que Marcelo Liotti y Liliana Ramírez eran los dueños, por lo que él sabe. Que estas personas los llamaban por teléfono por el tema del control del dinero, y los vio en algunas ocasiones...”.

- **Daniel Leandro Rodríguez** explicó que “... El empleo lo consiguió Por “bumeran”. Se presentó en el local, y ese mismo día le dijeron que quedaba para trabajar... Después lo presentaron a Liliana y Marcelo... Liotti y Ramírez eran los dueños. No tenía contacto cotidiano con Liotti y Ramírez, ellos iban una vez por mes (por ejemplo), o cada quince días, pasaban a recaudar la plata, o a ver algo de mercadería, básicamente hacían el trabajo de dueño, veían que esté todo bien en el local, etc...”.

- **Gustavo José Galparoli** refirió que “... conoce a los imputados Liotti y Ramírez, porque cuando empezó a trabajar en ASH ellos eran los jefes, los dueños, que solo tuvo esa relación de jefe/dueño a empleado... Marcelo y Liliana los llamaban por día para que les informe cuanto había vendido...”.

- **Guido Laurelli** explicó que “... A Marcelo Liotti y Ramírez los vio personalmente una vez sola. Los vio en una cena de trabajo que los invitaron a su domicilio, no tuvo casi relación, estaban todos los compañeros. Ellos eran los dueños de ASH...”.

- **Carlos Alberto Lara** refirió que “... conoce a los imputados desde hace mucho tiempo. A Marcelo Liotti desde hace 30 años, y Liliana es la mujer, a quien conoce hace menos tiempo”. Asimismo, explicó que “... Trabajó en relación de dependencia para ellos. Sobre Liliana Ramírez dijo que es la mujer de Marcelo Liotti. Como un tiempo





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*trabajó como vendedor en los locales (en donde estuvo en blanco), ella se encargaba de los locales. Marcelo era la parte de la fábrica y ella era de los locales. Ella era como la dueña. Trabajó en Corrientes 805. Liliana era la que daba las órdenes”.*

- **Leonardo Damián Falconier** refirió que “... conoce a los imputados Liotti y Ramírez, conoce a toda la familia porque trabajó con ellos...”. Asimismo, indicó que “... Las decisiones comerciales de la empresa las tomaban entre Lili y Marcelo. Siempre tuvo una buena relación con todos. Lili era una persona muy mal hablada, y Marcelo siempre bajaba las aguas. Él tenía trato con ambos”.

- **Lucas Emanuel Barbieri** refirió que “conoce a los imputados Liotti y Ramírez, que eran jefes suyos, en la fábrica de Gual 2340...”. Asimismo, explicó “... Que en su trabajo trataba con Marcelo Liotti y con Liliana, que eran sus jefes y los veían a diario”. A su vez, preguntado para que diga de quién recibía órdenes, dijo que “... las recibían de Marcelo y Liliana, y había otras personas más, pero las órdenes eran de ellos más que nada”. Por último, y en lo que aquí respecta, el testigo agregó que “... sus jefes eran Marcelo Liotti y ‘Liliana’ cuando trabajó en la fábrica de Gual 2340, ‘Liliana’ aclara que el apellido es Ramírez. Que ella era jefa, la mayoría de los empleados seguían órdenes de ella”.

- **Matías Daniel Aguirre** indicó que “... Las personas responsables de la empresa era Liotti y Liliana Ramírez. Sobre qué rol cumplía cada uno dijo que ellos eran los dueños. A Liotti lo veía cada tanto, y Liliana pasaba todas las noches a retirar la plata de la caja...”.

Como puede observarse, prácticamente la totalidad de las personas que fueron convocadas para declarar en el juicio como testigos, y que trabajaron para la cadena de zapaterías “ASH”, fueron contestes al señalar que, tanto Marcelo Julián LIOTTI como también Liliana Delfina RAMÍREZ, eran los dueños de esa empresa, y que efectivamente tomaban las decisiones comerciales, administrativas y laborales.

Esos testimonios, avalados por el contenido de la prueba documental obrante en las actuaciones (tal como se indicará a continuación), no dejan dudas a entender del suscripto de que los



#32859976#347198392#20221027213627864

imputados LIOTTI y RAMÍREZ eran los dueños de la cadena de zapaterías “ASH”.

Al respecto, cabe recordar que -de acuerdo a la información obtenida por la AFIP en ocasión de realizar las tareas de investigación del caso- se daba cuenta de que, tanto Marcelo LIOTTI como Liliana RAMÍREZ, eran los responsables de la cadena de zapaterías que se estaba investigando. En particular, resulta oportuno mencionar que -en el marco de los diversos relevamientos de personal realizados en esta causa- muchas de las personas entrevistadas dijeron ser empleados de Marcelo LIOTTI, y otras de Liliana RAMÍREZ. Esos relevamientos de personal, cabe recordar, no solo fueron realizados en el marco de los allanamientos realizados en la causa, sino también en el marco de las tareas de fiscalización realizadas por la AFIP.

A ello, caben agregar otras circunstancias -debidamente constatadas- que también demuestran que los dueños de la empresa ASH eran los dos imputados. Por ejemplo:

- Se comprobó que, tanto RAMÍREZ como LIOTTI, eran quienes tomaban intervención en las conciliaciones obligatorias a partir de los reclamos laborales que recibían de parte de quienes trabajaban en la fábrica o en los locales comerciales donde se producían o vendían -respectivamente- el calzado de la marca “ASH”<sup>5</sup>;

- Se probó que ambos impartían las directivas atinentes al desarrollo de la actividad comercial y laboral (por ejemplo, en lo que hace al alquiler de los inmuebles donde se producía y se vendían los zapatos, en lo atinente al sistema de facturación, también se comprobó que controlaban las ventas diarias efectuadas, disponían la rotación del personal a otros locales, decidían sobre el diseño de los zapatos y la cantidad que se debía producir por día, organizaban los calendarios de vacaciones de los trabajadores, la estética de las vidrieras, entre muchas otras); y que ellos eran quienes tomaban -o despedían- a las personas que trabajaban en la empresa<sup>6</sup>.

<sup>5</sup> Ver fs. cfr. fs. 1092/1093, 1104/1105, 1432/1433 y 1545/1575.

<sup>6</sup> Sobre ello, tal como se irá viendo a lo largo de este acápite, fueron contestes los testigos que prestaron declaración en el juicio, que prestaban funciones para ASH.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

- Se determinó que, pasados pocos días de haberse producido los allanamientos ordenados en esta causa sobre los locales y talleres fabriles de ASH<sup>7</sup>, los imputados LIOTTI y RAMÍREZ constituyeron la sociedad “ASH CALZADOS S.A.” (para formalizar la explotación de la empresa, que hasta ese momento venía operando con ese nombre de fantasía), cuyos únicos dos accionistas fueron los imputados, quedando Marcelo LIOTTI designado como Presidente y Liliana RAMÍREZ como Directora Suplente.

Esa conducta posterior a los hechos que conforman el objeto procesal deja debidamente probado, sin lugar a dudas, que Marcelo LIOTTI y Liliana RAMÍREZ eran los dueños de la cadena de zapaterías que operaba bajo el nombre de fantasía “ASH” (Argentinian Shoes).

Así las cosas, y de modo contrario a lo sostenido por la defensa de RAMÍREZ en su alegato (en el que sostuvo que las pruebas no resultaban suficientes para demostrar que RAMÍREZ era dueña de la cadena de zapaterías), el suscripto considera que los elementos recabados durante el juicio -valorados en forma conjunta e integrada- sí permiten tener por debidamente acreditado que RAMÍREZ era titular de la marca “ASH”, que era una de las dueñas de la explotación comercial de la empresa y una de las jefas de los trabajadores, y que -junto con LIOTTI- era quien tomaba las decisiones comerciales, laborales y administrativas de la empresa. En efecto, si bien es cierto -como refirió la defensa- que RAMÍREZ se incorporó a la empresa como lo hicieron otros trabajadores (ya que empezó trabajando en los talleres de fabricación del calzado, pero luego de haber contraído pareja con LIOTTI -con anterioridad a los hechos que se le imputan- cambió su rol en la empresa), dicha circunstancia, a entender de este magistrado, no impide sostener que -con el tiempo- Liliana RAMÍREZ se haya constituido como responsable de la empresa, junto con el nombrado.

Además, tampoco se desconoce que hubo personas que trabajaron en los talleres fabriles que no identificaron a la imputada RAMÍREZ como titular o dueña de la cadena de zapaterías (solo mencionaron como tal a LIOTTI). Sin embargo, dicha circunstancia no desacredita -a entender del suscripto- la calidad de RAMÍREZ de dueña o

<sup>7</sup> Concretamente, el día 30/04/2015 (ver fs. 1520/1539).



responsable de la unidad de negocio de ASH, teniendo en cuenta que, como se pudo acreditar en el juicio, para el desarrollo de la actividad de la empresa existía un claro reparto de roles entre los imputados (LIOTTI estaba más abocado al tramo de producción del calzado, y RAMÍREZ al tramo de su comercialización); circunstancia que explica el motivo por el cual algunos de las personas que trabajaron en los talleres fabriles no identificaron como dueña a RAMÍREZ, aunque ello no significa que la nombrada no haya efectivamente desarrollado ese rol, tal como se acreditó.

Por ello, es que no resulta atendible, a entender del suscripto, lo sostenido por la defensa de RAMÍREZ en este sentido; y, de modo contrario a ello, se entiende debidamente acreditado lo expuesto por los acusadores, que refirieron que -tanto LIOTTI como la nombrada RAMÍREZ- eran los responsables de la cadena de zapaterías “ASH”.

c) También se pudo reconstruir durante el juicio cómo era el circuito productivo y comercial de la cadena de zapaterías, que fundamentalmente estaba diseñado de la siguiente manera:

Los zapatos se confeccionaban en los talleres fabriles que la empresa tenía ubicados en los inmuebles de las calles Portela 3031, Lafuente 2780/86 y Gual 2340 (todas de CABA), con la materia prima y las herramientas suministradas por los imputados.

Posteriormente, esos zapatos se distribuían a -cuanto menos- los locales comerciales de la empresa ubicados en las siguientes direcciones: Av. Santa Fe 1544; Av. Callao 785; La Pampa 2321; Av. La Plata 37; Av. Rivadavia 5402; Av. Callao 298; Av. Callao 61; Av. Corrientes 805; Uruguay 671; Av. Córdoba 4498; Av. Las Heras 2285; Av. Olazabal 5113; Av. Rivadavia 3982; Av. Corrientes 565; Av. Corrientes 1701; Lavalle 1502; Florida 702; Av. Santa Fe 3507; Malabia 1667 y Cuenca 2921 (todas ellas, también de CABA).

Esa distribución, se realizaba a través de fleteros que trabajaban para la empresa, quienes hacían los repartos al final del día<sup>8</sup> (por la tarde/noche)<sup>9</sup>. Asimismo, se comprobó que -para reponer el stock de

<sup>8</sup> Tal como declararon los testigos Falconier y Barbieri, que eran algunos de los encargados de esa tarea.

<sup>9</sup> quienes también llevaban las facturas a nombre de las personas que trabajaban en los locales; así como los comprobantes de alquiler apócrifos y recibos falsos; además que también trasladaban hasta la fábrica la plata que se recaudaba por las ventas (que se le





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

zapatos de los locales- la empresa contaba con un sistema en red (al que podían acceder los vendedores de todos los comercios de la cadena), en donde éstos últimos cargaban las ventas realizadas en el día y, a partir de ello, determinados empleados que trabajaban en las fábricas advertían en qué locales había faltantes y, de acuerdo a ello, se encargaban de gestionar los repartos de nueva mercadería a esos locales. Todo este circuito operaba bajo la estricta supervisión de Marcelo LIOTTI y/o Liliana RAMÍREZ, en base al reparto de tareas que hacían.

Prueba de ello, en primer lugar, resultan ser los resultados de las tareas de investigación llevadas a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos, por las que se determinó que -en los domicilios de Portela 3031, Lafuente 2780/86 y Gual 2340 (todas de CABA)- se encontrarían ubicados los talleres fabriles de los zapatos que luego se comercializaban al público en los locales comerciales de la marca “ASH”. Al respecto, corresponde reparar en el contenido de la denuncia que dio inicio a la presente causa (de fs. 1/11), en la que se explicaron detalladamente las tareas realizadas por ese organismo fiscalizador, luego de lo cual se acompañaron los antecedentes administrativos que daban sustento a lo allí expuesto (lo que se encuentra avalado por las declaraciones testimoniales de los funcionarios de AFIP, Santiago Mozetic y Laura Frías).

Asimismo, también cabe recordar que -en el marco de los allanamientos ordenados durante la instrucción de la causa- se comprobó que en esos domicilios efectivamente se encontraban emplazados los talleres fabriles y locales comerciales de la cadena de zapaterías.

Pero, más allá de eso, ese circuito comercial se pudo reconstruir a partir de los testimonios de las personas que trabajaban para la empresa. En efecto, en el juicio oral declararon como testigos diferentes personas que trabajaban en los talleres de producción de zapatos, que no solo ratificaron que los zapatos se hacían allí (y explicaron cómo era el proceso de fabricación), sino que también indicaron que esa mercadería era trasladada en fletes hacia los locales comerciales de la marca. Asimismo, prestó declaración testimonial en el debate una de las personas que explicó que se encargaba de analizar el sistema en red y, a partir de ello, organizar entregaba a los imputados), tal como se explicará más adelante.



#32859976#347198392#20221027213627864

los repartos de mercaderías a los locales, como así también de una de las personas que trabajaba como “fletero” para la empresa, que hacía el reparto de las mercaderías a los locales. Por lo demás, también prestaron declaración testimonial muchas personas que trabajaron como vendedores en los locales comerciales, que ratificaron que las ventas eran cargadas en el sistema en red que tenía la empresa, que a partir de allí se podían advertir qué faltantes había en cada uno de los comercios, y que la mercadería de la empresa le era enviada en fletes, al finalizar cada una de las jornadas.

En concreto, cabe reproducir algunos de los testimonios mencionados, que resultan claros para comprobar cómo funcionaba el circuito comercial de la empresa.

En primer lugar, cabe recordar las declaraciones testimoniales de las siguientes personas, que dijeron que trabajaron como vendedores en los locales comerciales de la empresa:

- **Diego Javier Orellano** indicó que: *“Respecto de la recepción de la mercadería, a medida que vendían, iban ingresando las ventas en el sistema, y calcula que ellos miraban el sistema y se daban cuenta de lo que había que mandar para reponer el local (calcula que “ellos” era Liliana, no recuerda)”*.

- **Esteban Javier Marrero** expresó que *“Cuando se quedaban sin zapatos (sin stock), eso se podía ver a través del sistema al que hizo referencia, y directamente le mandaban la mercadería, a la noche”*.

- **Oscar Omar Almada** mencionó que *“Todo lo que era llevar mercadería lo cubrían ‘ellos’, a través de un chofer con una camioneta... El chofer de ‘ellos’ les llevaba la mercadería... Que cargaban lo que se iba vendiendo en el sistema, para que ‘ellos’ vean qué se vendió y qué había que reponer”*.

- **Diego Sebastián Córdoba Reggi** dijo que *“... el domicilio de la calle Gual era uno de los depósitos de la cadena de zapatos, que se acuerda porque cuando sobraban zapatos tenían que poner una caja ‘para Gual’”*.







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

- **Marcos Javier Peralta** indicó que “... al comenzar el día abría la caja de la plata y al final del día lo llamaban y le preguntaban cuánto era la recaudación, que normalmente concurría un empleado y traía bultos de zapatos y ahí la recaudación del día era retirada...” y luego indicó que “Sobre la recepción de la mercadería, sostuvo que venía en cajas, con una boleta con la cantidad de zapatos, colores y códigos, que el dicente no pedía la mercadería, que uno pasaba el código en la computadora y los que hacían el trabajo de reponer se fijaban para reponer. Que llegaba al final del día la mercadería. Que sólo recibían mercadería y carteras y las acomodaban”.

- **Pablo Sebastián Barrios** explicó que “... la mercadería llegaba todos los días, que él no la pedía, lo cargaban en el sistema, igual ni siquiera había que pedirla porque la llevaban todos los días. Se la llevaban de la ‘fábrica’”.

- **Jonathan Adrián Nicola** indicó que “Tenían un sistema informático, un programa en la computadora que era específicamente para ingresar mercadería, para poner el tema de las ventas de los zapatos, era un programa propio para el funcionamiento del local, todo se hacía en base a ese sistema”.

- **Jorge Alejandro Quevedo** expresó que “tenían su página donde se cargaban los pares de zapatos que se vendían, etc.”.

- **Gonzalo Javier González** indicó que “Ellos tenían dos o tres camionetas, como fleteros, que entregaban la mercadería”.

- **Cristian Samuel Azcarate** indicó “... Que el stock se manejaba de la siguiente manera: ellos no pedían la mercadería, se las enviaban directamente. Se las enviaban por un transporte...”.

- **Daniel Leandro Rodríguez** refirió que “... respecto del stock de la zapatería... se manejaba como en cualquier local, cargaba las ventas en el sistema y ellos los surtían (cuando dice ellos calcula que serían los dueños), que él no pedía la mercadería, sino que directamente se la llevaban”.

- **Jonatan Alanis** explicó “... Que había un sistema donde se cargaba la mercadería que se vendía y la que entraba (stock),



entre otras cuestiones y luego agregó que respecto del sistema informático al que hizo referencia- que ellos no hacían el pedido de mercadería por ahí, directamente la mercadería llegaba y ya estaba cargada en el sistema. Que había personas que supuestamente trabajaban en la empresa que le llevaban la mercadería, lo que ocurría casi diariamente, al finalizar la jornada”.

- **Gustavo José Galparoli** explicó “... Que, sobre el reparto de mercadería, dijo que el local cerraba a las 8, y a eso de las 7 llegaba el camión con mercadería nueva. Esa mercadería no la pedían ellos, directamente se la mandaban de la fábrica. Él no tenía contacto con la fábrica. Calcula que el nexa entre los locales y la fábrica eran Darío o Jérica, pero no sabe cómo era eso”.

En segundo lugar, prestaron declaración las siguientes personas, que dijeron que trabajaban en los talleres fabriles de la empresa.

- **Fermín Jourdan** (quien refirió que trabajó “más de 30 años” para la empresa, “desde el 92”, y que su trabajo consistía en ser “encargado” en los sitios donde se fabricaban los zapatos de “ASH”), refirió que “... en la fábrica no se vendía, los zapatos que ellos hacían los iban a buscar y se los llevaban, a otra dirección que no recuerda, los llevaban a diferentes locales, que cree que eran de Liotti...”.

- **Carlos Alberto Lara** (quien refirió “que conoce a los imputados hace más de 30 años” y que comenzó a trabajar para ellos, “en el año 90”; siendo que su trabajo consistía en fabricar los zapatos de “ASH”, sin perjuicio de que indicó que durante un tiempo también trabajó como vendedor en los locales comerciales de la marca) refirió que “... la mercadería de la fábrica era transportada por la gente del reparto, principalmente lo hacía Néstor Ortega... que el producto final (los zapatos), los repartían a los locales”.

Por último, declararon en el juicio las siguientes personas, que también refirieron que trabajaban en los talleres fabriles, y que estaban abocados a la preparación de los repartos para reponer el stock en los locales, y explicaron cómo funcionaba esa tarea.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

- **Leonardo Damián Falconier** indicó que trabajó en el taller fabril de la calle Gual 2340. Explicó que -entre otras- su función era transportar los zapatos desde las fábricas hacia los locales<sup>10</sup>. Sobre ello, el nombrado aclaró que preparaba el stock de zapatos que enviaría a cada local, los cargaban en las camionetas y los repartían; y aclaró que el faltante de cada local lo advertía a partir de la compulsa del sistema en red que tenía la empresa. En definitiva, concluyó que “... *su trabajo era preparar los pedidos, cargar las camionetas, hacer el reparto en todos los locales, y los locales le daban la plata con un sobre con el dinero...*”.

- **Raúl Horacio Aranega** explicó que “*Trabajaba en la calle Gual, donde estaba el depósito, y allí armaba los pedidos, luego los entregaba en los locales de venta en el centro*”, a la vez que indicó que se encargaba de “... *llevar calzado a los locales*”.

- **Lucas Emanuel Barbieri** (quien refirió que trabajaba en “*la fábrica de Gual 2340*”), indicó que “... *en la fábrica ellos tenían una oficina y una computadora, y desde ahí manejaban lo que era la venta de los locales y el reparto de zapatos... lo que allí hacían eran inventarios y reparto de zapatos... Que lo que hacía el testigo era el control de calidad, reparto de mercadería y retiro de la recaudación*”.

De acuerdo a todo lo expuesto, es posible tener por acreditada la manera en que funcionaba el circuito comercial de la marca “ASH”, conforme a lo explicado en el primer párrafo de este ítem.

d) Que, asimismo, se comprobó que durante el período de tiempo que conforma el objeto procesal de la causa, las personas que producían y/o comercializaban zapatos para la cadena que operaba bajo el nombre de fantasía “ASH”, se encontraban inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (comúnmente denominado como “monotributo”).

Ello, que no se encuentra controvertido, se determinó a raíz de las profundas tareas de investigación realizadas por la AFIP<sup>11</sup>, y también

<sup>10</sup> Además de que aclaró que, de los locales, retiraba la recaudación diaria.

<sup>11</sup> Ver, entre muchas otras, fs. 21/25, 28, 31/40, 98 y 130 del cuerpo de actuaciones correspondientes al contribuyente Walter David CARRAZANA; 14 del cuerpo de actuaciones correspondientes a Edgardo Germán VERÓN; y cuerpos de actuaciones correspondientes a Santiago OJOLI y Diego Javier ORELLANO. Pero, además, esas tareas de investigación fueron reseñadas por los funcionarios de AFIP que intervinieron en aquellas (según cada caso), y que prestaron declaración testimonial en este juicio. En



consta en los legajos de inscripción en el monotributo de los trabajadores (que fueron debidamente incorporados como prueba al debate)<sup>12</sup>, e incluso fue admitido por las personas que declararon como testigos en la causa<sup>13</sup>.

e) Que, en ese sentido, también pudo acreditarse que la inscripción en el régimen de monotributo de las personas que trabajaban para “ASH” fue un requisito excluyente exigido por los responsables de la empresa. Es decir, se comprobó que -para poder acceder al trabajo, o para mantener el que ya tenían en la empresa- los trabajadores sí o sí debían inscribirse como monotributistas (ello, de acuerdo a la expresa condición que le era impuesta por los responsables de la entidad).

Sobre ello, además, se pudo probar en el juicio que no eran los propios trabajadores los que pagaban el monotributo, sino que -en todos los casos- era afrontado por los empleadores (en concreto, se hacía por orden de Marcelo Julián LIOTTI<sup>14</sup>, en su carácter de responsables de la empresa “ASH”); que los comprobantes de esos pagos del monotributo le eran enviados a los trabajadores conjuntamente con la mercadería destinada a reponer el stock de los locales (enviada a través del flete referido, que era enviado al cierre -por la tarde/noche- de cada jornada); y que los trabajadores debían guardar esos comprobantes en las “carpetas” que tenían que conservar en los locales por si venían inspecciones.

Sobre esos aspectos, fueron contestes prácticamente la totalidad de los testigos que trabajaban en la cadena de zapaterías “ASH” (que fueron escuchados en el juicio); lo que, a su vez, se corresponde con los demás elementos de prueba que a continuación se indicarán.

- **Jorge Jonatan Cardozo** indicó que: “... *al principio de la relación estuvo como trabajando unos meses como en un período de prueba. Luego, fue como monotributista. Que Liliana Ramírez y Marcelo Liotti te pedían que te hagas monotributista para trabajar. Que cree que le pedían que hagas un requerimiento a la AFIP de Lomas de Zamora, para la inscripción del monotributo, y después ellos les hacían un cambio en la*

---

concreto, ver las declaraciones testimoniales de Diego Prando, Laura Mariela Frías, Leonardo Maximiliano Oneto, Jonathan Denis Novello, y Santiago Mozetic (vertidas el día 13/05/2022), entre otras.

<sup>12</sup> Fs. 68/375 de los autos principales, y los anexos I y II formados a fs. 57.

<sup>13</sup> Ver, entre muchas otras, declaraciones de Rodríguez, Salcedo, Nicola, Alanis.

<sup>14</sup> Ello, incluso fue reconocido la propia defensa del imputado Liotti en ocasión de formular su alegato, que indicó que era su asistido quien efectuaba los pagos del monotributo.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*contraseña para que puedan ingresar, y ellos manejaban la cuenta. Que de hecho nunca efectuó los pagos del monotributo, e incluso ahora se enteró que tiene deudas con AFIP que regularizar porque ahora va a empezar a trabajar en forma independiente... Que les daban el comprobante del pago del monotributo, pero nunca hizo ninguno de esos pagos”.*

- **Andrés Javier Pérez** indicó: “... Que ellos lo contrataron y lo pusieron en el monotributo, que ellos se hacían cargo de todo eso, él no fue ‘empleado’ bajo dependencia con ellos. Que ellos hicieron todo lo relativo a su inscripción como monotributista, que él solo firmó lo que le dieron, incluso ellos pagaban el monotributo por mes y les traían los recibos. Que cuando dice ‘ellos’ refiere que entiende que eran Liotti y Ramírez, no sabe exactamente quién lo hacía, pero sabe que ellos dos eran los dueños. Asimismo, este testigo aclaró que “conoce a Emanuel Iván Tobares, que fue compañero de trabajo en Villa del Parque... que Tobares hacía el mismo trabajo que él, que todos trabajaban igual, con el mismo régimen. Que no solo con Tobares, ha trabajado con otros compañeros... que conoce a Oscar Almada, que era un compañero de trabajo, quien estaba sometido al mismo régimen de trabajo que él, que él todos trabajaban de la misma forma”.

- **Diego Javier Orellano** indicó que: “... Llegó a trabajar ahí por intermedio de un conocido, justo él estaba sin trabajo, y le dijo que había una posibilidad para entrar, pero la condición era hacerse monotributista. Para ingresar, lo hicieron ir a uno de los locales, no recuerda quién era que lo atendió, le dieron los papeles para que haga el monotributo, una vez que lo hizo ya arrancó a trabajar... No recuerda qué papeles le dieron para el monotributo, pero tuvo que ir a Quilmes, hacer los papeles y después se los presentó a “ellos”, cuando ya estaba hecho. La única forma que tomaban empleados era si hacías el monotributo, ellos no tomaban gente si no era así, sí o sí había que hacerse monotributista. Todos los demás empleados estaban en esta misma situación, eran todos monotributistas, de acuerdo a lo que él sabe”.

- **Esteban Javier Marrero** indicó que: “... Durante los años que trabajó en la cadena ASH estaba como monotributista. La forma de actuar era: le daban la clave fiscal, y ‘ellos’ se encargaban de anotarlos en el monotributo”.



#32859976#347198392#20221027213627864

- **Oscar Omar Almada** indicó que: “... trabajó para la cadena de zapaterías ASH... Que para este trabajo se encontraba inscripto como monotributista. Para inscribirse como tal lo asesoraron, mucho no entendía de eso, entonces lo inscribieron para hacerse monotributista y poder trabajar con ellos. Supone que ‘ellos’ lo inscribieron, él no hizo ese trámite”. En otro tramo de su declaración, el testigo Almada indicó que “Cuando dejó su CV, se comunicó con Marcelo y Liliana, que telefónicamente ellos dos como que lo tomaron en la empresa... En esa comunicación telefónica con Marcelo o Liliana, le informaron que para trabajar en la empresa de ellos tenían que ser monotributistas, le pidieron todos los requisitos para inscribirlo, y después ese tema lo manejaron ellos, ellos hicieron todo lo relativo a su inscripción en el monotributo, él no fue a inscribirse. Él cree que no manejaba su clave fiscal, supone que la manejaban ‘ellos’”.

- **Jorge Emanuel Herrera** indicó que: “... entre los años 2013/2015 vendía zapatos. En esa época pasó por varios lugares. En la calle Corrientes realizó esas tareas, y en varios lugares también, no recuerda las direcciones exactas. Esto, para la zapatería ASH... Él se encontraba inscripto en la categoría H de monotributista. Él no se inscribió, lo hizo el abogado de ‘ellos’, de quien no recuerda el nombre”. Además, en otro tramo de su declaración, el testigo aclaró que “... él jamás pagó el monotributo, personalmente no”. Por su parte, el testigo indicó que “Había carpetas en el local, y cada tanto llegaban esos recibos, esos papeles, cuando llegaban los zapatos. Esos papeles solo debían guardarlos”.

- **Diego Sebastián Córdoba Reggi** indicó que: “... ellos le dieron un papel con el ‘paso por paso’ que debía seguir, que tenía que ir a rentas e inscribirse para monotributo. Que ellos le explicaron todo lo que figuraba en ese papel. Que una vez que inició el trámite lo mandaron a trabajar a una sucursal... que pensó que todo esto era para evadir dar de alta a un empleado. En otro tramo de su declaración, indicó que “... su clave fiscal era manejada por ellos, que cuando dice ellos refiere a Liliana Ramírez y Marcelo Liotti” y que “... ellos abonaban el monotributo, y le daban los comprobantes”.

- **Gonzalo Barila** indicó que: “... en el año 2014/2015 el dicente no pagaba el monotributo y desconoce quién lo pagaba. Que él





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*no manejaba su clave fiscal y no sabe quién la manejaba” y que “... las indicaciones que le dieron eran que iba a estar como monotributista. Que el trabajo era atender el local, te ponían como monotributista y te pagaban el sueldo. Que le hicieron todo ellos, específicamente Liliana Ramírez (la mujer que lo tomó) para anotarme en la AFIP. Que cree que no fue a la AFIP, que le dieron la clave fiscal ellos, y que no recuerda si tuvo que hacer algo por la página del organismo”.*

- **Marcos Javier Peralta** indicó que: *“... Preguntado si estaba inscripto en AFIP en esa época, sostuvo que lo hicieron monotributista, y que ellos (Marcelo y Liliana) pagaban todo. Que él no manejaba la clave fiscal ni nada para acceder a AFIP.*

- **Maximiliano Eduardo Torres** indicó que: *“... Cuando empezó a trabajar le ofrecieron que tenía que ser monotributista. Esto se lo dijeron cuando le tomaron la entrevista. Primero tenía que empezar a trabajar para aprender cómo se trabajaba, y luego -como a la semana o mes- lo pusieron como monotributista. Él no sabía lo que era monotributista, porque siempre trabajó en un local de ropa en blanco. A él lo mandaron a inscribirse, y ellos se iban a encargar de pagarle el monotributo”.*

- **Pablo Sebastián Barrios** indicó que: *“... Ante la AFIP le comentaron que era monotributista categoría H. Cuando él ingresó a la empresa ellos le explicaron que, para quedar efectivo en el trabajo, lo iban a poner como socio de la empresa, se tenía que hacer monotributista y ahí quedaba en blanco. Él como estaba desesperado por el trabajo lo hizo... Estuvo un mes o dos, y después le pidieron su documento, le dijeron que vaya a la AFIP, que saque su clave fiscal, y después ellos se encargaron de hacer todos los movimientos. Después le llevaban los comprobantes de pago del monotributo y nada más...”*

- **Jonathan Adrián Nicola** indicó que: *“... Estaban totalmente en negro, les pagaban por día, no tenían contrato de trabajo, nada, era todo de palabra. Después de un tiempo que estuvo trabajando (en Corrientes 805) le hicieron hacerse la clave fiscal, darse de alta para la AFIP, y lo hacían declararse como monotributista”. Y luego agregó que “Todos trabajaban como monotributistas... Para ser monotributista, le dijeron cómo tenía que hacerlo, y fue él solo a hacerlo, no lo acompañó nadie, pero sí le dieron las instrucciones de cómo tenía que hacerlo”.*



#32859976#347198392#20221027213627864

- **Cristian Gabriel Rocdan** indicó: “... Que, sobre sus condiciones de trabajo, los pusieron como monotributista, y ponían como que alquilaban una parcela... Le dieron las instrucciones para hacerse monotributista, le dieron los pasos, no recuerda bien, pero ellos pagaban el monotributo. Por su trabajo cobraba el día y nada más. Esas instrucciones eran verbales y escritas. A inscribirse como monotributista fue solo, no lo acompañó nadie. Su clave fiscal se la tuvo que dar a ellos, ellos hacían todo ese tema. Cuando dice ellos se refiere a Liliana y Marcelo... Él dio su clave fiscal, y ya no hacían más nada de eso, solo se dedicaban a vender y hacer sus tareas. Esas condiciones laborales que relató, eran las condiciones para trabajar en ese lugar. Eso lo impuso Marcelo y Liliana”. Asimismo, explicó que “... cuando empezó a trabajar, le dieron una carpeta que tenía que quedar ahí... que tenía su categoría de vendedor, lo que está en los locales, una constancia de AFIP con un QR, cada uno de ellos tenía una carpeta con eso, el monotributo, el contrato de alquiler, más que nada era para pegar lo que era el monotributo”.

- **Santiago Ojoli** indicó que: “... La propuesta laboral era que le pagaban por día, tenía un buen sueldo (en ese momento cree que eran 13000 pesos por mes). Tenía que estar a prueba dos semanas, después de las dos semanas empezaban a cobrar más dinero, y los hacían monotributistas y ahí ya en teoría estabas en blanco (una vez que te hacías monotributista ya eras parte del staff de ASH). No recuerda bien cómo fue el tema de hacerse monotributista, cree que los trámites para hacerse monotributista los hacían ellos, él no se tuvo que presentar a ningún lado... que antes de empezar a trabajar ahí no estaba inscripto como monotributista, fue la primera vez que se inscribió como tal... Todos sus compañeros estaban en la misma situación”.

- **Jorge Alejandro Quevedo** indicó que: “... Empezó con una entrevista, fue a las pruebas, y luego quedó trabajando para ellos, pero trabajó en negro varios meses. Dice en negro porque supuestamente estaban entrando como monotributistas, así los hacían entrar a los chicos, y él tenía que esperar para que le den esa categoría, y después de un tiempo, cuando iban a hacerle todos esos papeles, justo cayó el allanamiento”.

- **Mauro Damián Salcedo** indicó que: “... Para poder trabajar en sus locales los ponían como monotributistas. Esa era la forma







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*en que se manejaban, él cree que tuvo que ir a la AFIP y pedir su clave fiscal, después del resto se encargaban ellos. Él pidió su clave fiscal en AFIP de Quilmes, y se las entregó a ellos (ellos se iban a encargarse de hacer todo lo demás)”.*

- **Gonzalo Javier González** indicó que: “... Le dijeron que iba a estar como monotributista, después de un tiempo... A él lo pusieron como monotributista... Esto lo hicieron casi todo ellos, él solo tuvo que sacar el ‘coso’ fiscal, el resto lo hicieron ellos. Esto se lo dijo Liliana Ramírez por teléfono”.

- **Gabriela Isabel Caldentey** indicó que: “... Sobre su situación ante AFIP, refirió que era monotributista, que no era monotributista antes de ingresar a la cadena de zapaterías, lo fue luego de ingresar. Que era una de las cláusulas para el trabajo. Que ellos incluso pagaban el monotributo a todos los empleados. Que cree que se inscribió ella en el monotributo porque era un trámite personal... Que Liotti y Ramírez, o no sabe bien quién, pagaba el monotributo, que lo pagaba la empresa. Que cree que le daban comprobantes de que pagaban el monotributo... Que su hijo también trabajaba en la zapatería. Que su hijo se llama Federico Aranega. Que su hijo tenía el mismo régimen suyo, de monotributista. Que todos tenían el mismo régimen, según lo que ella conoce”.

- **Cristian Samuel Azcarate** indicó que: “... Le dijeron que tenía que ser monotributista para seguir trabajando con ellos... Que en los primeros meses estuvo en negro y luego como monotributista. Él no decidió ser monotributista, le dijeron que si quería seguir trabajando tenía que serlo. Eso le dijeron donde él trabajaba, cree que era una orden de Marcelo o Liliana según le dijeron los chicos... Que la cuota del monotributo no la pagaba él, una vez que él se hizo el monotributo, ese tema ya pasó a la parte de ellos, él solo fue hacer el trámite, después se encargaban ellos”. Agregó que “... les mandaban unos comprobantes al local donde estaban...”.

- **Daniel Leandro Rodríguez** indicó que: “... Sobre su situación ante AFIP, dijo que él no sabía, que le hicieron la carpeta, le dijeron que era monotributo, le dijeron que eso era bueno para él (que hasta podía sacar un préstamo por eso), que en ese momento era chico. De eso él no hizo nada, si mal no recuerda ellos le hicieron la clave fiscal, le



#32859976#347198392#20221027213627864

*pidieron su DNI, le llevaban el comprobante de pago del monotributo por mes, ellos le decían que lo agende y entonces lo hacía... Respecto de su alta en el monotributo, él dijo que no hizo ningún trámite, les había dado sus datos a los dueños y ellos le llevaron todo armado, le llevaron la clave fiscal. Cada uno de los chicos tenía una carpeta a su nombre, donde le hacían guardar los recibos cree, algo así”.*

- **Jonatan Alanis** indicó que: “... Que cuando empezó a trabajar ellos le hicieron hacer un monotributo que dependía de ellos, él no tenía ni su clave fiscal. Él no hizo ese trámite, lo hicieron ‘ellos’ (cuando dice ellos no refiere a Liotti, sino al encargado que tenía, quien gestionaba los papeles, pero no recuerda el nombre). Él no abonaba el monotributo, lo pagaban ellos. Eso lo manejaba la empresa, él no manejaba la clave del monotributo ni nada”.

- **Gustavo José Galparoli** indicó que: “... Su función era atender el local, primero estuvo a prueba, ellos le pagaban el monotributo... Que él no era monotributista, empezó a serlo cuando entró a trabajar ahí. Él no fue a inscribirse como tal, ellos gestionaron todo. Los pagos del monotributo los hacían ellos. Cree que les daban un ticket como constancia, no recuerda bien. Con ese documento por las dudas lo guardaba, pero no mucho más”.

- **Guido Laurelli** indicó que: “... Ante AFIP se encontraba inscripto como monotributista, empezó a serlo ahí, le pidieron que así sea... Él hizo el trámite, pero las cuotas del monotributo las abonaba la empresa, y no le daban comprobante. Ser monotributista era una regla excluyente para trabajar en la empresa”.

- **Venancio González Cardozo** indicó que: “... Al principio cuando empezó a trabajar siempre fue en negro, hasta que en algún momento los anotó como monotributista, Liotti les pagaba el monotributo, ellos solo recibían los tickets nada más”.

- **Alberto Cardozo** indicó que: “... Que en el 2012 se presentó como monotributista, porque Marcelo les pidió que se lo hagan para darles más trabajo... con el Sr. Liotti fue monotributista hasta 2016 más o menos. Ese trámite lo hizo solo, ‘él’ les explicó cómo hacerlo y lo hizo. No les explicó los motivos de por qué tenía que hacerse monotributista... La mayoría eran monotributistas, porque Marcelo los





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*obligaba, porque si no no podían tener trabajo. Si o si tenían que hacerse monotributista para laburar, sino no iban a poder tener trabajo”.*

- **Fermín Jourdan** indicó que: “... Sobre sus condiciones de trabajo, dijo que a él le pagaban diariamente, y que no sabe si le pagaban aportes... Él se tuvo que presentar como monotributista en una época, no recuerda bien la fecha pero habrá sido en 2009, por ahí, porque si no seguían ese régimen se quedaban sin trabajo. Que habla en plural porque había otras personas que estaban en la misma situación. Ese trámite no recuerda si lo hizo solo, cree que fue acompañado... No fue monotributista durante todos los años que trabajó, fue alternando su régimen laboral. Cuando empezó en el 92 empezó en relación de dependencia, a veces le llegaba una declaración de la ANSES que decía que no le hacían los aportes. No recuerda cuántos años fue así... Que cuando estaba inscripto en el monotributo, quien abonaba las cuotas era Marcelo, y le daba el comprobante de pago, que simplemente guardaba”.

- **Carlos Alberto Lara** indicó que: “... Trabajó en relación de dependencia para ellos, un tiempo, y luego como monotributista... respecto de lo que dijo que en un periodo estuvo en relación de dependencia y otro como monotributista- que en relación de dependencia estuvo cuando empezó en el año 90, ahí estuvo en blanco, tenía recibo. Así estuvo 13 años. Luego de eso, se fue a uno de los locales y trabajó como vendedor, también en blanco. Luego volvió a la fábrica y estuvo entre 6 y 8 años, y allí ya sí fue monotributista, pero trabajando para Liotti, Marcelo. Liliana Ramírez se ocupaba de los locales. Pasó de relación de dependencia a monotributista porque era la única opción que tenía para trabajar, porque no lo podían poner efectivo. Marcelo Julián siempre se encargó de la fábrica. El trámite para monotributista lo hizo él cerca de la fábrica de Gual, que hay una agencia donde se hace el trámite. A él le pidieron que se haga monotributista. No entiende muy bien sobre el motivo de eso, era la única opción que tenía para trabajar, entonces accedió a hacerlo... Que su trabajo no varió cuando estuvo en relación de dependencia y cuando estuvo como monotributista. Era empleado, no tenía ningún cargo más”.

- **Leonardo Damián Falconier** indicó que: “... cuando empezó le dijeron que le iban a pagar el monotributo, para tener obra social y aportes. Esto fue antes del mundial del 2014, y lo echaron después



#32859976#347198392#20221027213627864

*del mundial. Marcelo Liotti estableció que iba a ser monotributista. Tuvo que ir a la AFIP de Adrogué, sacó el número y la clave fiscal, y se la pasó a ellos. Le dijeron que haga ese trámite, él no sabía. Cree que tiene los tickets del monotributo, del pago. Eran la categoría más baja. Esos tickets se los quedaba a veces, no solo el suyo sino el de todos. El trámite de la obra social nunca lo hizo”.*

- **Raúl Horacio Aranega** indicó que: “... Estaba como monotributista, porque así se ‘le dijo’. La clave fiscal no la manejaba él. El monotributo se lo pagaban ‘ellos’. Que las personas que daban las ordenes eran Liotti o su señora (Ramírez). El testigo no abonaba el monotributo, se lo abonaba Liotti”.

- **Lucas Emanuel Barbieri** indicó que: “... Sobre las condiciones laborales, dijo que trabajaba mediante monotributo, que su pago era diario. Que tenía 18 años en ese momento, y no tenía mucha noción de cómo eran las cosas. Sobre la condición de monotributo, dijo que ingresaban y el monotributo lo manejaban ‘ellos’. Que lo pagaba él (en referencia a Marcelo). Que cuando habla de Marcelo se refiere a Marcelo Liotti... Que en la fábrica trabajaban otras personas, que estaban todas en las mismas condiciones (en referencia al monotributo)”.

- **Néstor Fabian Enciso Ecurra** indicó que: “... que trabajó bastante años en la fábrica con ellos, desde el 2013 hasta el 2020 aproximadamente... Que le dijeron que vaya para hacerse monotributista, así fue que empezó. No sabe por qué le pidieron eso, no le explicaron nada. En la fábrica trabajaba con otras personas, varias, quienes supuestamente estaban en las mismas condiciones que el testigo, todos estaban trabajando así por lo que el testigo tenía entendido, como monotributistas”.

- **Diego Alejandro Martínez** indicó que: “... le hicieron hacerse monotributista. No le explicaron por qué tenía que hacerse monotributista... Su papá también estaba como monotributista, como él”.

- **Mario Romero** indicó que: “... que trabajó en un taller chico de la calle Lafuente... Estaba como monotributista, ‘después lo puso así’. Cuando empezó a trabajar estuvo un tiempo a prueba, y después ‘lo puso como monotributista’. Estuvo a prueba más o menos 3 meses. Cuando lo puso como monotributista tuvo que hacer un trámite en la





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*AFIP, le empezaron a dar el ticket de monotributista, que tiene desde el 8/8/12 en adelante. Cuando hizo el trámite no sabe si le dieron una clave del monotributo”.*

- **Matías Daniel Aguirre** indicó que: “... Sobre sus condiciones laborales, dijo que lo hacían hacerse monotributista. Que era así, si entrabas y quedabas, ya te hacían hacerte monotributista y te pagaban el monotributo ellos. Al trámite para hacerse monotributista cree que fue solo. Le dieron el día libre y fue a hacerlo. No le explicaron por qué tenía que hacerse monotributista”.

Como puede observarse, todos los testigos fueron unánimes al referir que era una condición exigida por la empresa que las personas que allí trabajaran se inscribieran como monotributistas.

Ello guarda correlato con el documento incautado en el allanamiento realizado sobre el local comercial emplazado en la calle Malabia 1667, en el que se indicaba el “*paso a paso*” a seguir para lograr la inscripción en el monotributo (reconocido, incluso, por uno de los testigos antes mencionados)<sup>15</sup>. Ese documento, resulta más que ilustrativo para tener por acreditada la afirmación anteriormente expuesta; esto es, que -cuanto menos durante el período de tiempo que conforma el objeto procesal de esta causa- fue una “política” de la empresa “ASH” la de contratar empleados, y hacerlos que se registren como monotributistas.

Para mayor ilustración, se agrega una copia digitalizada de ese documento:

---

<sup>15</sup> Ver, por ejemplo, el testimonio de Diego Sebastián Córdoba Regg, quien -como se dijo- en su declaración, explicó que “... ellos le dieron un papel con el ‘paso por paso’ que debía seguir, que tenía que ir a rentas e inscribirse para monotributo”.



AFIP 2014 (MINUSCULA)



### Pasos para alta como Monotributista

- 1.- Ingresar a [www.afip.gob.ar](http://www.afip.gob.ar) dentro de las 48 hs.
  - 2.- Clickear en "**Acceso con Clave Fiscal**"
  - 3.- Ingresar el numero de CUIT y la Clave otorgada
  - 4.- Clickear en "**Ingresar**"
  - 5.- Ingresar una nueva clave alfanumérica de 8 dígitos y repetirla
  - 6.- Clickear en "**Continuar**"
  - 7.- Clickear en "**Servicios Administrativos Clave Fiscal**"
  - 8.- Clickear en "**Aceptación de Datos Biometricos**"
  - 9.- Clickear en "**Aceptar Datos**" y cerrar la ventana
  - 10.- Clickear en "**Sistema Registral**"
  - 11.- Clickear en la "**Lupa**" (Seleccionar)
  - 12.- Clickear en "**Registros Tributarios**" e ingresar en "**Actividad Económica**"
  - 13.- Clickear en "**Agregar**" y cargar la actividad.
  - 14.- Clickear en todos los "**Aceptar**" y cerrar la ventana del "**Sistema Registral**"
  - 15.- Clickear en "**Monotributo**"
  - 16.- Tildar "**Adhesión**", seleccionar el N° de CUIT y en caso de ser asociado a cooperativa de trabajo, integrante de SH o Monotributo Promovido, tildar la opción.
  - 17.- Clickear en "**Generar Declaración Jurada**"
  - 18.- Clickear en "**Si**" (si los datos son correctos)
  - 19.- Seleccionar el **Periodo Fiscal**
  - 20.- Completar los datos:
    1. **Ingresos brutos anuales** (Total facturado o a facturar)
    2. **Superficie Afectada en M2** (Escriba en forma numérica la superficie afectada a la actividad)
    3. **Energía Eléctrica en KW** (Escriba en forma numérica el consumo afectado a la actividad)
    4. **Monto Alquileres** (Escriba en forma numérica el monto anual de alquileres)
    5. **Precio Unitario** (Escriba en forma numérica el precio del artículo de mayor valor de venta)
- Recuerde que no puede quedar sin completar ninguno de estos 5 campos, sino el sistema le emitirá un mensaje de error. Ingresar solo Números. No poner comas, separadores de miles, ni signo \$. En los últimos 4 ítems (2, 3, 4 y 5) ingresar 0 (cero), cuando no existan datos a consignar.
- 21.- En "**Autónomos**" tildar el tipo que corresponda.
  - 22.- Si seleccionó la opción activo en el paso anterior deberá seleccionar una **Obra Social** del listado que se despliega.
  - 23.- **Unifica aportes:** Seleccione "**Si**" sólo si recibe aportes de Obra Social a través de su cónyuge.
  - 24.- Presione "**Agregar Integrantes**" si desea agregar a su cónyuge u hijos (deberá pagar un adicional de \$233 por cada integrante que agregue).
  - 25.- Clickear en "**Enviar formulario**"
  - 26.- Clickear en "**Confirmar**" si la información es correcta.
  - 27.- Imprimir los formularios N° 184/F (Constancia de adhesión) y N° 152 (Credencial de pago)

### CATEGORÍAS AL DORSO

Todo ello (que resulta más que suficiente para tener por acreditado este extremo), además, resulta coincidente con la información obrante en los legajos de inscripción al monotributo reservadas por Secretaría, de los surge que todas las personas que se había constatado que atendían los locales de venta de "ASH" se encontraban incluidas en la categoría "H" del monotributo, y que varios se habían registrado ante el fisco en una fecha temporalmente cercana y habían fijado un mismo domicilio fiscal y/o comercial en donde -justamente- funcionaba un local







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

comercial de la marca “ASH”<sup>16</sup>. Asimismo, en varios casos, habían fijado el domicilio fiscal y/o comercial en Callao N° 785 de esta ciudad y en Corrientes N° 805 de esta ciudad, sitios que coinciden con los domicilios fiscales denunciados por Liliana Delfina RAMÍREZ y Marcelo Julián LIOTTI, respectivamente, y de dos locales de la marca “ASH”<sup>17</sup>.

A su vez, lo expuesto también se corresponde con lo oportunamente constatado por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en cuanto verificó que los pagos de los monotributos de las personas vinculadas a la cadena de zapaterías “ASH” se hacían “en lote” (es decir, desde un mismo banco, el mismo día y a la misma hora)<sup>18</sup>.

Incluso, lo afirmado también se corresponde con la documentación secuestrada en ocasión de producirse los allanamientos, en cuyo marco se incautaron muchos de esos comprobantes de pagos (por ejemplo, en los domicilios de Lafuente 2780, La Plata 37, La Pampa 2321, Gual 2340 -aquí se secuestraron más de 300 fs. con esos comprobantes-, Cuenca 2921, entre muchas otras).

De acuerdo a todo lo expuesto, entiende el suscripto -tal como lo sostuvieron los acusadores- que en el marco del debate se pudo comprobar, sin lugar a dudas, que los responsables de la empresa “ASH”, cuanto menos durante el período de tiempo que conforma el objeto procesal de esta causa, le exigían a sus trabajadores que se inscriban en el monotributo, para acceder al empleo o para mantener el que ya tenían allí.

f) Que, por otra parte, en el debate se pudieron comprobar las siguientes circunstancias atinentes al desarrollo de las tareas laborales desplegadas por las personas que se encontraban inscriptas como monotributistas:

<sup>16</sup> Cfr. fs. 68/375 de los autos principales, y los anexos I y II formados a fs. 57 de los autos principales.

<sup>17</sup> Cfr. fs. 237 y 243 del “CUERPO DE INVESTIGACIÓN II”.

<sup>18</sup> Al respecto, cabe recordar que este extremo -que incluso fue reconocido por la defensa de LIOTTI en ocasión de formular su alegato- se corresponde con lo declarado por los funcionarios de AFIP que intervinieron en las tareas de fiscalización. En efecto, el inspector PRANDO refirió que “... en cuanto a los pagos del monotributo, en los allanamientos se encontraron pagos en lote de una cantidad de monotributistas, y por el sistema de la AFIP corroboraron que los pagos se hacían por lote en un mismo banco, el mismo día y horario, sumado a lo manifestado por las personas relevadas (que ellos indicaban que el pago lo hacía Liotti)...”. Asimismo, el testigo ONETO refirió “Que en las bases de AFIP se chequearon los momentos y los lugares de pago de las cuotas del monotributo, y determinaron que eran “por lote”, es decir en el mismo banco, el mismo día a la misma hora”.



1) que las personas que trabajaban para la empresa destinada a la producción y venta de calzados denominada bajo el nombre de fantasía “ASH” (*Argentinian Shoes*) habían conseguido el empleo a través de los medios habituales para tal fin (esto es, porque habían dejado su CV en uno de los locales comerciales, o a través de páginas de internet destinadas a la búsqueda de trabajo -como “*bumerang*”, “*computrabajo*” o “*zonajobs*”-, o mediante algún conocido que ya trabajaba en el lugar)<sup>19</sup>;

2) que los trabajadores de los locales comerciales de venta de zapatos tenían un horario fijo que cumplir, y que las personas que trabajaban en los talleres fabriles (confeccionando el calzado), no trabajaban cumpliendo un horario determinado, pero sí debían cumplir con la producción diaria de cierta cantidad de zapatos que le era encomendada por las autoridades de la empresa<sup>20</sup>;

<sup>19</sup> Ello, se constató a partir de las múltiples declaraciones testimoniales de los trabajadores, entre las cuales pueden mencionarse las siguientes: **Jorge Jonatan Cardozo** indicó que “... comenzó a trabajar en esa empresa por el contacto de un familiar (algo así como un ‘boca en boca’”); **Diego Javier Orellano** indicó que “... llegó a trabajar ahí por intermedio de un conocido”; **Esteban Javier Marrero** expresó que “... Su relación laboral con la cadena fue porque un amigo estaba trabajando ahí (*Leandro Sánchez*), le dijo que estaban buscando gente y llevó el CV”; **Oscar Omar Almada** indicó que “... Su relación con la cadena ASH inició a raíz de que dejó un CV, sobre el local de Cabildo y el muchacho que estaba trabajando en ese local le pasó el contacto de ‘esta gente’ y a la semana ya empezó a trabajar”; **Diego Sebastián Córdoba Reggi** refirió que “... entre los años 2013 y 2015 trabajó en la empresa ASH, que había una solicitud laboral en *Boomerang* y lo llamaron para hacer una prueba. Que el período de prueba era 2 a 3 meses y transcurrido el mismo quedó a trabajar”; **Gonzalo Barila** explicó “... que trabajó del 2013 al 2018 en varios locales, por recomendación de su amigo *Jonathan Cardozo*”; **Maximiliano Eduardo Torres** indicó que “... Entró a trabajar ahí por la aplicación *Bumeran*. Le tomaron la entrevista en Callao, a media cuadra de Congreso, y le dijeron que en dos días comenzaba a trabajar”; **Pablo Sebastián Barrios** expresó que “... El trabajo lo consiguió a partir de un comentario de un amigo, que trabajaba ahí. Así fue que quedó”; **Jonathan Adrián Nicola** indicó que “... Empezó por el contacto de un amigo que también trabajaba ahí, quien le recomendó que vaya a dejar un CV a un local de Callao 61, y le dijeron que al día siguiente vaya a hacer una prueba, y ahí quedó”; **Mauro Damián Salcedo** expresó que “... Llevó un CV al local, se entrevistó con *Fernando* (hermano de *Liliana*) y al día siguiente empezó a trabajar”; **Gabriela Isabel Caldentey** expresó que “... En marzo del 2012 empezó a trabajar para ASH. Se enteró por una novia de su hijo que estaban convocando gente, uno de sus hijos también trabajó en ASH. Tuvieron un encuentro con el matrimonio *Liotti*, y les propusieron trabajar” y **Cristian Samuel Azcarate** explicó que “... Su vínculo laboral empezó a partir de una publicación en “*computrabajo*”, lo llamaron, tuvo una entrevista y empezó a trabajar (ello, entre otros testimonios en igual sentido).

<sup>20</sup> En este sentido se pronunciaron los testigos **Jorge Jonatan Cardozo**, **Diego Javier Orellano**, **Esteban Javier Marrero**; **Diego Sebastián Córdoba Reggi**, **Marcos Javier Peralta**, **Pablo Sebastián Barrios**, **Jonathan Adrián Nicola**, **Jorge Alejandro Quevedo**, **Mauro Damián Salcedo**, **Gustavo José Galparoli**, **Guido Laurelli**, **Venancio González Cardozo**, **Alberto Cardozo**, **Fermín Jourdan**, **Néstor Fabian Enciso Ecurra**, **Diego Alejandro Martínez** y **Matías Daniel Aguirre**; todo lo cual, a su vez, se corresponde con lo informado por los trabajadores en el marco de los relevamientos de personal efectuados por la AFIP durante el desarrollo de las tareas de fiscalización, como así también en ocasión de producirse los allanamientos de los locales comerciales y los talleres fabriles de la empresa.







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

3) que todos los trabajadores cobraban un salario por sus tareas, el cual, en general, se abonaba por día (en el caso de los locales comerciales lo retiraban los propios trabajadores de la caja -de lo que se deja constancia en el sistema en red con el que operaba la cadena de zapaterías- y, el de los trabajadores de los talleres, se los abonaba el imputado LIOTTI)<sup>21</sup>;

4) que -en el marco de sus tareas laborales- las personas que trabajaban para “ASH” recibían órdenes e indicaciones acerca de cómo tenían que llevar a cabo su actividad<sup>22</sup>, y también se les advertía sobre las sanciones que podían llegar a tener en caso de incumplimiento a las pautas encomendadas (por ejemplo, que se les descontaría parte del salario del día en caso de llegar tarde, entre otras)<sup>23</sup>;

<sup>21</sup> En este sentido se pronunciaron los testigos Jorge Jonatan Cardozo, Andrés Javier Pérez, Diego Javier Orellano, Esteban Javier Marrero, Oscar Omar Almada, Jorge Emanuel Herrera, Diego Sebastián Córdoba Reggi, Agustín Maszong, Gonzalo Barila, Marcos Javier Peralta, Jonathan Adrián Nicola, Cristian Gabriel Rocdan, Jorge Alejandro Quevedo, Gabriela Isabel Caldentey, Cristian Samuel Azcarate, Daniel Leandro Rodríguez, Jonatan Alanis, Gustavo José Galparoli, Guido Laurelli, Venancio González Cardozo, Fermín Jourdan, Carlos Alberto Lara, Leonardo Damián Falconier, Raúl Horacio Aranega, Lucas Emanuel Barbieri, Néstor Fabian Enciso Escurra y Matías Daniel Aguirre (entre otros); todo lo cual -al igual que lo indicado en la nota al pie anterior- también se corresponde con lo informado por los trabajadores en el marco de los relevamientos de personal efectuados por la AFIP durante el desarrollo de las tareas de fiscalización, como así también con lo constatado en ocasión de producirse los allanamientos de los locales comerciales y los talleres fabriles de la empresa.

<sup>22</sup> En cuanto a las órdenes de trabajo, cabe remitirse a las declaraciones testimoniales prestadas por los trabajadores, que describieron cómo era la modalidad de trabajo. Fundamentalmente, quienes atendían los locales refirieron que sus tareas eran las de un vendedor -como cualquier otro- y que, en ese marco, tenían que encargarse de realizar los inventarios del local -controlar la cantidad de zapatos-, confeccionar las vidrieras, mantener el local limpio, etc., y refirieron que intercambiaban mensajes en el grupo de WhatsApp, en el que estaban los responsables de la administración de ASH, del cual recibían instrucciones sobre cómo proceder. Además, sobre este aspecto, cabe recordar que entre los documentos secuestrados también se hallaron detalles de obligaciones y objetivos, tareas a realizar, etc. En aquellos documentos, además, se indica que, en caso de duda, se debían comunicar con las personas y teléfonos que allí se indican, entre los cuales figuran “Liliana” y “Marcelo” (que, sin dudas, refieren a Liliana RAMÍREZ y Marcelo LIOTTI) y -en otro documento- se indica que una vez realizado el cambio de vidriera debía enviarse un informe (fotografía) a los mails “l d r RAMÍREZ@hotmail.com”, en el que se especifica “Liliana” y “Marcelo”, o a “jessy 09 @live.com” en el que se especifica Jéssica y Darío (cfr. fs. 1312/1321). Por otra parte, los trabajadores de los talleres refirieron que se les encomendaba realizar cierta cantidad de zapatos por día, y que el diseño de los zapatos que debían realizar les era informado por los responsables de la empresa. Todo ello, además, se corresponde con la información obtenida a partir de los relevamientos de personal. En suma, todas las declaraciones -evaluadas en contexto con las demás pruebas obrantes en la causa- son claras al demostrar que los trabajadores de ASH recibían órdenes sobre cómo debían realizar su trabajo.

<sup>23</sup> En cuanto a ello, cabe recordar -por ejemplo- las siguientes declaraciones: **Jorge Jonatan Cardozo** indicó que “... para trabajar había que cumplir algunas pautas: cumplir con el horario (de 9 de la mañana para registrarte, y pasados los 15 minutos se te empezaba a descontar el dinero que cobrabas). Asimismo, **Gustavo José Galparoli** indicó que “... es cierto que les descontaban si llegaban tarde”. Ello, como puede observarse, se corresponde con el contenido de uno de los documentos secuestrados en



5) que los trabajadores podían gozar de vacaciones<sup>24</sup>;

6) que, en función de las necesidades de la empresa, los empleados de los locales comerciales tenían que rotar de un local a otro; así como también que -a veces- tenían que desplazarse a trabajar en algún otro local (al que no estaban asignados en ese momento), para cubrir la ausencia momentánea de algún compañero de trabajo<sup>25</sup>; y,

7) que, en general, los trabajadores de la empresa “ASH” eran despedidos sin previo aviso; y que, además, por esos despidos se les pagaba una suma dineraria en concepto de liquidación final, para lo cual tenían que

---

ocasión de realizarse los allanamientos realizados en la causa (puntualmente, en el allanamiento de la calle secuestrado Olazábal 5113), en el que se indica: “**ATENCIÓN: LES COMUNICAMOS A LOS ASOCIADOS QUE A PARTIR DEL MARTES 04/09/2012 EL HORARIO DE ENTRADA ES A LAS 09:00 HS. LOS QUE LLEGUEN... DESPUES DE LAS: 9:15 HS. DEBERÁN COBRAR \$ 30,00 MENOS. DESPUES DE LAS: 9:30 HS. DEBERÁN COBRAR \$ 50,00 MENOS. DESPUES DE LAS: 10:00 HS. DEBERÁN COBRAR \$ 70,00 MENOS. PARA LOS QUE ENTREN A LA TARDE TIENEN UN HORARIO NUEVO ES A LAS 14:40 HS. DESPUES DE LAS 14.55 HS. DEBERÁN COBRAR \$30,00 MENOS; DESPUES DE LAS 15.10 HS. DEBERÁN COBRAR \$50,00 MENOS. DESPUES DE DOS DÍAS TARDE SERÁN SUSPENDIDOS SIN PERVIO AVISO. LA ADMINISTRACIÓN ASH**”.

<sup>24</sup> Ello, quedó claro a raíz de las diversas declaraciones testimoniales recolectadas a los trabajadores, como pueden ser las siguientes: **Jorge Jonatan Cardozo** (indicó que “... las vacaciones las pagaban como si fuera un día de trabajo, y se tomaban la licencia según el cronograma de licencias para vacaciones que les daban... que quienes los mandaban a rotar en los locales eran Liotti o Ramírez, lo mismo con respecto a lo que dijo del cronograma de vacaciones, que Liotti y Ramírez se lo daban”), **Diego Javier Orellano** (indicó que “Tenía vacaciones, pero licencia no. Para tomarse vacaciones, le tenía que avisar a Liliana o a Darío, y ellos organizaban y veían si podían tomársela”), **Gonzalo Barila** (indicó que “... tenía vacaciones, al principio dos semanas en verano y una en invierno”). Ello, entre muchas otras declaraciones vertidas en igual sentido, a las que cabe remitirse por razones de brevedad. Todo ello, a su vez, se corresponde con la planilla con apuntes sobre los días de vacaciones de los que gozarían los empleados y los relevamientos para reemplazarlos oportunamente (cfr. fs. 1322/1328), que fue hallada en el allanamiento llevado a cabo en el domicilio de la calle Gual N° 2340 de esta ciudad (aunque allí también se detallan las vacaciones de los empleados que cumplían funciones en otros domicilios).

<sup>25</sup> En este sentido, ver declaraciones testimoniales de **Jorge Jonatan Cardozo** indicó “Que trabajó en los locales de Uruguay 671, Corrientes 805, Santa Fe 1544 y Santa fe 3507... Que la rotación de los empleados era en función de las necesidades de la empresa... que quienes los mandaban a rotar en los locales eran Liotti o Ramírez”; **Diego Javier Orellano** indicó “... que él trabajó en el local de Santa Fe 1544, y en otro de la calle Lavalle que no recuerda la numeración -estaba en una esquina-. Se cambió de local, porque abrieron el local de Lavalle y lo mandaron a ese local. Quien el que le avisó a él que se tenía que cambiar de local fue Darío, pero calcula que Liliana le dio la orden a Darío”; **Esteban Javier Marrero** indicó que “... entre los años 2014 y 2015, no recuerda bien la fecha, trabajó en la zapatería. En la Zapatería ASH. Ahí trabajaba en Callao, había varios locales. En callao había dos, en Florida también. Él pasó por varios, iban rotando los lugares en los que atendían”; **Oscar Omar Almada** indicó “Que trabajó para la cadena de zapaterías ASH. En Villa Urquiza, cree que sobre Olazábal, no recuerda la altura. En la calle Cuenca fue a trabajar como relevo, porque cuando faltaba gente “los movían”, pero su local era el de Urquiza, ese era su local fijo... Que al local de la calle Cuenca fue esa vez, estuvo como dos semanas trabajando ahí, en reemplazo de un chico que había tenido un accidente con la moto”; **Diego Sebastián Córdoba Reggi** expresó que “... trabajó en varios locales. Que empezó en el local de Av. corrientes 805, luego trabajó en el local ubicado en Av. Córdoba y Araoz,





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

acercarse a una oficina, recibir el dinero y firmar un documento en el que el trabajador se comprometía a no iniciar acciones legales contra la empresa<sup>26</sup>;

g) Que, por otra parte, se comprobó cuál era el mecanismo de facturación para realizar las ventas de los zapatos producidos por la empresa “ASH”.

En concreto, se determinó que los responsables de la cadena ASH habían diseñado el siguiente esquema: cada trabajador tenía facturas “C” emitidas a su nombre, pero que -en cada uno de los locales donde se vendía el calzado ASH- también había facturas emitidas a nombre del

---

*después en la Av. La Plata 37 -adentro de una galería- y después fue rotando en otras sucursales... Que había rotación de personal y la manejaban ellos cuando hacía falta gente o había que cubrir un franco semanal. Que cuando dice ellos refiere a Liotti y Liliana Ramírez”. En sentido similar, se pronunciaron los testigos Agustín Maszong, Maximiliano Eduardo Torres, Pablo Sebastián Barrios, Jonathan Adrián Nicola, Santiago Ojoli, Jorge Alejandro Quevedo, Gonzalo Javier González, Gabriela Isabel Caldentey, Cristian Samuel Azcarate, Daniel Leandro Rodríguez, Gustavo José Galparoli, Gustavo José Galparoli, Matías Daniel Aguirre, cuyas declaraciones obran vertidas en las respectivas actas de debate y a cuyo contenido se remite para evitar reiteraciones innecesarias.*

<sup>26</sup> Fundamentalmente, ello también surgió de las declaraciones testimoniales oídas en el juicio (de los trabajadores de “ASH”), entre las que pueden mencionarse las siguientes: **Esteban Javier Marrero** indicó que “Su vínculo con ASH terminó en 2015, después del allanamiento empezaron a echar a mucha gente. Su despido se lo comunicaron personalmente, le dijeron que a partir de mañana no iba a trabajar más... que cuando lo despidieron cobró una liquidación final... Tuvo que firmar papeles, le pusieron un abogado y le hicieron ir a un lugar y firmar un papel para que quede constancia de eso, de que no podía volver a reclamar nada. De los responsables de ASH no firmó ninguno ese papel de despido, fue el abogado, de quien no recuerda el nombre); **Andrés Javier Pérez** expresó que “... al tiempo del allanamiento fue despedido, en forma verbal, que cree que le dieron una liquidación en dos partes, que firmó unos papeles donde decía que no podía iniciarle ningún tipo de nada, como que esos papeles eran para que esté todo cerrado, como que no podía reclamar nada... que esa liquidación que dijo que firmó cuando lo despidieron, la firmó con unos abogados que ellos pusieron, en el centro, él solo fue y firmó. Cuando dice ‘ellos’ refiere a Liotti y Ramírez, porque son los dueños”; **Oscar Omar Almada** indicó que “Su vínculo laboral terminó después del allanamiento a varios locales, ahí fue que se fue. Arreglaron y se fue... habló telefónicamente con Marcelo, a quien le dijo que no iba a trabajar más y éste le dijo que no había problema, llegaron a un acuerdo y listo. Que ese arreglo económico implicó que Marcelo le entregó plata, por el tiempo trabajado, porque los chicos cada vez que se iban, que no trabajaban más, Marcelo les daba una plata por el tiempo que habían trabajado. Recuerda que por esto firmó un papel de que recibió ese dinero, y nada más. Ese papel decía que era una retribución al tiempo que había trabajado, y que aceptaba el hecho de irse”. **Jorge Emanuel Herrera** indicó que “cuando le dijeron que deje de trabajar, le pagaron 35.000 pesos, y fue en una oficina de un abogado cerca del edificio de la central de la PFA, se lo pagaron en dos partes. Lo que firmó cree que es un recibo. Al abogado solo lo vio esa vez (y la segunda vez, cuando cobro la otra parte de ese dinero)”. Ello, entre muchas declaraciones vertidas en igual sentido, a las que también cabe remitirse para evitar reiteraciones innecesarias (ver los dichos -en sentido similar- de Maximiliano Eduardo Torres, Pablo Sebastián Barrios, Jonathan Adrián Nicola, Cristian Gabriel Rocdan, Santiago Ojoli, Jorge Alejandro Quevedo, Mauro Damián Salcedo, Gabriela Isabel Caldentey, Cristian Samuel Azcarate, Leonardo Damián Falconier, Lucas Emanuel Barbieri, Diego Alejandro Martínez). Sobre ello, además, cabe recordar que también se determinó la existencia de cartas documentos efectuados por quienes cumplían funciones para la empresa “ASH” por reclamos laborales dirigidas contra LIOTTI, conciliaciones laborales en las que LIOTTI -sin reconocer los hechos- arribó a acuerdos con los demandantes (también monotributistas) y numerosos registros



imputado Marcelo LIOTTI<sup>27</sup>. Además, se comprobó que la impresión de esas facturas era efectuada por orden del propio LIOTTI (es decir, que las facturas no eran encargadas por las personas que se encontraban registradas como monotributistas), y luego les eran enviadas a los trabajadores juntamente con los repartos de mercadería que se realizaban por la tarde/noche.

Asimismo, se comprobó que los vendedores de los locales habían recibido instrucciones para realizar un máximo de dos o tres ventas diarias con esas facturas emitidas a su nombre, y que las restantes debían ser documentadas en las facturas emitidas a nombre de Marcelo Julián LIOTTI (que, como se dijo, había en todos los locales), o de Liliana RAMÍREZ. Además, se comprobó que los vendedores de los locales, ocasionalmente, podían utilizar facturas de sus compañeros para documentar las ventas de los zapatos, pero que -en tales casos- tampoco podían facturar más de dos o tres venta por día con esas facturas (para las demás debían usar las facturas de Marcelo LIOTTI y/o Liliana RAMÍREZ).

Ello, fundamentalmente pudo reconstruirse a partir de los testimonios de los trabajadores. En concreto, cabe recordar -a modo ilustrativo- las siguientes declaraciones:

- **Jorge Jonatan CARDOZO** expresó “*Que tenía facturas, pero él no solicitaba su confección, no sabe quién solicitaba su confección, pero el talonario les llegaba con las entregas de las mercaderías, les llegaban las bolsas con las facturas (facturas propias, de compañeros, de la firma de ellos, etc).* Asimismo, en otro tramo de su declaración expresó que *Que podía vender con talonarios de otros compañeros, o incluso de Liotti, y que esos talonarios eran usados muy poco, facturaban un máximo de dos o tres ventas por día, más que eso no, dependía del local donde uno estaba*”.

- **Andrés Javier PÉREZ** indicó “... *Que ‘a nosotros nos traían’ talonarios de facturas a su nombre, y después había unos que les pertenecían ‘a ellos’... Que él tenía que facturar, por día, cierta*

---

ante el SECLO, de conciliaciones obligatorias en las que LIOTTI, RAMÍREZ y ASH CALZADOS serían parte (cfr. fs. 1092/1093, 1104/1105, 1432/1433 y 1545/1575). Incluso, en las generales de la ley, muchos de los testigos que prestaron declaración en el juicio refirieron tener litigios de índole laboral contra los imputados, por el tiempo en que trabajaron para ASH.

<sup>27</sup> Y también podía haber a nombre de la imputada RAMÍREZ.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*cantidad con su talonario y después con los que estaban a nombre de ellos. Que no sabe quién encargaba estos talonarios, él solo los recibía, no sabe quién los hacía”.*

- **Diego Javier Orellano** explicó que *“Su trabajo consistía en vender zapatos; vender, cobrar, acomodar la vidriera, reposición de mercadería, etc. Las ventas las hacía con facturas de talonarios. Esas facturas había a nombre de él, y otras estaban a nombre de “ellos”. Los obligaban a facturar dos ventas por día a nombre propio, y luego a hacer las restantes a nombre de “ellos”. Esas instrucciones se las daban por teléfono. Hablaban por teléfono, con Marcelo o Liliana, ellos los llamaban y les decían cómo hacer las cosas, casi siempre era por teléfono... No recuerda quién le encargó los talonarios de facturas, dijo que les llevaban los talonarios, que ellos no los pedían, a la noche cuando entregaban la mercadería, también le llevaban los talonarios”.*

- **Esteban Javier Marrero** indicó que *“Los hacían facturar a su nombre dos facturas al día, tenía facturas a su nombre. Las facturas se las daban “ellos”, no las encargaba él. En otro tramo de su declaración indicó que Además de los suyos, también había talonarios de Julián Liotti, y los usaban diariamente. Además de los de Liotti también podían usar los talonarios del compañero que estaba en el local. A veces, en ciertos casos, podían usar los talonarios de otro compañero que no esté en el local”.*

- **Oscar Omar Almada** explicó que *“Para las ventas de los zapatos, se manejaban con sus facturas. Él no las mandaba a hacer, de eso se encargaban “ellos”, cuando se iban agotando los talonarios de donde ellos facturaban, “ellos” les iban mandando, eso lo manejaban “ellos”, él tampoco está tan al tanto de cómo se manejaba todo eso”.*

- **Jorge Emanuel Herrera** indicó que *“Para sus ventas, emitía sus facturas. Los talonarios de facturas no los encargaba él, no sabe quién lo hacía, calcula que el abogado o el contador, no sabe quién”. Luego, indicó que “... cuando recibía la mercadería también recibía sus talonarios de factura”.*

- **Diego Sebastián Córdoba Reggi** explicó *“Que les daban los talonarios de facturación a nombre de Marcelo Liotti, que tenía dos talonarios. Y también tenían otra facturación a nombre de Liliana Ramírez... Que ellos le explicaron cómo era el sistema de facturación...”*



*Que sobre el tema facturación, que Liotti tenía talonarios originales y truchos con la misma numeración y yo facturaba con eso”. En otro tramo de su testimonio, indicó que “... los talonarios de facturas los manejaba Liliana Ramírez. Que les pedían su código fiscal, que ellos los manejaban, con ese dato se pedían en la imprenta, que no sabe quién los mandaba a hacer, pero la data fiscal la pedía Liliana Ramírez”.*

- **Gonzalo Barila** indicó: “sobre si tenía talonarios de facturas, sostuvo que al principio se los dieron cuando lo pusieron como monotributista, que se los dio Liliana...”.

- **Marcos Javier Peralta** expresó “... Que recibían documentación de talonarios para anotar lo que vendían y darle al cliente. Que los talonarios cree que eran de Liotti, pero no recuerda...”.

- **Maximiliano Eduardo Torres** expresó: “Para efectuar las ventas, él tenía un talonario con su nombre. Él no encargaba esos talonarios suyos a las imprentas, le llegaban a su nombre. Cuando le faltaba el talonario, lo tenía que pedir y se lo mandaban, le llegaban con la mercadería. En otro fragmento de su declaración, indicó que Cuando facturaba lo hacía con su talonario (tenía que hacerlo con el propio una cierta cantidad, cree que 600 pesos por día, pero no recuerda exactamente), sabe que tenía que facturar con sus talonarios una cierta cantidad, y después tenía que facturar en las facturas de Liotti. Él tenía sus talonarios, y los llevaba a los locales que le decían que tenía que ir a trabajar, aunque el talonario no diga esa dirección”.

- **Jonathan Adrián Nicola** indicó “... También tenían talonarios para efectuar las ventas, la mayoría de los cuales estaban a nombre de Liotti pero también tenían talonarios propios, recuerda que era una instrucción directa de Liotti y Liliana que tenían que hacer solo dos facturas con sus talonarios propios, y luego con los de ellos”.

- **Cristian Gabriel Rocdan** mencionó que “... Con sus facturas tenían que hacer un monto por día (de 500 u 800 pesos) con facturas a nombre propio, y luego ya podían facturar lo que sea... Esas facturas les llegaban, él no las encargó”.

- **Santiago Ojoli** explicó “... Que los hacían pasar dos pares de zapatos a nombre propio y después tenían talonarios de ellos, y las restantes ventas las hacían con éstos (solo facturaban dos pares de zapatos a nombre propio). Había una doble facturación. Una a nombre





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*propio, y la restante de Delfina y Marcelo Liotti, que eran secundarias. Les daban la orden de que se haga así. Esa orden se la daban Liliana Ramírez y Marcelo Liotti (en general se comunicaba Liliana, salvo que sea algo muy importante y ahí sí se comunicaba Marcelo)... Que cuando iba a trabajar a otros locales (de CABA), facturaba con talonarios de Marcelo Liotti y Liliana Ramírez, esos talonarios estaban en todos los locales”.*

- **Mauro Damián Salcedo** indicó que “... Les llevaban facturas a nombre propio, tenían que facturar una cierta cantidad a nombre propio, y el resto con las facturas de Liotti. Él no encargaba las facturas a su nombre, se las proveían ellos. Una cantidad de zapatos tenían que facturar a su nombre, y el resto con las de Marcelo. No había instrucciones por escrito de esto, era todo de palabra. Asimismo, indicó que Para facturar en distintos locales, refirió que si iba a un local por un día, ese día facturaba con las facturas de Liotti, pero cuando les hacían un cambio definitivo de local, les mandaban nuevas facturas con el nuevo domicilio”.

- **Cristian Samuel Azcarate** mencionó “Que les mandaban unos comprobantes al local donde estaban, con unas facturas a nombre propio. Que él utilizaba las facturas a nombre propio. No recuerda quién encargaba esas facturas... En otro tramo, indicó que que trabajó más que nada en el local de Rivadavia, a veces tenía que cubrir en otros lugares, pero generalmente ahí. Cuando iba a otros locales que no era el suyo, facturaba con los talonarios que estaban en el local al que iba”.

- **Daniel Leandro Rodríguez** expresó que “En el local donde trabajaba, ellos le hacían facturar dos zapatos a su nombre, y el resto a nombre de ellos”.

- **Jonatan Alanis** mencionó que “cuando vendía cree que emitía facturas a nombre propio. Cuando se realizaba una venta las emitía, pero por lo general no podía hacer mucha cantidad de facturas... Que respecto de lo que dijo que tenía que facturar cierta cantidad de facturas, aclara que... siempre le decían que tenía que facturar tanta cantidad por día, y cuando alcanzaba esa cantidad se hacía un talonario, pero no era el oficial del monotributo, no era válido”.

- **Gustavo José Galparoli** indicó que “... Por las ventas que hacía, les daban una boleta, unos remitos, facturaban. Esas facturas



#32859976#347198392#20221027213627864



*estaban a nombre propio cree, pero no hacían muchas, algunas por día. Esta orden se la daban ellos, cree que esto lo hacían todos”.*

- **Guido Laurelli** expresó que “... Por las ventas emitía facturas o recibos, que estaban a nombre de ASH. También había comprobantes a su nombre, se los entregaban cada tanto, por lo general iba una camioneta a la noche que se los daban”.

- **Leonardo Damián Falconier** (quien se encargaba de realizar los repartos de mercadería a los locales) explicó que “... su trabajo era preparar los pedidos, cargar las camionetas, hacer el reparto en todos los locales, y los locales le daban la plata con un sobre con el dinero. Además de mercadería llevaban talonarios”. Asimismo, exhibido que le fue el papel que reza “MANDAR A HACER”<sup>28</sup>, dijo que “... lo vio, que era para hacer los talonarios. Que los talonarios llegaban todos juntos, los iba a buscar Marcelo. Marcelo los iba a buscar a la imprenta y él los distribuía. La imprenta estaba cerca de Gual, no recuerda la dirección”. Incluso, este testigo refirió que “... él no recuerda haber facturado a su nombre, que se dio cuenta que había talonarios a nombre suyo, pero él nunca facturó nada. Se dio cuenta porque llegaron talonarios a su nombre, también de su hermano, y vio que tenía su nombre. Nunca le pidieron autorización para hacer talonarios a su nombre, jamás. Le preguntaron por esto a Marcelo y le dijeron que era una formalidad”.

- **Lucas Emanuel Barbieri** (quien también se ocupaba de los repartos desde la fábrica hacia los locales comerciales donde se vendían los productos) explicó “... Que junto con la mercadería que repartían (en los repartos que hacían al final del día), introducían en unas bolsas negras los talonarios (con las facturas como la que le fue exhibida), que iban a los diversos locales”.

- **Matías Daniel Aguirre** indicó que “En su trabajo facturaba, tenían dos facturas, una que le decían que facturen hasta tanta plata y después cerraban esa y facturaban con la otra. Esas facturas estaban a nombre de Liotti, todas, que el testigo recuerde. Que tenía facturas a su nombre, tanto él como su compañero, eran las originales digamos. Asimismo, indicó que “trabajó en los locales de Corrientes y Esmeralda (el primero), luego en Las Heras y Pueyrredón, luego en Santa Fe entre Uruguay y Paraná y finalmente en Av. Córdoba al 4000 (por

<sup>28</sup> Que fue secuestrado en el taller fabril ubicado en el inmueble de la calle Gual 2340.







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*ahí)” y que “Que en todos los locales facturaba de la misma manera, hasta cierto monto con unas y después con las otras. Todos los locales tenían el mismo manejo. Que él hacía primero con el talonario propio y después con otro. Los talonarios propios los tenía en el local en donde estaba, no estaban en todos los locales, cuando iba a otro local facturaba con el talonario de la persona que estaba fija en ese local”.*

En suma, todos esos testimonios (que demostraron cómo funcionaba la facturación en la empresa “ASH”) resultan concordantes con otras circunstancias constatadas, como ser: que las facturas utilizadas por todos los monotributistas conservaban el mismo formato y habían sido confeccionadas por las mismas imprentas (de Eduardo ENRIQUEZ y de Luis Ángel CARVAJAL)<sup>29</sup>; que, en ocasión de producirse los allanamientos de los locales comerciales, se encontraron facturas sin uso a nombre de otras personas también inscriptas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (que -en ese entonces- no estaban trabajando en ese local) y que en esos procedimientos también se incautaron talonarios emitidos a nombre de Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ.

**h)** Que, por otra parte, se comprobó que los responsables de “ASH” (esto es Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ) montaron un sistema para simular que los locales comerciales de la empresa donde se vendían los productos marca “ASH” -o “parcelas” de esos inmuebles- eran alquilados por los monotributistas.

Es efecto, se comprobó que los alquileres de los locales comerciales de la empresa ASH eran efectuados por sus responsables (LIOTTI y RAMÍREZ), pero que éstos les hacían firmar a los trabajadores contratos ficticios de alquiler por esos inmuebles (o por “parcelas” de aquellos), lo cual se trataba de una mera ficción, pues en el juicio se probó

<sup>29</sup> Entre otras, las facturas emitidas por Walter David CARRAZANA, Matías Daniel AGUIRRE, Gabriela Noemí ROLÓN, Claudio Alfredo BEROLDO, José Luis CASARES, Diego Javier ORELLANO, Jorge Jonatan CARDOZO, Juan Manuel D AMORE, Mauro Damián SALCEDO, Cristian Gabriel ROC DAN, Fernando Ramón RAMÍREZ, Damián Adrián LOPEZ, Emanuel Iván TOBARES, Leandro Manuel OLIVA, Santiago OJOLI, Domingo Iván SARMIENTO, Marcelo Alejandro KLOSTER, Jorge Jonatan CARDOZO, Tomás CORREA, Leandro Manuel OLIVA, Esteban Javier MARRERO, Chistian Samuel AZCARATE, Ezequiel SAWICKI, Edgardo Germán VERÓN, Pablo Sebastián BARRIOS, Daniel Leandro RODRIGUEZ y Diego Sebastián CÓRDOBA REGGI fueron confeccionadas por la misma imprenta (“EDUARDO ENRIQUEZ”) y las facturas emitidas por Jé sica Soledad RAMÍREZ, Anabella RAMÍREZ, Federico R. ARANEGA, Mario Santiago RODRIGUEZ, Roxana M. HURTADO ALVEZ, Marcelo Salvador VAZQUEZ, Julián SAMANIEGO, Emanuel ALMIRÓN ARCE, fueron confeccionadas por la misma imprenta (LUIS ÁNGEL CARVAJAL)



que ninguno de esos trabajadores que figuraban como locatarios de los inmuebles había verdaderamente intervenido en el alquiler ni en el pago de tales alquileres, sino que, por el contrario, o habían firmado esos documentos a pedido de los dueños de ASH o directamente se les había falsificado su firma allí impresa.

Sobre ello, además, se comprobó que LIOTTI y RAMÍREZ (como responsables de la cadena de zapaterías) emitían falsos comprobantes, en los que -en forma mendaz- se consignaba que los trabajadores de ASH abonaban la cuota mensual correspondiente al alquiler de esos inmuebles o a “parcelas” de aquellos<sup>30</sup>.

En efecto, en primer lugar, cabe recordar que -durante la fiscalización llevada adelante por la AFIP- se constató que quienes se encontraban atendiendo al público manifestaron, en algunos casos, que “alquilaban una parcela” del local a Liliana Delfina RAMÍREZ o a Marcelo Julián LIOTTI<sup>31</sup>. Además, en oportunidad de llevarse a cabo los allanamientos de los distintos locales comerciales, se secuestraron documentos que daban cuenta de esos contratos de locación entre los empleados y los responsables de la cadena de zapatería.

Sin embargo, cabe recordar que los trabajadores de “ASH” que declararon en el juicio -y que figuraban como “locatarios” en los contratos de alquiler secuestrados- fueron unánimes al desconocer esas contrataciones (por el contrario, refirieron que nunca habían alquilado ninguno de los locales en los que trabajaban, que esos alquileres eran afrontados por la empresa “ASH”, y que tal vez le habían hecho firmar ese tipo de documentación, pero desconocían los motivos de ello).

Del mismo modo, también se secuestraron comprobantes de pago apócrifos, en los que falsamente se consignaba que -cada mes- el empleado (a cuyo nombre se había realizado el contrato de locación apócrifo) había entregado una determinada suma de dinero en concepto de

---

<sup>30</sup> Ello, como se explicará más adelante, sin lugar a dudas tuvo lugar para robustecer la simulación de que los trabajadores de la cadena de zapaterías eran trabajadores “independientes” (es decir, eran verdaderos monotributistas), cuando en realidad no lo eran.

<sup>31</sup> Ver, por ejemplo, fs. 100/103 del cuerpo de actuaciones correspondientes a Walter David CARRAZANA; cuerpos de actuaciones correspondientes a Santiago OJOLI, Diego Javier ORELLANO y Gonzalo BARILA; fs. 14 del cuerpo de actuaciones correspondientes a Edgardo Germán VERÓN.



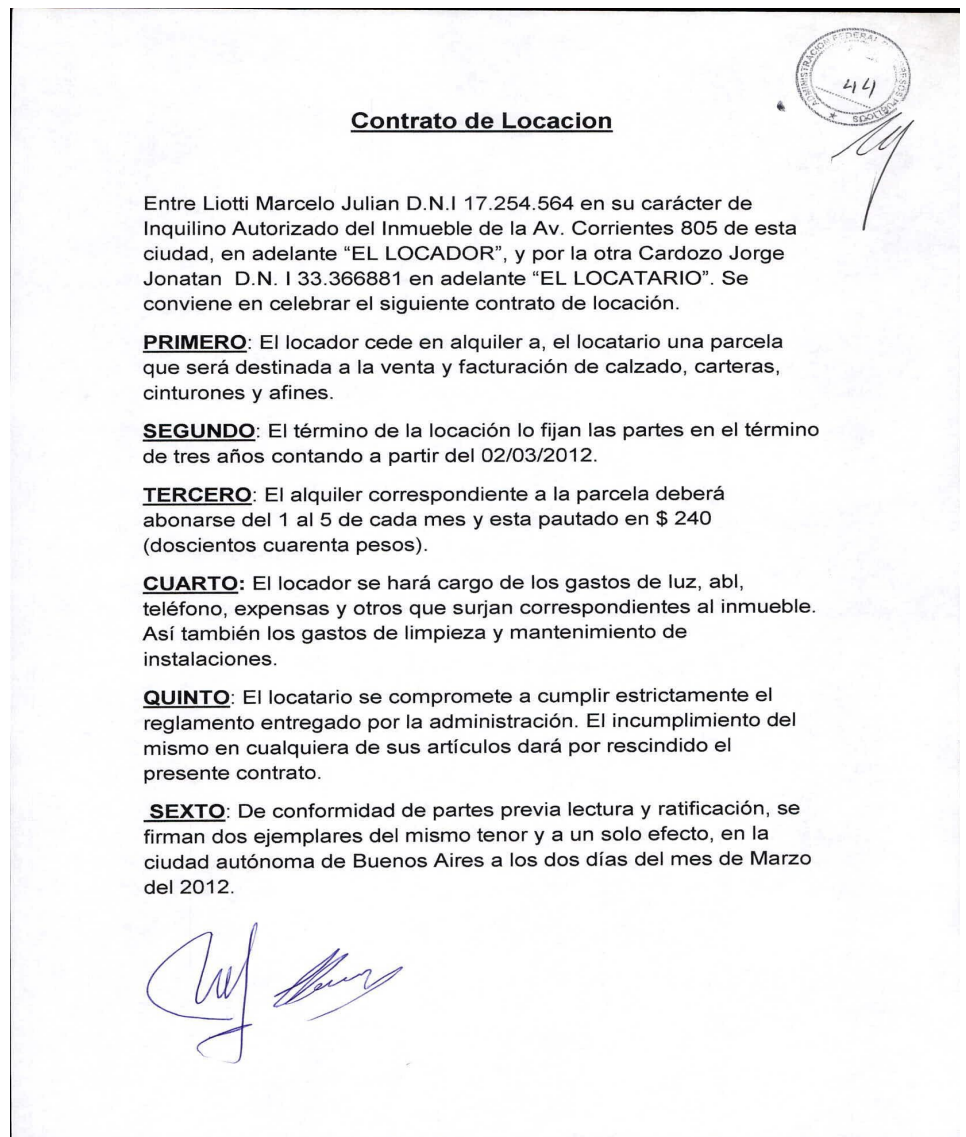


## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

alquiler por la parcela del inmueble en el que se comercializaban los productos ASH.

Para ilustración, se agrega imagen digitalizada de dos de los múltiples contratos de locación secuestrados en los allanamientos realizados<sup>32</sup>:



<sup>32</sup> Se deja constancia que similares contratos también se incautaron en muchos otros de los allanamientos que se realizaron en la presente causa.



## CONTRATO DE LOCACION



Entre **Liliana Delfina Ramírez** D.N.I. 26.855.060 en su carácter de inquilina autorizada del inmueble de Av. Santa Fe 1544 de esta ciudad, en adelante el Locador y por la otra **Jonatan Cardozo** en adelante el Locatario. Se conviene en celebrar el siguiente contrato de locacion

PRIMERO: El locador cede en alquiler al locatario una parcela que será destinada a la venta y facturación de calzado, carteras, cinturones y afines.

SEGUNDO: el término de la locacion lo fijan las partes en el término de tres años contando a partir del Mes de Marzo de 2013

TERCERO: el alquiler correspondiente a la parcela deberá abonarse del 1 al 5 de cada mes y esta pautado en **\$ 240 (DOSCIENTOS CUARENTA PESOS)**

CUARTO: El locador se hará cargo de los gastos de Luz, Abl, Teléfono, Expensas y otros que surjan correspondientes al inmueble. Así también los gastos de limpieza y mantenimiento de instalaciones.

QUINTO: El locatario se compromete a cumplir estrictamente el reglamento entregado por la administración. El incumplimiento del mismo en cualquiera de sus artículos dará por rescindido el presente contrato.

SEXTO: De conformidad de partes previa lectura y ratificación se firman dos ejemplares del mismo tenor y aun solo efecto, en la **CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES A LOS DIAS 04 DE MARZO DE 2013.**

A iguales fines de ilustración, también se copia a continuación una imagen de uno de los múltiples recibos secuestrados en el marco de los allanamientos realizados<sup>33</sup>:

<sup>33</sup> Se deja constancia que similares recibos también se incautaron en muchos otros de los allanamientos que se realizaron en la presente causa.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

N°6588  
Buenos Aires *el Fin* de *2013*  
Recibí de *Jonatan Cardozo*  
La cantidad de pesos *Quince*  
*Quince*  
por el alquiler de la parcela de la calle  
*Av. Corrientes 805*  
Son \$ *240*  
ARGENTINIAN SHOES  
Administración  
Scanned with CamScanner

Sin embargo, y como se dijo, los trabajadores de “ASH” que declararon en el juicio -y que figuraban como “locatarios” en los contratos de alquiler secuestrados- fueron unánimes al desconocer esas contrataciones. Al respecto, cabe recordar los siguientes testimonios, que dan cuenta de lo afirmado.

- **Jorge Jonatan Cardozo** figuró como locatario de distintos inmuebles (como, por ejemplo, de los ubicados sobre la Av. Santa Fe 3507 y 1544, y el de la calle Corrientes 805), conforme los documentos secuestrados en esos inmuebles, en oportunidad de producirse los allanamientos.

Sin embargo, este testigo -en su declaración- fue claro al mencionar que “... Que él no alquilaba el local comercial de Santa Fe 3507... Que... no firmó ningún contrato de locación. Que recuerda que en momento había firmado algo así como un contrato de locación, pero no puede ser preciso...”. En sentido similar, en su declaración se le exhibió el contrato de locación entre él y la imputada Ramírez, y dijo “... que lo reconoce, lo firmó en la puerta del local de la calle Corrientes 805 con



*Marcelo Liotti y la Sra. Ramírez... Que respecto del pago al que refiere la cláusula tercera, recuerda que daban un recibo común de que se hacía ese pago, pero él nunca hizo un pago, solo le daban ese recibo, pero nunca hizo un pago de su bolsillo de ese valor por ningún alquiler ni tampoco lo descontaban de la caja... que no recuerda que Liotti y Ramírez le hayan dado una explicación de por qué tuvo que firmar ese contrato, solo tiene el recuerdo de que lo llamaron y le dijeron que tenía que firmar ese contrato, pero no sabe qué función tenía...”* En sentido similar, una vez que le fue exhibido el otro contrato (en el que se consignaba que estaba firmado por Jonatan Cardozo -como locatario- y la imputada Ramírez, por el alquiler del local de Santa Fe 1544), dijo que “... no lo recuerda ni tampoco está su firma, que normalmente todos los locales tenían eso mismo, pero no recuerda ese contrato en concreto; por ese local nunca pagó tampoco un alquiler. Además, al serle exhibido el contrato en el que se consignaba su nombre -en calidad de locatario- y Darío Meinet –como locador- por un local de la Av. Santa Fe 3507, dijo que “... no recuerda haber firmado ningún contrato con Meinet”.

Asimismo, exhibidos que le fueron distintos “recibos” secuestrados en ocasión de producirse los allanamientos (como el identificado con el número 6588, foliado con el número 82), dijo que “... reconoce esos recibos como los que dijo que él recibía, que esos recibos venían sobre la entrega de la mercadería en el horario nocturno, dentro de una bolsita, que quedaban todos guardados en un folio en el trabajo y se archivaban ahí”.

- **Diego Javier Orellano** figuró como locatario de los inmuebles de Lavalle 1502 y Santa Fe 1544 (conforme los documentos secuestrados en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en ocasión de declarar en el juicio, este testigo indicó “Que, sobre el contrato de alquiler, eso no entendió cómo fue, porque cuando hizo los papeles de monotributo se lo hizo con el dominio de su casa, y después ellos le cambiaron el domicilio, y le figuraba el de Santa Fe 1544. Había un recibo de todos los meses, entre todos los papeles del local, que figuraba como un alquiler, pero eso no sabría decirlo cómo. No recuerda si esos papeles llegaban a nombre de quién, era como un comprobante que les daban. Tampoco entiende lo del alquiler a su nombre, no recuerda bien







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*como era esa situación, era un comprobante que les daban. Él no firmó un contrato de locación que recuerde”.*

Asimismo, una vez que le fue exhibido el contrato de locación en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de Darío Meinet -como locador- (por el inmueble de la calle Lavalle 1502), dijo que *“... esa firma que está en azul no es su firma, la que está en el documento... Más allá de este contrato, no recuerda haber firmado otro contrato de alquiler”.*

En sentido similar, una vez que le fue exhibido el contrato de alquiler en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y la imputada Ramírez -como locadora- por el local de Santa Fe 1544 (foliado con el número 57 de AFIP), dijo que *“... la firma que está ahí no es suya... Que él no pagaba un alquiler por un local comercial, como consta en esos recibos que le exhibieron, que nunca pagó nada”.*

- **Jorge Emanuel Herrera** figuró como locatario del inmueble de Corrientes 1702 (conforme los documentos secuestrados en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en ocasión de declarar en el juicio, este testigo indicó *“Que él nunca alquiló el local de la calle Corrientes. En ningún momento alquiló”.* Asimismo, una vez que le fue exhibido el contrato de locación en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de la imputada Ramírez -como locadora- por el inmueble de Corrientes 1702, dijo que *“... no recuerda haber firmado un contrato de alquiler, no sabe a quién pertenece la firma que está allí impresa. Que mientras estuvo trabajando tal vez recibió algún recibo de alquiler, no recuerda con precisión... que nunca pagó por el alquiler de ese local”.* En ese sentido, aclaró que *“... Había carpetas en el local, y cada tanto llegaban esos recibos, esos papeles, cuando llegaban los zapatos. Esos papeles solo debían guardarlos”.*

- **Diego Sebastián Córdoba Reggi**, figuró como locatario de los locales de la Av. Córdoba 4498 y Av. La Plata 37 (conforme los documentos secuestrados en oportunidad de realizarse los allanamientos). Pese a ello, en ocasión de declarar como testigo, refirió que el alquiler del local lo pagaban Marcelo LIOTTI y Liliana RAMÍREZ y que *“... había contratos de locación de locales, pero eso lo manejaban ellos”.* En otro tramo de su declaración, preguntado para que diga si alguna vez



había pagado el alquiler de alguno de los locales, fue claro al responder que no.

Asimismo, exhibidos que le fueron esos contratos de locación (en los que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de la imputada Ramírez -como locadora-), sostuvo que “... *no los reconoce, que no obra su firma en ningún contrato. Que había un papelito que decía que él le alquilaba una parcela, como el espacio del local. Que esos recibos me los daba Liliana Ramírez*”. En sentido similar, exhibidos que le fueron los recibos del supuesto pago de esos alquileres, dijo que “*esos eran los recibos que les daban a los que hizo referencia*”.

- **Agustín Maszong** figuró como locatario del inmueble de Av. Rivadavia 3982 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Pese a ello, en ocasión de declarar como testigo, y una vez que le fue exhibido ese contrato, dijo que “... *nunca vio ese documento. Que esa firma no es suya, que no sabe de quién es, pero no le pertenece. Que no recuerda si le entregaron recibos de alquileres por parcelas*”. Asimismo, preguntado para que diga si alguna vez pagó por el alquiler de algún local, sostuvo que “... *nunca pagó alquiler*”.

- **Gonzalo Barila** figuró como locatario del local de Olazábal 5113 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, exhibido que le fue ese contrato de locación (en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de la imputada Ramírez -como locadora-), dijo que “... *no recuerda el mismo, que las firmas no le pertenecen, y que no reconoce de quien son*”.

- **Pablo Sebastián Barrios** figuró como locatario del inmueble de Corrientes 565 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). En ese sentido, si bien el testigo refirió que trabajó en ese local de Corrientes 565, indicó que “... *se lo pusieron a su nombre, en donde tenía pegado en la puerta el cartel de la clave fiscal, ahí sí ya le ingresaron papeles que decían como que él alquilaba el local, como que él pagaba la marquesina, como que era socio de la empresa...*”; pero refirió que “*No recuerda haber firmado contratos de alquiler, solo le llevaban el comprobante de pago del alquiler, un*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*comprobante de pago era nada más, para que queden con todos los papeles que tenía en el local”.*

En ese sentido, habiéndosele exhibido el recibo N° 6227 de fecha 05/10/2014 (foliado con el número 14 de AFIP) referido al alquiler del inmueble de Corrientes 565 (en el que figura el testigo), dijo “... *que lo recuerda, que ese es el recibo que le daba Jérica Ramírez; él solo tenía que guardarlos por las dudas, los tenía en un sobre con papeles*”.

- **Jonathan Adrián Nicola** figuró como locatario del inmueble de Corrientes 805 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en su declaración testimonial prestada en el juicio, Nicola refirió que “*El local de Corrientes 805 era de Liotti. Es más, muchas veces llegó correspondencia a su nombre ahí. Era un local matriz, uno de los locales importantes que tenía él*”. Asimismo, el testigo aseveró que “*Él no firmó ningún contrato de alquiler*”. En consecuencia, una vez que le fue exhibido el contrato de locación del inmueble de Av. Corrientes 805 en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el del imputado Liotti -como locador- (foliado con el número “1” de AFIP), manifestó que “... *no lo reconoce y no es su firma la que está ahí impuesta. Nunca vio este tipo de contrato*”.

- **Cristian Gabriel Rocdan** también figuró como locatario del inmueble de Corrientes 805 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Consultado al respecto, el testigo refirió que “... *recuerda que le hacían firmar (a él y a sus compañeros) contratos de alquiler, que algo había de eso. Recuerda algo de un contrato de alquiler...*”. Asimismo, una vez que le fue exhibido el contrato de locación, en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el del imputado Liotti -como locador- (por el local de Corrientes 805), dijo que “... *ninguna de las dos firmas que están ahí impuestas (sobre el margen superior derecho) es su firma. Recuerda que le hicieron firmar una hoja, pero no recuerda de qué era. Esto fue al principio, cuando empezó a trabajar... que esa hoja que le exhibieron a él se la dieron, pero no recuerda haber firmado nada de eso*”. Además, en esa oportunidad se le exhibió el recibo N° 6438 del 3/2/2015, ante lo que el testigo manifestó “... *que recuerda eso, eran talonarios de recibos, pero él no firmó nunca eso. Después de leerlo, dice que nunca pagó, nunca le*



*pidieron 1000 pesos. Eso lo tenían en el local. Manifiesta que nunca pagó por eso, esto nunca lo vio, nunca firmó ni tenía conciencia de eso”.*

- **Santiago Ojoli** figuró como locatario del inmueble de Callao 61 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en su declaración mencionó que “... *Él nunca vio ni firmó ningún contrato de alquiler*”. En consecuencia, una vez que le fue exhibido ese contrato de locación (en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de la imputada Ramírez -como locadora-) dijo que “... *el DNI suyo es correcto, su nombre también, pero no recuerda haber visto esto*”. En tal sentido, de su declaración surge que “... *Lo leyó detenidamente y dice que no entiende, que las firmas que están ahí impuestas no son suyas*”.

- Además, se encontraron recibos que daban cuenta de que **Gabriela Isabel Caldentey** era locataria del inmueble de Av. La Plata 37. Sin embargo, consultada al respecto en su declaración testimonial, refirió que “*No recuerda haber recibido recibos por el alquiler de un local, cree que algo de eso había, pero no era a nombre suyo, no recuerda eso*”. En consecuencia, se le exhibió un recibo que daba cuenta del supuesto pago del alquiler del local de Av. La Plata (número 7002 del 1/10/2013), y dijo que “... *eso lo hacían ellos y se lo enviarían, pero la verdad que no recuerda sobre eso, que puede ser que lo haya visto, pero de los papeles no se acuerda mucho*”. En sentido similar, se pronunció el testigo **Daniel Leandro Rodríguez**, respecto de ese mismo local.

- **Jonatan Alanis** figuró como locatario del inmueble de Callao 785 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en su declaración le fue exhibido ese “contrato de locación” (en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de la imputada Ramírez -como locadora-), y dijo que “... *no lo reconoce, y que allí no está su firma impuesta*”.

- **Gustavo José Galparoli** también figuró como locatario del inmueble de Callao 785 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en su declaración testimonial refirió que “*no recuerda haber firmado un contrato de locación por el local, sí recuerda pagarle el alquiler al señor que iba. ‘Ellos’<sup>34</sup> le enviaban la plata para pagarle al dueño del local donde*

<sup>34</sup> En alusión a Marcelo Liotti y Liliana Ramírez.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*alquilaban ‘ellos’. Seguramente por esto le daban algún recibo, o sea era el dueño del local que alquilaban. Cree que ese recibo se lo enviaba a ‘ellos’, con la recaudación del día”.*

En ese sentido, exhibido que le fue el contrato de locación (en el que aparece consignado su nombre -como locatario- y el de la imputada Ramírez -como locadora-, por local de Callao 785), dijo que “... *no vio a ese documento, que parece como una imitación de su firma, que aparte lo ponen a él como que alquilaba el local y nada que ver, él le pagaba el alquiler al dueño del local pero nunca con plata propia, lo pagaba con plata de Liliana o Marcelo (se la mandaban en un sobre, que podía ir con Jéssica o Darío, o con los chicos de reparto cuando llevaban la mercadería)*”.

- **Guido Laurelli** figuró como locatario del inmueble sito en Santa Fe 1544 (conforme al documento secuestrado en oportunidad de realizarse los allanamientos). Sin embargo, en su declaración testimonial refirió que “*No recuerda haber firmado un contrato de alquiler por los locales en los que trabajó*” y, exhibido que le fue el contrato de locación (en el que figura Ramírez como locadora y el testigo como inquilino, por el local de Santa Fe 1544), dijo que “... *no recuerda eso y que no reconoce como propia ninguna de las firmas allí impuestas*”.

- Por su parte, también cabe recordar que, en ocasión de declarar, **Venancio González Cardozo** refirió que “... *le hicieron firmar un contrato de alquiler por la calle Portela. Marcelo le dijo que, para seguir trabajando, le pidió que ponga el alquiler a su nombre, y él accedió porque quería conservar su trabajo*”.

En suma, todas las declaraciones testimoniales fueron contundentes para demostrar la falsedad de los contratos de locación (en los que se hacía figurar a los trabajadores como arrendatarios de los locales comerciales en los que se vendían los productos “ASH”, o de “parcelas” de esos sitios); como así también resultaban mendaces los “recibos” en los que falsamente se consignaba que los referidos empleados -cada mes- entregaban plata en concepto de alquiler de esos locales o parcelas.

i) Que, por otra parte, también se comprobó que Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ, en su carácter de responsables de la cadena de producción y venta de calzados marca “ASH”, impartían



#32859976#347198392#20221027213627864

indicaciones concretas a los trabajadores de la marca para impedir, obstaculizar o entorpecer las inspecciones de organismos oficiales que pudiesen tener lugar en los talleres fabriles de la empresa (en los que se confeccionaban los productos) o en los locales (en los que se comercializaba).

Lo expuesto se corrobora, en primer lugar, a partir de diversos documentos secuestrados en ocasión de realizarse los allanamientos en los locales comerciales de la marca, entre los cuales se incautaron distintos elementos que dan cuenta de instrucciones impartidas a los distintos vendedores, tales como: *“Nunca firmar nada”*; *“No recibir correspondencia que no sea para sí mismo, de ningún tipo (telegramas, cartas documentos, etc)”*; *“No responder por otros asociados responder sólo por sí mismos”*; *“no mostrar facturas de otros socios al AFIP, Ministerio de Trabajo, Municipalidad. Sólo mostrar facturas propias”*; *“En caso de no tener facturas, están en la imprenta”*; *“POR NINGÚN CONCEPTO FIRMAR ABSOLUTAMENTE NADA. EN CASO DE FIRMAR CUALQUIER PAPEL PUEDEN QUEDAR FUERA DE LA SOCIEDAD”*.


Para ilustrar lo referido, se adjunta imagen de dicho documento:





## Poder Judicial de la Nación

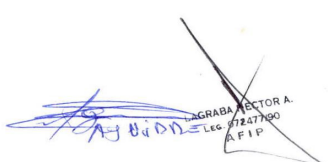
TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2



- \* NUNCA FIRMAR NADA
- \* NO RECIBIR CORRESPONDENCIA QUE NO SEA PARA SÍ MISMO, DE NINGÚN TIPO (TELEGRAMAS, CARTAS, DOCUMENTOS, ETC)
- \* NO RESPONDER POR OTROS ASOCIADOS (RESPONDER SOLO POR SÍ MISMO)
- \* NO MOSTRAR FACTURAS DE OTROS SOCIOS AL AFIP, MINISTERIO DE TRABAJO, MUNICIPALIDAD. SOLO MOSTRAR FACTURAS PROPIAS  
EN CASO DE NO TENER FACTURAS, ESTAN EN LA IMPRENTA.
- \* NO PAGAR NADA, QUE NO SEA AVISADO CON ANTICIPACION

ANTE CUALQUIER DUDA O INCONVENIENTE A?

DARIO: ~~1540572188~~ 1540572188  
FARCE: 1562578034  
LILIA: 1562578043  
JESÚS: 1561152264

  
AGRAVADO A. L. 1540572188  
AFIP

**IMPORTANTES**

POR NINGÚN CONCEPTO FIRMAR ABSOLUTAMENTE NADA. EN CASO DE FIRMAR CUALQUIER PAPER PUEDEN QUEDAR FUERA DE LA SOCIEDAD.

Ello, a su vez, fue convalidado por los múltiples testimonios recibidos en el juicio a las personas que trabajaban para la cadena de zapaterías. Entre ellos, pueden citarse los siguientes:

- **Jorge Jonatan Cardozo** expresó: “Que tenían una orden respecto de cómo actuar para recibir documentación, les decían que cuando llegue una inspección no tenían que firmar nada, que digamos que no había nadie para responder a los requerimientos, que incluso le ha pasado de tener inspecciones con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y les decían que digamos eso. Que quienes le decían que digan eso era Liliana Ramírez, al menos en su caso su relación era más fluida con Liliana Ramírez”.



- **Andrés Javier Pérez** expresó: “... que no recuerda que le hayan dicho si tenía que decir algo en concreto si había una inspección, pero que no los dejaban dar información directamente. Que recuerda un allanamiento en el local de Villa del Parque... en el que ‘los mataron a preguntas, pero como nosotros no podíamos dar ningún tipo de información no dijeron absolutamente nada’”.

- **Diego Javier Orellano** indicó “Respecto de posibles inspecciones que tuvieran en el local, la instrucción era que debían entregar todos los papeles que les pidieran, pero les decían que nunca debían firmar nada. Esa era la instrucción”.

- **Esteban Javier Marrero** expresó que “Recuerda que en el año 2015 se produjo un allanamiento en el local en el que él cumplía funciones. El personal actuante preguntó varias cosas, no recuerda puntualmente qué. Él no firmó documentación o planillas, porque la orden que les bajaban era que si alguien iba no había que firmar nada. Esta orden se la daban los encargados, la hermana y el hermano de Liliana. Eran ordenes verbales”.

- **Diego Sebastián Córdoba Reggi** indicó “... Que cuando venía AFIP o supervisión, sacaba su talonario propio y usaba ese y no mostraba el de Marcelo Liotti. Que todos los talonarios de Liotti los teníamos que esconder si venia AFIP. Que tenía instrucciones verbales para proceder de ese modo, que por ahí venía Liliana y decía que si viene AFIP el talonario se guarda. Asimismo, indicó que Preguntado si el día del allanamiento recibió instrucciones expresas sobre cómo debía actuar, sostuvo que no recuerda, que vinieron con un papel de allanamiento y le explicaron que iban a revisar, que le hicieron preguntas sobre el local, que si era el dicente responsable, entre otras. Que en el grupo de WhatsApp no recibió indicaciones de cómo debía proceder. Que al principio no contestaban, que luego le dijeron que no firme nada, preguntado sobre quién lo decía, sostuvo que Liliana Ramírez”.

- **Gonzalo Barila** indicó “... que si venía la AFIP había que mostrar papeles como si estuviera todo en regla”. Asimismo, exhibida el acta de allanamiento de fs. 603 y preguntado sobre lo que se consigna que dice “se niega a firmar por consejo de su abogado”, mencionó que “... no llamó a ningún abogado, que no firmó porque no firmaban nada por indicación de Liliana”.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

- **Marcos Javier Peralta**, preguntado si le dijeron cómo debía actuar si algún organismo concurría al local, expresó que “... *les decían que no firmaran nada y que se nieguen a quienes venían a preguntar cosas, por indicación de la jefa Liliana Ramírez*”. Asimismo, exhibido de la carpeta de documentación del local Las Heras el documento manuscrito que dice: “nunca firmar nada” dijo que “... *esa hoja estaba pegada en una pared del local apenas entró*”.

- **Maximiliano Eduardo Torres** consultado sobre si tenía indicaciones de cómo proceder si tenía inspecciones de organismos estatales, refirió que “... *cuando todavía no era monotributista... le habían dicho que si iba alguien de la AFIP se tenía que esconder en el depósito, esa orden venía de arriba, de los encargados, a ellos no sabe quién se lo decía*”.

- **Pablo Sebastián Barrios** expresó que “... *Si algún organismo público iba a controlar, le habían dicho (refiere ‘una locura’) que si iba una señora que la conocían de AFIP, le dijeron que a esa persona sólo le tenía que dar facturas suyas (solo las propias), para no tener problemas le decían que tenía que hacer eso*”.

- **Jonathan Adrián Nicola** indicó que “*El local de Corrientes 805 fue allanado, él estaba en el local en ese momento... recuerda que les decían -porque ellos tenían un grupo de WhatsApp de los locales de ASH- que no firmen nada, eso es lo que les decían a ellos. Liliana Ramírez estaba en ese grupo y les dijo eso... Él no firmó el acta de allanamiento*”.

- **Cristian Gabriel Rocdan** expresó “... *Que ese local de Corrientes 805 fue allanado, fue un momento muy feo, él estaba presente. Hicieron un acta, estaba AFIP y prefectura. A ellos les dijeron, Liliana y Marcelo, que vaya quien vaya no tenían que firmar, siempre les decían eso, y ahí los pusieron en aprietos las personas de AFIP y prefectura, le explicaron qué era, pero en definitiva él firmó. En ese momento él se quiso comunicar con Marcelo y Liliana, pero ninguno le dio una respuesta*”.

- **Santiago Ojoli** indicó que “... *No recuerda si el día del allanamiento hicieron un acta. Siempre les decían “nunca firmar nada”, esa instrucción tenían, de parte de Liliana Delfina (se lo decía por teléfono, todo por teléfono)*”.



#32859976#347198392#20221027213627864

- **Mauro Damián Salcedo** indicó: *“Respecto de si tenían alguna orden o instrucción si iban de algún organismo (como la AFIP), dijo que sí, que les decían no firmar ningún papel, era una instrucción verbal, de parte de Liliana Liotti. No preguntó por qué era eso, les decían que les podía traer problemas el día de mañana. No le decían qué clase de problemas les podía traer”.*

- **Daniel Leandro Rodríguez** sostuvo que *“Si recibían inspecciones de un organismo público, no recuerda si tenía instrucciones, les decían que tengan cuidado y que hablen con ellos”.*

- **Jonatan Alanis** indicó que *“Había carteles en el local donde él estaba, con indicaciones, se les decía que no debían dar información si iban de algún organismo público”.*

- **Lucas Emanuel Barbieri** explicó que *“Si recibían un allanamiento tenían una orden de ‘no firmar’, esa indicación la recibían de Marcelo Liotti, desconoce el motivo de eso”.*

- **Matías Daniel Aguirre** indicó *“Que nunca les dieron alguna orden en caso de tener inspecciones de organismos oficiales, nunca le pasó. Solo que, si algún cliente le decía algo, tenían que decirle que ellos eran los dueños, porque eran monotributistas y tenían su data fiscal pegada en la puerta, por eso tenían que decir que eran los dueños. Esto se lo decía Liliana Ramírez”.*

Asimismo, no puede pasar desapercibido que dichas instrucciones (tendientes a obstaculizar el control de organismos estatales, o confundir al personal interviniente), fueron efectivamente acatadas por muchos de los trabajadores de ASH.

En efecto, en muchos de los locales fiscalizados se observó el mismo patrón de comportamiento frente a la inspección: por ejemplo, Esteban Javier Marrero, Cristian Gabriel Rocdan y Fernando Ramón Ramírez se negaron a firmar el acta de inspección; Juan Manuel D’Amore efectuó una llamada por su teléfono celular y luego se negó a firmar las facturas aportadas a la fiscalización (fs. 136 del cuerpo de actuaciones correspondientes a Walter David Carrazana); Gonzalo Badino recibió un llamado telefónico de una persona de nombre Marcelo *“... quien le ordenó diera los datos solicitados pero que no firmara el acta ni ningún otro formulario...”* (ver cuerpo de actuaciones correspondientes a Gonzalo







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Barila). Lo mismo ocurrió durante los allanamientos realizados a los locales comerciales (por ejemplo, en el allanamiento del local de la calle Cuenca 2921, los trabajadores Oscar Omar Almada y Andrés Javier Pérez se negaron a firmar las planillas de relevamiento -cfr. fs. 507/532-; en el allanamiento del local de la calle Malabia 1667, Cristian Ariel Corvalan se negó a firmar la planilla -cfr. fs. 524/537-; en el allanamiento del local de la calle Florida 702, Marcelo Alejandro Kloster y Maximiliano Nahuel Flores también se negaron a firmar las planillas -fs. 549/560-; entre muchas otras).

j) Que, finalmente, se pudo comprobar durante el juicio que la recaudación de las ventas de zapatos producidas en los locales se le hacía llegar a los imputados LIOTTI y RAMÍREZ, quienes iban a buscarla a los locales -por sí o a través de sus colaboradores- o les era enviada a su domicilio a través de los fletes que transportaban la mercadería desde los talleres a los locales (que en ocasión de transportar las mercaderías desde los talleres -con talonarios de facturas y demás documentación- a los locales, procedían a retirar la recaudación diaria de los locales y llevársela a Marcelo LIOTTI). Ello, fundamentalmente surgió de las declaraciones testimoniales de Leonardo Damián Falconier, Lucas Emanuel Barbieri, Cristian Gabriel Rocdan, Daniel Leandro Rodríguez, Raúl Horacio Aranega y Matías Daniel Aguirre.

La recepción del dinero de las ventas, resulta conteste con las demás circunstancias comprobadas, las cuales -como se dijo- permiten demostrar que los nombrados eran los verdaderos dueños de la cadena de zapaterías (y que no compartían esa ganancia con socio alguno).

**B)** En suma, las circunstancias enunciadas, valoradas en forma conjunta e integrada, dan cuenta de la existencia de una única explotación comercial, dedicada a la fabricación y comercialización de calzado bajo el nombre de fantasía “ASH”, cuyos responsables resultaron ser Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ, que contaba con distintos empleados en relación de dependencia que cumplían funciones en distintos tramos del proceso de fabricación y comercialización del calzado, cuya relación de dependencia se ocultó al fisco mediante la utilización del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, a fin de evadir el pago de los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de la Seguridad Social.



#32859976#347198392#20221027213627864

En efecto, a entender del suscripto y de conformidad con lo entendido por los acusadores, se pudo comprobar -sin lugar a dudas- que la relación existente entre los monotributistas y los imputados LIOTTI y RAMÍREZ, era la de una verdadera relación de dependencia laboral; y que la utilización del régimen de monotributo (que, como se vio, le era exigido a los trabajadores como condición para acceder o mantener el empleo) fue diagramada por los imputados para ocultar esa relación de dependencia que los unía con los trabajadores, en procura de evadir el pago de los aportes y contribuciones que les correspondía afrontar en su condición de empleadores<sup>35</sup>.

Al respecto, debe destacarse que la relación de dependencia laboral, fundamentalmente, se encuentra dada a partir de la corroboración de los extremos requeridos para su existencia; esto es, subordinación técnica, jurídica y económica.

Ello, se deriva de lo establecido en el régimen de contrato de trabajo (ley 20.744). En concreto, por el art. 21 de dicha ley (contrato de trabajo) se establece que: *“Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado de tiempo, mediante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales y los usos y costumbres”*; por el art. 22 (relación de trabajo), se establece que *“Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste servicio en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen”*; por el art. 25

---

<sup>35</sup> Sobre ello, cabe remarcar que existe relación laboral cuando un servicio es prestado bajo un vínculo de dependencia, más allá del rótulo formal que las partes hubieran dado a esa prestación. En tal sentido, tiene dicho la Cámara Federal de la Seguridad Social que: *"La naturaleza de la relación entre las partes debe determinarse por el examen de las características que las conforman y definen en la realidad de los hechos -principio de primacía de la realidad- y no por cuestiones que bien pueden constituir imposición más del dador de trabajo (en el caso, las inscripciones como autónomos de los trabajadores) (v. criterio CNAT, Vattentini Nicolás Pascual c/Unilever de Argentina S.A. S/despido, 3/05/00)"* (conf. autos: CUCUKMIRTHA y Otro c/AFIP-DGI s/impugnación de deuda". Sala II. sentencia del 29/04/2005).





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

(trabajador) se prescribe que *“Se considera "trabajador", a los fines de esta ley, a la persona física que se obligue o preste servicios en las condiciones previstas en los artículos 21 y 22 de esta ley, cualesquiera que sean las modalidades de la prestación”* y por el art. 26 (empleador) se establece que *“Se considera "empleador" a la persona física o conjunto de ellas, o jurídica, tenga o no personalidad jurídica propia, que requiera los servicios de un trabajador”*.

Al respecto, se encuentra claro que -en caso de existir relación laboral- es el empleador quien se encuentra obligado a pagar los aportes y contribuciones destinadas al sistema de seguridad social. Dicho deber surge de las previsiones de la ley 24.241 (arts. 2, 10, 11 y 12), por las que se establece que el empleador debe descontar de las remuneraciones que paguen a sus trabajadores en relación de dependencia los aportes a la seguridad social, y depositar las contribuciones a su cargo en el SUSS.

Por el contrario, el régimen del monotributo se trata de un mecanismo legal previsto para que los trabajadores autónomos -de capacidad contributiva menor- puedan mantener regularizada su situación ante la AFIP de una manera simplificada (por ejemplo, para facturar sus ventas, ingresar al fisco sus tributos -como IVA o ganancias-, sus aportes jubilatorios y obra social, etc.)<sup>36</sup>.

Sobre ello, resulta claro lo expuesto por la doctrina en cuanto a que: *“...En nuestro ordenamiento laboral encontramos dos conceptos bien diferenciados: ‘trabajador dependiente’ y ‘trabajador autónomo’. La interpretación armónica de las leyes laborales y de previsión social, así como de los reglamentos y disposiciones dictados en su consecuencia, nos revelan conceptualmente los elementos que califican como dependiente a un trabajador. Ellos son, en líneas generales, la subordinación respecto del dador de trabajo -que se observa en cuestiones jurídicas, técnicas y económicas-, además de la inserción del trabajador en una estructura organizativa que le es ajena. Esto significa que el trabajador dependiente desarrolla su actividad en la empresa de un tercero y, en tal contexto, está sometido a directivas del empleador (subordinación jurídica); a normas, modos y métodos de trabajo (subordinación técnica), y percibe una remuneración a cambio de su trabajo personal (subordinación*

<sup>36</sup> En sentido similar, Héctor Belisario Villegas en “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, 9º edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, págs. 813/816.



económica). Por ello, el trabajador no determina objetivos organizacionales ni medios para su logro, y no se encuentra alcanzado por los resultados de la empresa, sino que pone su ‘fuerza laboral’ a disposición del empleador. En cambio, el trabajador autónomo se caracteriza por la asunción de riesgos en la relación ganancias-pérdidas, y por la organización por cuenta propia de su trabajo. Así, el trabajador independiente asume los riesgos económicos propios del ejercicio de su actividad, beneficiándose de las ganancias de su trabajo, pero soportando las pérdidas; organizando él mismo la actividad, al definir los objetivos de su trabajo y los medios para su logro. Con estos conceptos, es claro que -por ejemplo- el trabajador a cargo de la ‘atención al público’ en el comercio de un tercero es ‘dependiente’ y que ese tercero dador de trabajo es ‘autónomo’” (Emlek, Pablo L., “La autonomía dependiente en los recursos de la seguridad social”, Publicado en: IMP - Práctica Profesional2022-CXXXIV, 109, Cita: TR LALEY AR/DOC/3065/2022).

En el presente caso, las circunstancias que fueron debidamente comprobadas en el juicio, dan cuenta de que las personas que cumplían funciones en el proceso productivo y de comercialización del calzado de la marca “ASH” se encontraban sin lugar a dudas “subordinadas” -técnica, jurídica y económicamente- a los imputados LIOTTI y RAMÍREZ. Ello así, en la medida que, como se vio, los trabajadores no solo recibían una remuneración diaria -y fija- a cambio de sus tareas<sup>37</sup>; sino que también, en el desempeño de sus respectivos trabajos, se encontraban sometidos a las órdenes y directivas que, tanto Marcelo LIOTTI como Liliana RAMÍREZ, les impartían respecto de las cuestiones esenciales del desarrollo de la actividad laboral<sup>38</sup>. Es decir, de las circunstancias constatadas surge claramente que los trabajadores de las fábricas y locales comerciales se hallaban sometidos a un régimen laboral estrictamente pautado y organizado por Marcelo LIOTTI y Liliana

<sup>37</sup> Sin lugar a dudas, y como sostuvo la querella en ocasión de formular su alegato, el hecho de percibir una remuneración fija a cambio de poner a disposición de otra persona el tiempo y servicio resulta ser una prueba irrefutable de que se trataba de empleados en relación de dependencia; conforme ya se ha mencionado, esto resulta ser una de las características típicas de la relación de dependencia (subordinación económica).

<sup>38</sup> Como pudo comprobarse, tanto LIOTTI como RAMÍREZ les indicaba cómo realizar las tareas; cómo facturar las ventas; se les informaba sobre cuestiones atinentes a su asistencia, vacaciones, horarios, reemplazos y eventuales sanciones que podían padecer; la estética de las vidrieras de los distintos locales comerciales también obedecía a un patrón común determinado por los imputados; el diseño y cantidad de los zapatos también les era ordenado; el precio de los zapatos era fijado por las autoridades de la empresa, entre muchas otras circunstancias en igual sentido.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

RAMÍREZ, que incluía un régimen horario y penalidades para el caso de incumplimiento.

En definitiva, mediante las constancias de la causa se acredita que las tareas de confección y venta de calzado realizadas por los trabajadores de “ASH” fueron desarrolladas en el marco de una estructura industrial y comercial ajena, dirigida técnicamente por los imputados (que ocupaban y desarrollaban la función organizadora y la disciplinaria), recibiendo a cambio una remuneración monetaria fija (independiente de los beneficios o pérdidas del negocio); circunstancias que acreditan la subordinación jurídica propia de las relaciones laborales bajo dependencia (confr. arts. 21, 22, 25, 26 y 37 de la L.C.T.).

Así las cosas, lo hasta aquí expuesto resulta suficiente para descartar –por carecer de todo sustento- la versión planteada por LIOTTI en su descargo prestado en la etapa de instrucción (que fue incorporado por lectura al debate)<sup>39</sup>, mediante el cual pretendió desconocer la relación laboral existente y afirmó que el vínculo con los trabajadores estaba dado por un sistema de “asociados”, mediante el cual cada “socio” de ASH asumía los riesgos de participar en el negocio (es decir, intentó aducir que eran trabajadores autónomos). En efecto, y como se dijo, todos los empleados manifestaron trabajar a cambio de una remuneración (lo que descarta la participación en el riesgo de la empresa), e indicaron que la inscripción en el monotributo fue impuesta como requisito para obtener -o mantener- el empleo (lo que descarta que se haya tratado de una decisión individual de cada empleado sobre su condición tributaria).

Lo expuesto, además, se encuentra corroborado por la circunstancia de que -tal como constató oportunamente la AFIP- hasta el mes de febrero de 2010, el imputado LIOTTI se encontraba inscripto como empleador ante la AFIP, y parte de los trabajadores que -luego- se inscribieron como monotributistas, estaban declarados como empleados en relación de dependencia del imputado (o de las personas humanas y/o jurídicas vinculadas a él). Ello, incluso, se ratifica también por la circunstancia de que, luego de producidos los allanamientos realizados en

---

<sup>39</sup> Ello, sin perjuicio de que, en ocasión de ampliar su declaración en el debate, el nombrado -como refirió la querrela en ocasión de formular su alegato- reconoció, en forma tácita, la existencia de la relación de dependencia laboral entre él y los monotributistas, aunque adujo que utilizó ese sistema en el convencimiento de que lo que hacía era correcto (argumento que será tratado más adelante).



la presente causa, los imputados LIOTTI y RAMÍREZ constituyeron una sociedad comercial para continuar con la explotación comercial del negocio que venía operando bajo el nombre de fantasía “ASH” (que justamente se denominó “ASH CALZADOS S.A.”)<sup>40</sup>, y -sugestivamente- declararon como empleados en relación de dependencia de esta sociedad a muchas de las personas que antes trabajaban en las fábricas o locales en calidad de monotributistas. Ello, sin dudas resulta claro para demostrar que -en verdad- la relación de los imputados con las personas que estaban inscriptas como monotributistas siempre fue la misma: esas personas eran empleados de la empresa<sup>41</sup>.

En conclusión, una interpretación integrada de las pruebas recibidas durante el debate, efectuada de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional, permite sostener que los monotributistas -lejos de ser trabajadores autónomos e independientes- estaban unidos a la unidad de negocio que fabricaba y comercializaba productos marca “ASH” (de los imputados LIOTTI y RAMÍREZ) por una verdadera relación de dependencia laboral; y, de acuerdo a ello, se pudo comprobar que -al haber ocultado la relación de empleado/empleador que los unía a los trabajadores- los imputados evadieron el pago de los aportes y contribuciones destinadas al sistema único de la seguridad social de sus dependientes.

A fin de determinar el monto de las obligaciones previsionales evadidas, cabe recordar que del informe final de determinación de deuda (que se incorporó como prueba al debate), se

---

<sup>40</sup> Cuyo contrato social fue suscripto el día 30/04/2015, y fue inscripta en AFIP el 27/05/2015); y en la cual, como ya se dijera, LIOTTI fue designado como Director Titular (Presidente); y RAMÍREZ como Directora Suplente (cfr. fs. 1520/1539). Asimismo, surge de las constancias de la IGJ que los aportes de capital fueron por un total de 100.000 pesos, correspondiendo un 50% a cada uno de los imputados.

<sup>41</sup> Ello, guarda sintonía con lo dicho por los trabajadores en ocasión de declarar como testigos en el debate, en cuanto a que la inscripción en el monotributo era una cuestión formal, pero que sus tareas siempre eran las mismas (sean bajo relación de dependencia, como monotributistas, o bajo cualquier otra forma) A modo de ejemplo, el testigo Carlos Alberto Lara, empleado que se desempeñaba en la fábrica ubicada en la calle Lafuente 2786, indicó que comenzó a trabajar en la zapatería en la década del 90, que durante el comienzo de la relación laboral y por los trece años siguientes estuvo inscripto correctamente (bajo el régimen de relación de dependencia), que luego de ello tuvo un paso por uno de los locales comerciales (en donde se desempeñó como vendedor), en cuyo marco también estuvo debidamente registrado, pero que en el año 2012/2013 volvió a trabajar en la fábrica, aunque esta vez bajo el régimen de monotributo. Así, preguntado para que aclare al respecto, el testigo refirió que “... *su trabajo no varió cuando estuvo en relación de dependencia y cuando estuvo como monotributista. Era empleado, no tenía ningún cargo más*”. De ello, se advierte que el cambio de registración (de empleado en relación de dependencia a monotributista) no implicaba ningún cambio real en el desempeño de las tareas, sino simplemente en el encuadre que se le daba a esa relación de empleado/empleador.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

desprende que la determinación de deuda fue realizada a partir de las siguientes circunstancias: *“En primera instancia corresponde mencionar que los actuantes consideraron para la determinación de deuda de aportes y contribuciones al RNSS aquellos casos en que se verificaron las notas típicas de la relación de dependencia y se pudo acreditar en al menos algún momento, la efectiva prestación de servicios. Específicamente se tuvieron en cuenta aquellos que fueron relevados al momento de realizarse el allanamiento dispuesto por ese Juzgado, otros que fueron relevados por esta Administración en actuaciones anteriores (antecedentes administrativos), los que concurrieron a las testimoniales tomadas en sede administrativa, aquellos que mantuvieron relaciones de dependencia pasadas o posteriores con el Sr./a Marcelo Liotti y Liliana Ramírez y/o empresas por ellos constituidas, los que se pudieron identificar del registro de vacaciones mencionados y otros que formularon denuncias particulares en sede administrativa. Se adjunta papel de trabajo a fs. 18 a 102 con detalle de personas involucradas. Dado que quedó acreditado que la documentación comercial que vincula a los supuestos monotributistas con el Sr. Liotti forman parte de una maniobra que no refleja la realidad, y a efectos de determinar los aportes y contribuciones no ingresados, se computó como remuneración, las manifestaciones hechas ante esta administración por las personas involucradas. Se obtuvo una proporción en referencia a los salarios mínimos de convenios colectivos aplicables la que se utilizó para determinar la remuneración en periodos anteriores a los manifestados por las personas. Los convenios colectivos aplicables para aquellos prestadores que se desempeñaron en tareas fabriles es el de UTICRA-Trabajadores de la Industria del Calzado y el de Comercio para personas destinadas a la venta. A fs. 103 se agrega escalas salariales utilizadas. Para identificar los periodos en que se precede a determinar deuda por cada supuesto monotributista se consideró la fecha en que manifestaron iniciar su vínculo con el Sr Liotti. en los relevamientos/testimoniales realizados o a partir del momento en que se escribieron como monotributistas ante esta AFIP para desarrollar la actividad vinculada a la fabricación/venta de calzados y en los domicilios donde el Sr Liotti desarrollaba su actividad. Existe un universo de 72 casos que no integraron la determinación arriba mencionado dado que no se ha constatado prestación de servicios y sus talonarios de factura, podrían ser*



#32859976#347198392#20221027213627864

*parte de la maniobra articulada por el Sr Liotti para sustraerse de las obligaciones tributarias. A fs. 104 luce papel de trabajo con detalles de deuda de aportes y contribuciones pudiendo observar que en los periodos comprendidos entre 06/2012 a 11/2014 y 01/2015 a 03/2015 el total resultante es superior al límite establecido en el art. 7 de Ley 24769 (y sus mod) mientras que en el periodo 12/2014 el importe es superior al establecido en el art. 8 del mismo cuerpo legal”.*

En definitiva, de la determinación de deuda se estableció que -en los períodos que conforman el objeto procesal de las actuaciones- se habrían evadido los aportes y contribuciones de los trabajadores de ASH, por montos que superaban la condición objetiva de punibilidad establecida en el Régimen Penal Tributario.

Asimismo, cabe recordar que -en el debate- prestaron declaración testimonial el inspector Diego Prando y el supervisor Leonardo Onetto (funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos que realizaron la determinación de la deuda mencionada), en cuyo marco explicaron aquellos aspectos importantes vinculados a esa tarea, que vale recordar a continuación:

En primer lugar, Diego Prando indicó que “... *él hizo la determinación de deuda. Que para ello (que se hizo para los períodos enero de 2010 a marzo de 2015), se analizaron los relevamientos de personal realizados, se citó a muchos de estos monotributistas a testimonial (aunque no todos concurrieron), también se analizaron los distintos sistemas del organismo, para chequear la relación anterior de estas personas con Liotti. También se valoró que después de 2015 Liotti constituyó la sociedad ASH CALZADOS (luego de los allanamientos), en la que se incorpora a muchas de estas personas como empleados. Que para determinar la deuda se trató de constatar lo que se había denunciado y que se den las condiciones típicas de una relación de dependencia (subordinación económica, técnica y jurídica), con un montón de otros elementos que fueron encontrados en los allanamientos. Que los períodos de deuda se determinados en función de la fecha de ingreso que manifestaron los empleados, ya sea en la testimonial o en los relevamientos. Que los casos que no tenían relevados o declarados en testimonial, consideraron la fecha de alta en el monotributo (muchos*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*tenían fecha de inicio en el monotributo en febrero 2010, que es cuando Liotti se dio de baja como empleador)”.*

*Asimismo, Prando agregó “Que, respecto a esta causa, hubo casos que no fueron ajustados (cerca de 70 si mal no recuerda), porque no se pudo comprobar las notas típicas de una relación de dependencia, puntualmente la prestación de servicio. Que, en cuanto a los conceptos que se ajustaron, refirió que se ajustó desde enero 2010 a marzo 2015 aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Que, dentro del SUSS, existen otros conceptos (como puede ser obra social y ART), sobre el cual ellos no hicieron ningún ajuste, porque lo que es obra social está delegado a obra social, lo mismo que ART, la AFIP tiene la facultad de determinar lo que se hizo, aportes y contribuciones”.*

*Por su parte, Leonardo Maximiliano Oneto indicó que “... previo a su intervención, recibieron antecedentes que indicaban que ASH tenía algo así como ciento setenta y algo de presuntos empleados, esto en forma previa, no todos fueron ajustados”; así como también mencionó que “Sobre la determinación de deuda... hicieron un análisis respecto de cada persona. El primer presupuesto a corroborar fue si hubo una efectiva prestación de servicios, porque si no, no se podía afirmar que había una relación de dependencia. De los que no pudieron acreditarlo, quedaron fuera del ajuste, no integraron la determinación (no recuerda la cantidad de los que quedaron fuera del ajuste, pero está en el informe). No solo eso, sino que esa prestación de servicios tenía que ser en relación de dependencia. Eso también lo chequearon”.*

*A ese respecto, el supervisor expresó “... Que, sobre cómo se acredita la efectiva prestación de servicios que refirió anteriormente, dijo que hay varias formas. En primer lugar, los que fueron vistos trabajando en los allanamientos; esta es la primera forma. La segunda es que hubo listados de “asociados” en cabeza de “encargados”, o planillas donde se estipula en qué momento pueden tomar las vacaciones. Que adicionalmente a todo este análisis, también consideraron las personas que encontraron trabajando en distintos momentos (no solo en los allanamientos, sino en relevamientos previos, como los que hizo el área de monotributo). Que la actividad que exteriorizaban los monotributos siempre estaba vinculadas a la tarea que efectivamente desempeñadas (como ser “fabricación de calzado”). Que todo el cuadro de situación*



#32859976#347198392#20221027213627864

*permitió corroborar que había una efectiva prestación de servicios bajo relación de dependencia. Que, incluso, del relevamiento de documentación secuestrada surgió que se le imponían sanciones a los monotributistas, por ejemplo, si llegaban tarde se les descontaba dinero, se les imponían sanciones pecuniarias”.*

Además, Oneto destacó que “... en AFIP hicieron la determinación de ajuste en base a los aportes y contribuciones de la seguridad social, hay otro componente que es obra social que quedó fuera de la determinación (porque si bien la AFIP tiene potestad para chequearlo, esto fue delegado en las obras sociales). Que en AFIP solo ajustaron por seguridad social (aportes y contribuciones) y las obras sociales, a las que se les delegó esa tarea, tendrían que haberlo hecho por su cuenta”; como así también que “... respecto de sobre qué base efectuaron el ajuste, refirió que la base remuneratoria se hizo sobre lo que dijo la gente que citaron a las testimoniales y también de los convenios colectivos de trabajo”.

Por su parte, también se incorporó como prueba al debate el dictamen nro. 48/2017 de la Sección de Impugnaciones de Grandes Empleadores, por el que se validó la determinación de deuda realizada por los funcionarios Prando y Oneto, y no se hizo lugar a la impugnación efectuada por el contribuyente LIOTTI.

De allí, surgen las siguientes circunstancias de interés<sup>42</sup>:

- Se determinó que la empresa “ASH”, durante el período objeto de fiscalización (de 01/2010 a 03/2015, de acuerdo al lapso abarcado por la respectiva orden de intervención), tuvo 122 personas en relación de dependencia (para cada una de ellos, se indicaron los períodos mensuales en los que pudo determinarse la efectiva prestación de tareas laborales).
- Para determinar la “existencia, extensión y cuantía” de esas relaciones laborales, además de considerar todas las circunstancias que daban cuenta de la utilización indebida del régimen del monotributo por parte de los responsables de ASH (que, en lo sustancial, ya fueron explicadas en la presente), la AFIP efectuó el siguiente método:

---

<sup>42</sup> Sin perjuicio de remitirse a las demás explicaciones allí dadas.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

- Los ajustes fueron clasificados en dos grupos, según tuvieran o no relevamiento de personal realizado, computándose un total de 86 trabajadores relevados y un total de 36 no relevados (del total de 122 ajustados).

- Para la determinación de la fecha en que prestaron tareas laborales, se efectuó un análisis caso por caso. En lo sustancial, respecto del grupo de los 86 trabajadores relevados, fundamentalmente se consideraron como fecha de inicio de la prestación, las que fueron informadas por los propios trabajadores en el marco de los distintos relevamientos de personal efectuados y, como fecha de finalización de sus tareas, se consideró la fecha del segundo relevamiento efectuado al trabajador (para el caso de que hubiera sido objeto de dos relevamientos distintos) o hasta el último período fiscalizado (03/2015), cuando las circunstancias permitieran tener por corroborada la relación laboral hasta esa fecha. Asimismo, se indicó que en el caso de los trabajadores que fueron relevados, pero no informaron la fecha de inicio de la prestación de tareas, se tomó como fecha de inicio la de su inscripción en el régimen de monotributo, declarando como domicilio fiscal a un domicilio vinculado a la empresa ASH y como actividad la venta o producción de calzado (lo que demostraba la inserción del trabajador en la estructura comercial de ASH).

- Para el caso de los trabajadores que no fueron relevados (un total de 36), se consideraron otros elementos que daban cuenta de que esas personas efectivamente eran empleadas en relación de dependencia de ASH. En concreto, se valoró la documentación secuestrada en ocasión de producirse los allanamientos, los talonarios de facturación intervenidos, los listados de “asociados” de las fábricas y comercios, las órdenes de intervención previas efectuadas a otros contribuyentes (supuestos monotributistas que resultaron ser trabajadores), la información declarada por esas personas en oportunidad de adherirse al Régimen de monotributo, entre otras. En este sentido, se indicó que estos trabajadores ya habían sido individualizados en la etapa de investigación de la AFIP, y otros tras los allanamientos; motivo por el cual no era un impedimento el hecho de que no hayan sido relevados para tener por acreditada la relación laboral.



#32859976#347198392#20221027213627864

Así, se indicó que hubo 2 personas que motivaron ajuste con sustento en actas de constatación labradas en procedimientos de relevamiento de personal, en cuyo marco esas personas se negaron a ser relevadas (pero que pudieron ser identificadas y visualizadas trabajando).

Hubo otros 12 trabajadores que se ajustaron con motivo de haber declarado en “testimonial” ante la AFIP, en cuyo marco no solo informaron la fecha de ingreso y egreso a la empresa ASH (por lo que se tomó como fecha de ingreso la informada por los trabajadores, hasta la fecha de finalización de la relación, con tope en el último período fiscalizado -03/2015-), sino que describieron su modalidad de trabajo, que resultaba clara para demostrar la existencia de una relación laboral bajo dependencia (tales como cumplimiento de días y horarios, sometimiento a pautas y ordenes de trabajo, percepción de remuneración, etc.). Se destacó que dentro de esos 12 trabajadores, incluso 3 aportaron copia certificada de convenio en el SECCO realizada con Marcelo LIOTTI.

Otros 2 trabajadores fueron ajustados con “sustento en otras fiscalizaciones”. En concreto, estaban inscriptos en el régimen de monotributo -al igual que los demás trabajadores- en actividades relacionadas con la industria de calzado y declarando como domicilio fiscal a domicilios del contribuyente. En tales casos, también, se consideraron como fechas de la prestación laboral las fechas de alta y baja en el monotributo. Incluso, una de esas dos personas fue vista por el personal fiscalizador en ocasión de estar realizando un relevamiento, pero se retiró del lugar porque dijo que iba al médico (aunque pudo ser individualizada) y -además- respecto de esta persona se secuestró documentación “de carácter laboral” en el allanamiento de la calle Gual 2340.

Otras 16 personas fueron ajustadas en función de que -a pesar de no haber sido relevadas- sus prestaciones fueron constatadas a partir del análisis integral de la documentación secuestrada en los allanamientos (que van desde talonarios de facturación hasta inclusión en listados internos de la empresa, como también los comprobantes de pagos del monotributos -que se hacían en lote- ), los datos de su inscripción al régimen de monotributo (alta/baja, domicilio fiscal declarado en uno de los inmuebles de ASH y actividad declarada de producción o venta de calzado), y la inclusión -anterior o posterior- del trabajador en las nóminas laborales de





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

LIOTTI o de personas/empresas vinculadas a él. En estos casos, se tomó como fecha de inicio la de la inscripción en el monotributo (o primer período fiscalizado, cuando su inscripción fue anterior) hasta la baja (o último período fiscalizado). Dentro de este grupo de 16 personas, cabe remarcar, se encuentra -por ejemplo- Jérica Ramírez, que fue reiteradamente nombrada por los testigos que declararon en este juicio como trabajadora de ASH, dentro del período que constituye el objeto procesal de la causa, lo que demuestra que la determinación de deuda se ajusta a lo sucedido en la realidad.

Por último, las restantes 4 personas fueron incluidas en la nómina toda vez que, si bien no fueron relevadas, se hallaron otros elementos que permitían tener por acreditada su relación laboral bajo dependencia. Se indicó que se trataba de personas que habían sido declaradas por el propio LIOTTI como empleados en relación de dependencia, que luego dejaron de serlo al tiempo que se inscribieron como monotributistas -en el período inmediato posterior- con domicilio fiscal en domicilios vinculados a ASH, entre otros datos.

- Finalmente, para determinar los montos evadidos, se tuvo en consideración -en primer lugar- las remuneraciones que dijeron percibir los propios trabajadores (los que dieron tal información) y, además, se tomó como base el tipo de trabajo que desarrolló cada empleado y los convenios colectivos que -en ese entonces- regían cada actividad (conforme fue informado por el Sindicato de Empleados de Comercio -para los empleados de los locales comerciales- y por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina -para los trabajadores de los talleres fabriles-). Sobre la base de esos elementos se efectuó el cálculo del salario y, sobre ellos, los aportes y contribuciones correspondientes.

Por último, también resulta oportuno recordar que -como medida de instrucción suplementaria, y a pedido de la anterior defensa de los imputados LIOTTI y RAMÍREZ y de la Fiscalía- se ordenó la realización de un examen pericial contable<sup>43</sup>, en cuyo marco -y en lo que aquí interesa- los peritos intervinientes concluyeron que: “*Teniendo en*

---

<sup>43</sup> Que fue realizado por los licenciados Marcelo Eduardo Domínguez (perito contador oficial del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal) y Néstor Alejandro García, perito contador por la parte querellante (AFIP).



*cuenta las personas que prestan servicio en las condiciones detalladas por AFIP, así como los convenios colectivos que rigen cada actividad (Sindicato de Empleados de Comercio y Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina), los peritos actuantes no tenemos objeciones que formular al cálculo de los aportes y contribuciones de la AFIP por los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, los cuales ascienden a la suma total de \$ 4.700.253,83 por esos períodos”.*

Así las cosas, de conformidad con lo sostenido por los acusadores, el suscripto considera que la determinación de deuda realizada por los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (que resulta ser un medio de prueba específicamente admitido por el art. 18 de la ley 24.769 y 18 del Régimen Penal Tributario establecido por la ley 27.430)<sup>44</sup> -y que, incluso, fue avalada por los peritos contadores en el marco del estudio pericial contable ordenado en las actuaciones a la luz de las normas del ordenamiento procesal penal- efectivamente se corresponde con las circunstancias acreditadas en la presente causa.

En efecto, contrariamente a lo indicado por las defensas, de las constancias mencionadas anteriormente surge que los montos de aportes y contribuciones por los períodos fiscales mensuales que conforman el objeto procesal de esta causa, fueron calculados teniendo en consideración a aquellas personas que, a partir de las constancias incorporadas a la investigación, pudo determinarse que efectivamente habían realizado prestaciones laborales para los imputados en calidad de dependientes, computándose como remuneración los montos manifestados ante la AFIP por las propias personas involucradas, como así también los salarios mínimos de los convenios colectivos aplicables, según el tipo de actividad desarrollada por cada trabajador (Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, para aquellos trabajadores que se desempeñaron en los talleres fabriles, y Sindicato de Empleados de Comercio, para aquéllos que se desempeñaron en los locales de venta). Por ello, de acuerdo a lo que se explicará a continuación y tal como se ha venido sosteniendo en

---

<sup>44</sup> En ese sentido, CNAPE, Sala “B”, Reg. 407/05.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

estas actuaciones<sup>45</sup>, no puede considerarse que las obligaciones presuntamente evadidas hayan sido calculadas sobre base presunta.

En primer lugar, nótese que -al comienzo- se habían detectado cerca de 170 monotributistas que estaban vinculados a la cadena de zapaterías ASH (particularmente, sus domicilios fiscales denunciados coincidían con los domicilios de los locales comerciales o con los domicilios de las fábricas de ASH)<sup>46</sup>, pero que -finalmente- no todas ellas fueron contabilizadas para realizar un ajuste (sino que únicamente se contabilizaron 122). Ello obedeció a que, en algunos casos -y de acuerdo a las constancias con las que contaba la AFIP- no había podido determinarse la efectiva prestación de servicios de parte de esos monotributistas, bajo una relación de dependencia laboral. Dicha actuación, como sostuvo la querella en ocasión de realizar su alegato, demuestra la razonabilidad de la tarea efectuada por el organismo recaudador; y deja en evidencia que el análisis efectuado en sede administrativa no fue realizado con base a meras “presunciones”, sino que fue efectuado “caso por caso” respecto de cada uno de los trabajadores<sup>47</sup>.

Párrafo aparte, resulta menester destacar que el informe que elaboró la AFIP fue debidamente ratificado y explicado -en declaración testimonial, con el debido control de las partes- por los propios funcionarios que intervinieron en su confección, quienes explicaron los diferentes extremos considerados para determinar la deuda con total precisión y coherencia. Más aún si se considera que esos extremos -a su vez- se encuentran corroborados por las demás pruebas incorporadas o producidas en el debate que permitieron demostrar -sin duda alguna- que esas personas inscriptas como monotributistas eran, en verdad, empleados en relación de dependencia que fabricaban o comercializaban productos de la marca ASH.

En ese sentido, cabe mencionar que, a entender de este magistrado, no resulta admisible lo expresado por las defensas al sostener que -en el juicio- no pudo comprobarse que las 122 personas que incluyó la

---

<sup>45</sup> Ver resolución por la que el Juzgado de instrucción decreto el procesamiento de los imputados, como así también la resolución de la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, que confirmó ese temperamento.

<sup>46</sup> Tal como explicó el funcionario Oneto, en ocasión de declarar durante el juicio; lo que, a su vez, se corresponde con la información obrante en la determinación de deuda.

<sup>47</sup> Tal como expresamente surge del informe final de determinación de deuda, lo que fue ratificado en este juicio por los funcionarios que lo confeccionaron, Prando y Oneto.



AFIP como empleados en relación de dependencia de la empresa ASH efectivamente hayan sido tales (ello, puesto que, según indicaron, únicamente -y en el peor de los casos para los intereses de esas defensas- se había podido comprobar en este juicio que 36 personas habían sido empleados de la empresa -es decir, solo respecto de los trabajadores que declararon como testigos en el debate-, lo que representa a menos del 30% del total contabilizado por la AFIP; circunstancia que disminuiría los montos determinados como evadidos, por lo que no se alcanzaría la suma de \$ 200.000 exigida por la figura de evasión endilgada).

En efecto, si bien es cierto -como sostuvieron las defensas- que esas 122 personas no fueron escuchadas como testigos en este juicio (sino que se escuchó solo a 36<sup>48</sup>, lo que representa poco más de un 30% del total), el análisis conjunto e integrado de toda la prueba (directa e indiciaria) reunida en el juicio, de todas formas permite confirmar que esas 122 mantuvieron relación de dependencia laboral en los meses que fueron parte del objeto procesal. Es decir, considera el suscripto que el mero hecho de que 36 personas hayan prestado declaración testimonial en el debate, no impide tener por acreditado que eran 122 personas las que prestaron tareas bajo relación de dependencia para la empresa ASH, conforme fue determinado por la AFIP.

En primer lugar, corresponde destacar que las 36 personas que declararon en el juicio describieron -de manera sumamente coincidente- cuáles eran las condiciones en las que trabajaban bajo las órdenes de Marcelo LIOTTI y Liliana RAMÍREZ (ya sea en la fábrica o en los locales comerciales)<sup>49</sup>. Además, en el marco de la tramitación de estas

<sup>48</sup> Sobre ello, corresponde recordar que todas esas personas habían sido admitidas para declarar como testigos en el juicio oral pero que, por acuerdo expreso de las partes, el Tribunal las tuvo por desistidas durante el debate.

<sup>49</sup> Sobre ello, si bien no se desconoce que el testigo Herrera -como refirieron las defensas- indicó que *“iba y trabajaba lo que él quería”* (es decir, que él elegía cuándo trabajar y cuando no); lo cierto es que, del conjunto de manifestaciones efectuadas en esa declaración puede advertirse que, en verdad, el nombrado sí trabajaba bajo relación de dependencia para la empresa. En primer lugar, a pedido de la querella, el testigo aclaró que esa flexibilidad que tenía en su trabajo estaba dada porque *“tenía problemas de adicción”*, pero aclaró que *“había compañeros que lo podían cubrir siempre, en el hipotético caso de que él no fuese a trabajar, siempre quedaba alguien a cargo del local, siempre debía haber alguien”*. Ello, resulta ilustrativo de que -en caso de que el testigo no fuera al trabajo- un compañero debía cubrirlo. Además, en otros tramos de su declaración, el testigo refirió que se dedicó a vender zapatos para la empresa ASH *entre los años 2013/2015* y que *“En esa época pasó por varios lugares. En la calle Corrientes realizó esas tareas, y en varios lugares también, no recuerda las direcciones exactas”*, así como también comentó que percibía su salario como el resto de los trabajadores (lo retiraba diariamente de la caja), que *“él no tomaba ninguna decisión comercial, solo vendía, atendía a los clientes”*, que consiguió luego de dejar su CV en







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

actuaciones se efectuaron diferentes relevamientos de personal que permiten comprobar la efectiva prestación de servicios en calidad de dependientes de parte de los trabajadores de ASH. En concreto, y como se indicó en los informes de la AFIP, de esas 122 personas incluidas en la nómina, 86 fueron relevadas por el personal de ese organismo fiscal. Asimismo, respecto de los trabajadores que no fueron relevados, se consideró -principalmente- las fechas en que habían estado inscriptos como monotributistas; que habían declarado una actividad compatible con la producción y venta de calzado y que además declararon como domicilios fiscales los pertenecientes a la cadena de zapaterías ASH). Tales parámetros, resultan definitivamente ajustados a las constancias de la causa, en la medida que, según pudo comprobarse en el juicio, los trabajadores de ASH tenían la obligación de inscribirse como monotributistas para el desempeño de sus tareas, y declarar como domicilio fiscal a alguno de los inmuebles vinculados a la cadena de zapaterías.

En ese sentido, además, téngase en cuenta que, en las presentes actuaciones, se demostró que -en forma simultánea- la unidad de explotación de ASH tenía 3 talleres funcionando<sup>50</sup>, que contaban con varios repartidores o fleteros y que, como mínimo, tenían 20 locales en el ámbito de esta ciudad<sup>51</sup> (los cuales, como se vio, generalmente eran atendidos por una o dos personas inscriptas como monotributistas)<sup>52</sup>. Ello, resulta ilustrativo para demostrar las dimensiones de la empresa y, por ende, la cantidad de trabajadores que necesitaba para funcionar.

Además, no puede perderse de vista que prácticamente todos los trabajadores de ASH que declararon como testigos en el juicio fueron contestes al señalar que, no solo ellos, sino que **todas** las personas que trabajaban para la empresa tenían el mismo régimen laboral (es decir, que

---

uno de los locales, , que los últimos meses que trabajó le daban recibo de sueldo y que -básicamente- su modalidad de trabajo era igual a todos los otros vendedores. Todo ello, da cuenta de que su régimen era como el de cualquier otro empleado en relación de dependencia, subordinado económica, técnica y jurídicamente.

<sup>50</sup> Ubicados en las calles Portela 3031, Lafuente 2780/86 y Gual 2340 de CABA.

<sup>51</sup> Ubicados en las siguientes direcciones: Av. Santa Fe 1544; Av. Callao 785; La Pampa 2321; Av. La Plata 37; Av. Rivadavia 5402; Av. Callao 298; Av. Callao 61; Av. Corrientes 805; Uruguay 671; Av. Córdoba 4498; Av. Las Heras 2285; Av. Olazabal 5113; Av. Rivadavia 3982; Av. Corrientes 565; Av. Corrientes 1701; Lavalle 1502; Florida 702; Av. Santa Fe 3507; Malabia 1667 y Cuenca 2921.

<sup>52</sup> Incluso, sobre esto, cabe recordar lo dicho por el testigo Santiago Ojoli, en cuanto afirmó que -a pedido de los responsables de la empresa- abrió dos locales de “ASH” en la ciudad de Mar del Plata (que claramente no forman parte de los que fueron detectados por la AFIP en esta causa), y que estuvo 7 u 8 meses viviendo allá en un inmueble que “ellos” (en referencia a los dueños de la empresa) le pagaban.



todas estaban inscriptas como monotributistas para poder trabajar en la empresa). Ello también se compadece con otra prueba relevante incorporada al juicio, como resultan ser las facturas -secuestradas en los allanamientos de los locales- que habían sido emitidas (bajo el mismo formato que las demás trabajadores) a nombre de otros monotributistas que no prestaron declaración testimonial en el juicio.

En definitiva, más allá que -en este juicio- no hayan declarado las restantes 86 personas, lo cierto es que -de todos modos- por otros medios probatorios igualmente se pudo acreditar que esas personas trabajaban en relación de dependencia para la empresa ASH. Ello, se corresponde con el principio de libertad probatoria, por el que se establece que no existe una sola manera de probar los hechos controvertidos (contrariamente a lo entendido por la defensa, que consideró que esas relaciones laborales únicamente podían ser acreditadas a través de la prueba testimonial de los 122 trabajadores ajustados).

En ese sentido, y como ya se dijera, no se advierte que -para conformar esa lista de 122 trabajadores- la AFIP se haya valido de meras “presunciones” propias del derecho laboral. Más allá de no haberse indicado -concretamente- en base a qué presunciones propias del ámbito laboral se habrían basado los funcionarios de la AFIP para realizar el ajuste, advierte el suscripto que -por el contrario, y como ya se dijo- esa nómina se conformó de acuerdo a las constancias objetivas que pudieron recabarse durante la investigación (la mayoría de los cuales fueron, incluso, de relevamientos efectuados a los propios trabajadores)<sup>53</sup>. En particular, debe resaltarse del análisis de las declaraciones de las 36 personas (de las 122 que estaban en el listado) que declararon -de modo coincidente- en el debate, efectivamente se corroboró que todas ellas estaban en relación de dependencia; circunstancia que avala la precisión del relevamiento hecho por la AFIP.

Sobre ello, recuérdese que la defensa de RAMÍREZ mencionó -a modo de ejemplificación sobre esas supuestas presunciones utilizadas por la AFIP para realizar el ajuste- el caso del testigo Rodríguez (quien, en su declaración, indicó que tenía deudas con la AFIP porque cuando se desvinculó de ASH había seguido anotado como monotributista, por lo que

<sup>53</sup> En cambio, alrededor de otros 50 trabajadores quedaron excluidos de la nómina, justamente por no haberse podido confirmar la existencia de una relación laboral bajo dependencia con los aquí imputados.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

-con ello, y según la defensa- se ponía de manifiesto que el método utilizado por la AFIP no era válido). Sin embargo, advierte el suscripto que -según sus propios dichos- al momento del allanamiento Rodríguez aún continuaba trabajando para la empresa (habida cuenta que el testigo expresamente indicó que su desvinculación fue después del allanamiento). En consecuencia, si se considera que el allanamiento en cuestión fue realizado durante el mes de marzo de 2015, y que ese mes corresponde al último período fiscal imputado en estas actuaciones, se advierte que el ajuste realizado sobre esta persona se encuentra debidamente realizado, y que lo manifestado por el distinguido defensor resulta ser una mera hipótesis que carece de sustento probatorio.

Por otra parte, tampoco se comparte lo expresado por las defensas en cuanto a que hay personas que integran la nómina de la AFIP que tienen vínculos familiares con los imputados (en concreto, aludieron a Melisa Ivana Liotti, Anabela Ramírez, Micaela Ramírez, Jérica Soledad Ramírez y Darío Joaquín Meinet); quienes -según consideró- no pueden considerarse como empleados en relación de dependencia, pues no trabajarían “*para un tercero*” sino para una comunidad de la que se participa. Sin embargo, y de modo contrario a lo sostenido por la defensa, el suscripto considera que el hecho de que aquellas personas se encuentren vinculadas familiarmente con los imputados, no impide que -de todas formas- hayan sido empleadas en relación de dependencia de la empresa ASH y que -por lo tanto- sus empleadores hayan estado obligados al pago de sus aportes y contribuciones destinadas al sistema de la seguridad social.

Al respecto, destáquese -en primer lugar- que no existe una norma específica que determine la prohibición de celebrar contratos de trabajo entre familiares. Pero, además de ello, entiende el suscripto que, siempre que se corroboren los extremos requeridos para tener por acreditada una relación de dependencia laboral (que ya fueron mencionados anteriormente), corresponde que así sea registrada y que, por lo tanto, se paguen los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de la seguridad social. En concordancia con ello, como ya se ha dicho, el suscripto considera que -en estas actuaciones- la determinación de esas 122 relaciones laborales ha sido correctamente realizada, con arreglo a las constancias incorporadas al debate. Además, tampoco se advierte -ni la defensa lo ha invocado con elementos probatorios que sustenten- que las



#32859976#347198392#20221027213627864

personas indicadas como familiares de los imputados hayan tenido autonomía en el desempeño de su trabajo, sino que, por el contrario y como ya se sostuvo, las circunstancias valoradas en la presente dan cuenta de que la explotación comercial de ASH calzados estaba exclusivamente a cargo de los imputados LIOTTI y RAMÍREZ.

Lo expuesto, se corresponde con la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en el marco de los autos “Segurotti, Luciana c/ANSeS” aceptó la procedencia del contrato de trabajo incluso entre cónyuges, afirmando que *“por una parte, en la legislación vigente no existe prohibición genérica de contratar entre cónyuges ni específica de celebrar contrato de trabajo; por la otra, la independencia de los patrimonios -aun gananciales- de los cónyuges que estableció en primer término la ley 11357 y perfeccionó la ley 17711 (arts. 1276 y 1277, CC) permite perfectamente conciliar sus derechos y deberes en la órbita matrimonial con la relación de dependencia propia del mencionado contrato, que se limita a las actividades de la empresa. Por tanto, si -como en el caso- se acredita el vínculo laboral invocado, la efectiva realización de tareas y la realización de los correspondientes aportes al ente previsional correspondiente, no existen motivos para negar la prestación solicitada. Conclusión que es válida igualmente para el supuesto de vigencia de la sociedad conyugal como para el de separación judicial de bienes, en razón de que aquella no es obstáculo a la referida independencia patrimonial”*<sup>54</sup>.

De aquella jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal se deriva que -si los cónyuges pueden celebrar contratos de trabajo entre sí (esto es, uno puede resultar empleador del otro), con más razón resulta

---

<sup>54</sup> Ello, fue dispuesto por el Máximo Tribunal de modo contrario a lo que había resuelto la Cámara Federal de Seguridad Social en esa misma causa, que -en una interpretación similar a la aquí efectuada por la defensa de RAMÍREZ- consideró que no podía existir contrato de trabajo entre cónyuges, toda vez que -según consideraba- *“la circunstancia de que la labor que despliega la esposa o esposo es en favor de la sociedad conyugal, que integra con su cónyuge a partir del acto nupcial (arts. 1261 y 1764, CC), de allí que entre ellos no pueda existir contrato que cree una relación de trabajo en los términos de los artículos 21 y 22 de la LCT... aunque el establecimiento donde trabajaba fuera un bien propio del esposo, los frutos son gananciales (art. 1272, CC), y gananciales habrían sido también los salarios percibidos. Tal confusión patrimonial hace imposible la ajenidad, que es de la esencia del contrato del trabajo”*. En suma, en ese precedente la Corte Suprema de Justicia de la Nación -además de hacer hincapié en la importancia del cumplimiento de los requisitos de aportes al régimen previsional- estableció que, en el caso de una relación laboral entre esposos, se admitiría la concertación de un contrato de trabajo y -así- no cabe duda de que le corresponde a dicho trabajador la totalidad de los derechos que surgen de la relación de dependencia como resulta la cobertura de salud establecida por la ley 23660 y los beneficios previsionales de la ley 24241.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

posible celebrar contratos de trabajo con entidades manejadas por familiares de distinto grado de afinidad o consanguineidad, como sería el caso de las personas sindicadas por la defensa de RAMÍREZ.

Del mismo modo, en cuanto a lo referido por la defensa para que no se valoren las declaraciones de las personas que, al prestar testimonio en el debate, dijeron tener o haber tenido litigios laborales abiertos o terminados contra los imputados<sup>55</sup>, en primer lugar corresponde referir que -como bien advirtió esa parte- la recepción de esos testimonios ya había sido admitida oportunamente en el proveído de prueba (sin que haya sido cuestionada por las partes) y luego mantenida por el Tribunal durante el transcurso del juicio (sin perjuicio de tener presente la reserva efectuada por la defensa); por lo que únicamente cabe analizar si resulta posible valorar esas declaraciones (a lo que se opuso la defensa). Así, cabe adelantar que -a entender del suscripto- sí resulta posible efectuar esas valoraciones; ello, claro está, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional.

En efecto, nótese que, de acuerdo a nuestro ordenamiento procesal vigente, a los presuntos damnificados se les permite acceder a la causa y ser informadas acerca de su estado (art. 79 y ccdtes. del CPPN). Incluso, se prevé que los damnificados que se constituyan como querellantes pueden tener acceso total a la causa (arts. 82 y ccdtes.); siendo que, además, de acuerdo a lo normado por el art. 86 de ese cuerpo legal, esa intervención como querellante (por resultar la persona particularmente ofendida por el delito denunciado) no la exime de la obligación de declarar como testigo en el proceso.

De acuerdo a ello, el hecho de que esas personas puedan haber resultado damnificados por los hechos de evasión que aquí se juzgan -o que incluso algunos de ellos haya podido tener acceso a las actuaciones-, no obstaculiza de modo alguno que puedan ser escuchadas como testigos en este juicio; por el contrario, se considera que esa es la manera que prevé nuestro ordenamiento procesal para oírlas en el proceso, sin perjuicio de la valoración que corresponda efectuar de esos testimonios, de acuerdo a las reglas de la sana crítica racional<sup>56</sup>.

<sup>55</sup> Como los casos de Cardozo, Ojoli, Orellano, Córdoba Reggi, Nicola, Rocdan, Laurelli y Gonzalo González.

<sup>56</sup> De acuerdo a lo establecido por el art. 241 del C.P.P.N.



Sobre ello, advierte el suscripto que todos los testigos (hayan manifestado -o no- tener algún litigio laboral contra los imputados) fueron coherentes y contestes entre sí al describir las condiciones de trabajo que le eran impuestas por LIOTTI y RAMÍREZ. Tampoco se ha advertido algún tipo de animosidad de parte de alguno de esos testigos en querer perjudicar a los imputados, pues en sus declaraciones simplemente se limitaron a describir cómo era la modalidad de trabajo que realizaban al fabricar o comercializar los productos de la marca ASH. Incluso, y de modo contrario a la defensa, advierte el suscripto que la mayoría de esas personas (que manifestaron tener o haber tenido litigios contra los imputados), expresamente indicaron que no tenían ningún interés particular en el desarrollo de este proceso, por lo que -respetuosamente entiendo- que asignarles ese carácter a sus declaraciones se basa en una mera especulación de la defensa que, como se ve, no se compadece con los dichos de los propios testigos.

Sobre este punto, en el caso concreto citado por la defensa (respecto del testigo OJOLI, sobre quien, según la defensa, en la justicia laboral se determinó que no pudo demostrar que trabajó en relación de dependencia para ASH antes del año 2015), corresponde indicar -en primer lugar- que más allá de lo que pueda haberse acreditado en aquellas actuaciones (que no fueron incorporadas al debate), en el marco de este proceso penal, y de acuerdo a todo lo ya expuesto, sí pudo determinarse la existencia de la relación laboral, en base a la evidencia producida en el debate con pleno control de las partes, máxime si se considera que su declaración (en cuanto explicó las condiciones en las que trabajaba) resulta coincidente con la demás prueba producida en el debate y, particularmente, con la declaración testimonial de las demás personas que trabajaron en los locales comerciales.

Finalmente, tampoco tendrá acogida favorable lo sostenido por la defensa de RAMÍREZ al indicar que el informe final de determinación de deuda tampoco podía constituir prueba en su contra, puesto que -en sede administrativa- no se le habría dado la debida intervención (lo que habría afectado su derecho de defensa y a la igualdad, resguardados constitucional y convencionalmente). En ese marco, entiende el suscripto que lo ocurrido en sede administrativa no vincula lo que sucede en este proceso penal (más aún si se considera que en sede penal la





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

imputada contó con todos los derechos que le asisten, lo que no se encuentra objetado por la propia defensa). Así, si se omitió notificarla como responsable de ASH en el marco del procedimiento administrativo, ello no tiene consecuencia alguna en cuanto a la imputación o responsabilidad por el hecho que se le reprocha en sede penal. Como se dijo, en el marco de este proceso tuvo efectiva posibilidad de cuestionar todos los extremos que hacen a la acusación en su contra.

En ese sentido, la alegada afectación al derecho de defensa en juicio (derecho que, como bien indicó la defensa, resulta obligatorio respetar aún en sede administrativa, tal como reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”), podrá ser objeto de alegación como argumento de defensa en el marco de aquella causa administrativa; mas no en este procedimiento penal (cuyo objeto, claramente, difiere sustancialmente del pretendido en sede administrativa). En definitiva, se advierte que -en este proceso penal- RAMÍREZ no se vio limitada en el ejercicio de ninguno de sus derechos constitucionales; incluso, tampoco se advierte que la imputada se haya visto impedida, como mencionó la defensa, de haberse acogido al régimen de regularización previsto por ley 27.541, de plantear la conciliación o reparación integral, o de solicitar la probation y pedir reparar el daño en la medida de las posibilidades (nótese, al respecto, que la aplicación de ese instituto fue oportunamente solicitada por la defensa de la imputada, siéndole denegado el acceso a ese instituto por motivos distintos, que no se vinculan con la circunstancia de que ella no era la responsable de la deuda a nivel tributario).

Así las cosas, de acuerdo a todo lo que fue anteriormente explicado, se ha podido acreditar que los imputados Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ evadieron el pago de los aportes y contribuciones de las personas que trabajaron como empleadas en relación de dependencia en los talleres fabriles y en los locales comerciales de la unidad de explotación que operó bajo la denominación “ASH” (*Argentinian Shoes*), dedicados a la producción y venta de calzado femenino, por los períodos mensuales y los montos detallados en el cuadro expuesto al inicio del presente acápite.

### **III. Calificación jurídica:**



#32859976#347198392#20221027213627864

Los hechos acreditados y atribuidos a Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ resultan constitutivos del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, previsto en el art. 7 de la ley 24.769 según reforma de la ley 26.735 (que resulta de aplicación a los hechos referidos a los períodos junio de 2013, diciembre de 2013, febrero de 2014 a noviembre de 2014 y enero a marzo de 2015), y en el art. 5 de la ley 27.430 (que resulta de aplicación al hecho vinculado al período mensual de diciembre de 2014).

Sobre ello, cabe recordar que -en ocasión de denegar el planteo de suspensión de juicio a prueba formulado por la entonces defensa de los imputados LIOTTI y RAMÍREZ<sup>57</sup>- este Tribunal hizo lugar, parcialmente, a la solicitud de aplicación al caso de la ley 27.430 como ley penal más benigna (que había efectuado la anterior defensa de los imputados), únicamente en lo relativo al período fiscal de diciembre de 2014 (que venía siendo encuadrado legalmente en el supuesto agravado del delito, en virtud del monto de la evasión) y, en consecuencia, dispuso que ese suceso debía quedar encuadrado legalmente como constitutivo del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, previsto en el art. 5 de la citada ley 27.430<sup>58</sup>. Ello, en el entendimiento de que el nuevo régimen penal tributario instaurado por la referida ley 27.430 resultaba ser más favorable que el vigente al momento de la comisión de ese hecho, pues el monto de la evasión de aportes relativa a ese período fiscal no alcanzaba al previsto por la figura agravada anteriormente establecida por el art. 8, inc. “a” de la ley 24.769<sup>59</sup>.

En definitiva, teniendo en cuenta que -como expresamente se dijo en aquella resolución- al tratarse de hechos independientes los que aquí se juzgan (que concurren en forma real entre sí) nada obsta a que el período de diciembre de 2014 se encuadre jurídicamente en el art. 5 de la ley 27.430; mientras que los demás períodos que conforman el objeto procesal

---

<sup>57</sup> Resolución que fue confirmada por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal (Registro N° 11/21.4).

<sup>58</sup> Cfr. art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en función del art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional.

<sup>59</sup> Criterio que fue convalidado posteriormente en el fallo “Vidal, Matías Fernando Cristóbal y otros s/ infracción ley 24.769” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CPE 601/2016/CSI), de fecha 28/10/2021.







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

de la causa mantengan la subsunción en la ley 24.769 (según reforma de la ley 26.75)<sup>60</sup>.

### **Tipicidad objetiva:**

Por la primera de aquellas disposiciones legales (esto es, el art. 7 de la ley 24.769, según reforma de la ley 26.735) se establece que *“Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado, que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de ochenta mil pesos (\$ 80.000) por cada mes”*.

En sentido similar, el nuevo Régimen Penal Tributario (instaurado por ley 27.430) contempló la figura de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones de los recursos de la seguridad social en su art. 5°, quedando tipificado de la siguiente manera: *“Será reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere parcial o totalmente al fisco nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pago de aportes o contribuciones, o ambos conjuntamente, correspondientes al sistema de la seguridad social, siempre que el monto evadido excediere la suma de doscientos mil pesos (\$ 200.000) por cada mes”*.

---

<sup>60</sup> En efecto, cuando se decide la aplicación al caso de una ley posterior a la comisión del hecho por resultar más beneficiosa, esa nueva ley debe ser aplicada “en su totalidad” (esto es, sin poder “seleccionar” los aspectos más favorables de uno y otro régimen -el anterior y el nuevo-, componiendo así una “tercera ley”), lo cierto es que dicha aplicación integral se refiere **al hecho incriminado** (y no al expediente en su totalidad). Por ello, es que -a mi entender- nada obsta a que se apliquen diferentes leyes en un mismo expediente, siempre que -en lo que concierne a cada hecho independiente- la norma en la que se encuadra el suceso sea aplicada en su totalidad, tal como ocurre en este caso (al respecto, ver DIVITO, Mauro A. y VISMARA, Santiago en “Corte Suprema de Justicia de la Nación – Máximos Precedentes – Derecho Penal Parte General”, 1° edición, 1° reimpresión, C.A.B.A., La Ley, 2014, Tomo I, pág. 457; en referencia al precedente de la Corte Suprema “Elena M. Morcillo de Hermelo”, Fallos 310:267). En sentido similar, se expidió la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal respecto a hechos independientes en los que se aplicaba leyes penales tributarias distintas (mediante resolución de fecha 24/02/2017, dictada en causa “R., L. M; V., G. E. y M., A. E. s/ recurso de casación”).



Como puede observarse del simple cotejo de ambas disposiciones, todos sus elementos típicos resultan ser idénticos; lo único que se modificó fue el monto de la condición objetiva de punibilidad.

En cuanto al bien jurídico tutelado por la norma, se ha entendido que la seguridad social resulta ser una función primordial del Estado y -concretamente- que “... *el bien jurídico es un patrimonio concreto, el erario de la Tesorería de la Seguridad Social, que en los casos de conductas criminales que lo lesionan (evasión, apropiación indebida de aportes), se está afectando a la población de las contingencias biológicas, patológicas y/o económico-sociales que pueda padecer; en definitiva se lesiona la dignidad humana, su libertad, solidaridad, integridad e igualdad...*” (Mariano Hernán Borinsky, Juan Pedro Galván Greenway, Javier López Biscayart y Pablo Nicolás Turano en “Régimen Penal Tributario y Previsional - Ley 24.769 con las reformas de la ley 26.735”, Ed. Rubinzal Culzoni, 1º edición, 2012, pág. 108, con cita a doctrina).

El sujeto activo de la figura es el “obligado” al pago; por lo que solo podrá ser autor quien se encuentre compelido al deber legar de pagar los aportes y contribuciones destinadas al sistema de seguridad social. Dicho deber, en el caso concreto, surge de las previsiones de la ley 24.241 (arts. 2, 10, 11 y 12), por las que se establece que el empleador debe descontar de las remuneraciones que pague a sus trabajadores en relación de dependencia los aportes a la seguridad social, y depositar las contribuciones a su cargo en el SUSS.

Además, se advierte de la simple lectura de las disposiciones que el verbo típico establecido por el tipo objetivo se encuentra constituido por el “evadir”. Cabe afirmar, que el vocablo “*evadir*” ha sido definido genéricamente como “*eludir con arte o astucia una dificultad prevista*” (conf. Diccionario de la Lengua Española, decimoctava edición, año 1956), mientras que en materia jurídica se lo ha conceptualizado como “*aquella acción que implica evitar pagar lo que correspondía en materia tributaria o previsional*” (conf. “Ley Penal Tributaria”, Jorge E. Haddad, Editorial Depalma, año 1991, págs. 17 y sgtes).

En el caso concreto, resulta claro lo establecido por la norma en cuanto a qué es lo que se debe evadir para la configuración del tipo: deberán ser los aportes y/o contribuciones destinadas al sistema de la seguridad social.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Finalmente, en cuanto a los medios comisivos, se ha explicado que la evasión se trata de un delito de varios actos, pues “... se compone por dos conductas diferentes, una puramente activa y una meramente omisiva”. Así, se ha dicho que “... Desde este punto de vista, la evasión debe entenderse como una actividad compleja en la cual el primero de los actos está compuesto por el desarrollo de acciones tendientes a la modificación aparente de alguno de los aspectos de la obligación previsional. Esta es la etapa del iter críminis con respecto al cual deben vincularse dos de los aspectos normativos más relevantes: el ‘ardid o engaño’ y la referencia a la realización ‘por acción o por omisión’. En este sentido, no debe entenderse al ardid o engaño como un resultado típico, sino como el despliegue de maniobras con características engañosas o ardidosas, las cuales, además, deberán tener la capacidad de modificar el objeto de la obligación previsional, con lo cual, el desarrollo de aquellos actos posibilitará la exposición de una situación aparente distinta a la correspondiente. En este sentido, la conducta engañosa podrá relacionarse con el aspecto material, el personal, el espacial o el temporal de la prestación laboral...”; siendo que, finalmente, la conducta omisiva se trata de la efectiva falta de ingreso de los aportes o contribuciones que debía efectuarse (Alejandro Catania, en “Régimen Penal Tributario - Estudio sobre la ley 24.769”, Editores del Puerto, 2005, pág. 166/167).

Sentado todo cuanto precede, cabe decir que -a entender del suscripto- en el presente caso se encuentran configurados todos los elementos del tipo objetivo exigidos por la figura que prevé el delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social.

En primer lugar, las pruebas producidas o incorporadas al juicio, como ya se explicó, demuestran la existencia de una única explotación comercial dedicada a la fabricación y comercialización de calzado bajo el nombre de fantasía "ASH", cuyos responsables resultaron ser Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMIREZ.

Por ello, resulta claro que los imputados LIOTTI y RAMÍREZ, en su calidad de responsables de la unidad de negocio que operaba bajo el nombre de fantasía “ASH”, eran quienes se encontraban obligados al pago de los aportes y contribuciones de la seguridad de los trabajadores que, bajo relación de dependencia, prestaban servicios en las



#32859976#347198392#20221027213627864

fábricas y en los locales donde se producía y comercializaba -respectivamente- los productos de la marca “ASH”. En efecto, en la presente sentencia se comprobó su condición de empleadores; por lo que, de acuerdo a lo establecido en los arts. 2, 10, 11 y 12 la ley 24.241, ellos eran quienes debían ingresar al sistema único de la seguridad social, los aportes y contribuciones de los trabajadores que prestaban servicios para la unidad de negocio, más allá de la falta de inscripción formal.

Por su parte, también se comprobó que los imputados realizaron un conjunto de maniobras engañosas o ardidasas para evadir el pago de esos aportes y contribuciones.

En primer lugar, se comprobó que los imputados Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ eran quienes seleccionaban y contrataban al personal y les exigían que se registren como trabajadores independientes en el Régimen Especial de Pequeños Contribuyentes (monotributo), a los fines de ocultar la relación de dependencia laboral que existía con aquellos y -por ello- la calidad de sujetos obligados al pago de los aportes y contribuciones al sistema de seguridad social (derivada de la condición de empleadores que ostentaban). Pero, como pudo comprobarse, esa exigencia -que posee una entidad más que significativa para conformar el engaño exigido por la figura penal<sup>61</sup>- no fue la única maniobra ardida desplegada por los imputados para evadir el pago de los aportes y contribuciones de los empleados que tenían bajo relación de dependencia; sino que, además, se vio complementada por otra gran cantidad de ardidés que realizaron para intentar dar apariencia de verosimilitud al engaño realizado.

---

<sup>61</sup> En efecto, así lo ha entendido la doctrina al sostener que: “... tanto la registración como autónomos (por locación de servicios) a quienes se encuentran, en realidad, bajo una relación de dependencia; como la omisión de declarar a personal bajo relación de dependencia, son la exteriorización de una falsedad de distintos aspectos de la obligación relacionada con la seguridad social” (Alejandro Catania, ob. cit., pág. 167). Ello, a su vez, se corresponde con lo sostenido en esta misma causa por los Sres. Jueces de Cámara integrantes de la Sala “B” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal económico, que indicaron que “la incorporación presunta de empleados que habrían sido registrados como trabajadores independientes en el Régimen Especial de Pequeños Contribuyentes (Monotributo) aparece como un ardid idóneo, en los términos requeridos por la figura de evasión previsional analizada, tendiente a ocultar la realidad de la relación laboral que existiría en principio entre los trabajadores advertidos y los imputados Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ, y por esto, la calidad de estos dos últimos de sujetos obligados al pago de los aportes y contribuciones al Sistema de Seguridad Social, derivada de la condición de empleadores...” (Reg. 479/2018, de fecha 29/06/2018).





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Por un lado, se probó que los imputados se encargaban de gestionar la confección de facturas a nombre propio de cada uno de los trabajadores (que les hacían llegar a cada uno de los locales donde trabajaban a través de los fleteros que repartían las mercaderías), para que éstos documenten parte de las ventas a título personal (solo dos o tres por día); lo que sin dudas también estaba destinado a aparentar que aquellos eran trabajadores autónomos y legalmente inscriptos en el monotributo, y así encubrir su calidad de dependientes.

Por otro lado, se comprobó que, además de obligar a los trabajadores a que se inscriban como monotributistas (para aparentar que eran trabajadores independientes), los imputados confeccionaban contratos apócrifos de locación (en los que, falsamente, se indicaba que un determinado trabajador “alquilaba” el inmueble o una parcela donde se comercializaban los productos que se fabricaban). Incluso, se comprobó que los imputados les enviaban a los trabajadores falsos “comprobantes” de pago de esos alquileres (es decir, documentos que -mendazmente- consignaban que el mismo trabajador que figuraba como locatario era quien pagaba el precio de esos alquileres), los cuales -por exigencia de LIOTTI y RAMÍREZ- debían ser guardados por los empleados en las carpetas personales que tenían en los locales.

De igual forma, se determinó que LIOTTI y RAMÍREZ brindaron precisas instrucciones a los trabajadores para que nunca firmen nada, que no reciban correspondencia que no sea para sí mismo y que “*no respondan por otros asociados*” sino que solo debían “*responder solo por sí mismos*”. Además, según los propios testigos, se les indicaba que -en el caso de estar ante una inspección- solo debían mostrar la documentación personal que tenían guardada en el local (o sea, las constancias de su inscripción como monotributistas, facturas emitidas a nombre propio, comprobantes del pago del monotributo, contratos de locación en los que el trabajador figuraba como locatario del inmueble, recibos de alquiler por el pago de la parcela, etc.)<sup>62</sup>, que -como se vio- **era toda documentación apócrifa**.

En definitiva, esas indicaciones estaban claramente destinadas a mantener oculta la relación de dependencia laboral y engañar a los

---

<sup>62</sup> Todas esas indicaciones, vale recordar, eran realizadas bajo la advertencia de que -en caso de incumplimiento- podían “*quedar fuera de la sociedad*”.



funcionarios que pudiesen realizar inspecciones (de acuerdo a las facultades que les confiere la ley) al simular que las personas que allí trabajaban eran monotributistas independientes.

Por lo demás, no puede tener acogida favorable lo sostenido por la defensa de LIOTTI que indicó que, en el caso, no hubo engaño alguno, porque era su asistido quien abonaba mensualmente los pagos del monotributo de los trabajadores. Por el contrario, esa circunstancia -debidamente constatada- resulta ser un elemento que sustenta la acusación formulada contra su asistido, habida cuenta que los monotributistas no solo que no manejaban -por sí mismos- el régimen al que se les obligaba a adherirse ante la AFIP, sino que incluso formaba parte de la maniobra de simulación pergeñada que los trabajadores tengan en su lugar de trabajo la constancia de pago del monotributo (que le hacían llegar a través de los fleteros).

En suma, y de conformidad con lo sostenido por los acusadores, a entender de este magistrado no quedan dudas de que la maniobra desplegada por los imputados configuró un **ardid idóneo** para inducir a error al organismo recaudador, tal como se requiere para la configuración del delito de evasión previsional. Más aún, si se considera que las maniobras engañosas realizadas por LIOTTI y RAMÍREZ fueron respaldadas con diversos elementos objetivos, como ser -entre otros- las mentadas facturas comerciales emitidas a nombre de los trabajadores, los contratos de locación y los respectivos comprobantes de pago falsos, las constancias de inscripción en el régimen de monotributo de los trabajadores, etc.

Finalmente, también se comprobó la omisión del pago de aportes y contribuciones correspondientes al sistema de la seguridad social que debían realizar, lo que quedó expuesto en la determinación de deuda realizada por la AFIP. Es decir, a partir de la maniobra engañosa perpetrada por los imputados efectivamente se produjo la falta de ingreso de los aportes y contribuciones de la seguridad social; esto es, se concretó la evasión.

Además, cabe dejar asentado que, como ya se dijo, al tratarse cada uno de los períodos fiscales en que se produjo la evasión de hechos independientes y escindibles (al haberse consumado en momentos





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

diferentes), tales sucesos concurren en forma real entre sí, conforme lo establecido en el art. 55 del Código Penal.

Por todo lo expuesto, no quedan dudas -a entender del suscripto- que las conductas cometidas por los imputados afectaron -en forma penalmente relevante- el bien jurídico tutelado por el delito de evasión previsional, toda vez que se indujo a error al organismo recaudador (simulando que 122 personas trabajaban en forma autónoma cuando en verdad eran empelados en relación de dependencia), lo que derivó en la evasión del pago de los aportes y contribuciones de esos trabajadores, por los períodos y montos que conforman la acusación.

### **Tipicidad subjetiva:**

En cuanto al aspecto subjetivo, se trata de un delito doloso; que exige que el autor haya sabido respecto de la realización del tipo objetivo y que la haya querido. Al respecto, se ha sostenido que al dolo se lo identifica con la realización del fin típico, su momento conativo es la voluntad realizadora, que abarca tanto el fin propuesto como los medios elegidos. El dolo así entendido -sea el que recae sobre los medios y el fin- resulta ser el dolo directo, en este caso el autor quiere directamente la producción de ese resultado (Confr. Zaffaroni, Raúl, “Tratado de Derecho Penal. Parte General” Tomo III, Ed. Ediar, pág. 348).

En concreto, respecto de la figura penal que aquí se trata se ha indicado que “... *el aspecto subjetivo... deberá contener el conocimiento y la voluntad de realización de una maniobra ardidosa, el conocimiento de los elementos de la autoría (la calidad de obligado), el conocimiento del deber extrapenal que le obliga al pago y el conocimiento de la posibilidad de realización de la acción debida...*”<sup>63</sup>.

En el presente caso, y tal como han sostenido los acusadores, ha quedado probado -a criterio del suscripto- que la intervención en los hechos de los imputados LIOTTI y RAMÍREZ fue realizada con **dolo directo**, ya que voluntariamente dirigieron sus conductas hacia el fin buscado (y conseguido): la evasión del pago de los aportes y contribuciones de los trabajadores de las fábricas y locales de la unidad de explotación que funcionaba bajo el nombre ASH.

---

<sup>63</sup> Alejandro Catania, ob. cit., pág. 177.



En efecto, la totalidad de los comportamientos engañosos realizados por los imputados (que fueron mencionados anteriormente) así lo demuestra: como se dijo, no solo obligaban a los trabajadores -que ellos mismos elegían- a inscribirse como monotributistas, sino que montaron un falso escenario para aparentar que sus empleados eran trabajadores autónomos (como la confección de falsos contratos de locación -y comprobantes del pago de aquellos- que daban cuenta de que los trabajadores “alquilaban” parcelas de los locales, o la confección de facturas a nombre de cada uno de los trabajadores, para que facturen parte de las ventas a título personal). Incluso, se demostró que a los empleados se les indicaba cómo debían actuar ante inspecciones de organismos públicos (expresamente, se les decía -bajo amenaza de poder ser echados- que solo debían responder por sí mismos y nunca por otros empleados, lo que sin dudas era para dar apariencia de que eran personas que trabajaban por cuenta propia). Todo ello, a entender de este magistrado y tal como lo han sostenido los acusadores, demuestra que los imputados **sabían** perfectamente la obligación que tenían de pagar los aportes y contribuciones y, justamente para evitar hacerlo, **voluntariamente** desplegaron las maniobras ardidosas referidas.

Por ello, no puede tener acogida favorable lo sostenido por la defensa de LIOTTI en ocasión de formular su alegato (en cuanto sostuvo que no se configuró el dolo exigido por la figura penal, toda vez que -según indicó- su asistido había actuado en la creencia de que su accionar era lícito -aduciendo que había actuado padeciendo un “error de derecho”-; circunstancia que fundamentó en que la utilización del régimen del monotributo sería una “*práctica habitual y consensuada*” de modalidad de contratación). De modo contrario a ello, y tal como han entendido los acusadores, se entiende que no existió error alguno en el accionar del imputado, sino que -por el contrario- el nombrado perfectamente sabía y quería consumir la evasión del pago de los aportes y contribuciones de sus dependientes a través de las maniobras engañosas diseñadas y realizadas por él y su pareja (la imputada RAMÍREZ).

En primer lugar, nótese que el imputado LIOTTI -antes de los hechos- se encontraba inscripto como empleador ante la AFIP. Ello, demuestra claramente que el nombrado conocía las obligaciones que recaían en cabeza de los empleadores, al tener registrados los trabajadores







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

bajo relación de dependencia. Sin embargo, recuérdese que -a partir del mes de 02/2010- el nombrado se dio de baja como empleador. Sin dudas, esa decisión del nombrado tuvo como propósito la intención de dejar de abonar los aportes y contribuciones de los trabajadores de las fábricas y locales comerciales. Prueba de ello, es que -junto a Liliana RAMÍREZ- obligó a las personas que trabajaban como empleadas en relación de dependencia a que se inscriban como monotributistas ante la AFIP para continuar su trabajo.

Además, todas las maniobras engañosas ideadas y perpetradas por el nombrado -junto a Liliana RAMÍREZ- para simular que los trabajadores de ASH efectuaban sus tareas en forma independiente, demuestra que los nombrados sabían perfectamente que la utilización del régimen de monotributo no era el que correspondía de acuerdo a la ley para la contratación de los trabajadores.

Sobre ello, se comparte lo expresado por los acusadores en ocasión de formular sus alegatos, que indicaron que, si los imputados actuaban en la creencia de que su accionar era correcto o apegado a la ley, no tendrían por qué haber hecho firmar falsos contratos de locación a los trabajadores, ni mucho menos debería haberle exigido a aquellos que se comporten de determinada manera a fin de obstaculizar las inspecciones que pudiesen recibir de organismos públicos.

En definitiva, se encuentra plenamente probado que, lejos de haber sido víctima de un error, el imputado Marcelo LIOTTI -junto a Liliana RAMÍREZ- deliberadamente pergeñaron maniobras **engañosas** tendientes a simular que las personas que trabajaban bajo su subordinación eran trabajadores autónomos o independientes, con el inequívoco propósito de evadir el pago de los aportes y contribuciones que debían ingresar al sistema de la seguridad social.

Por todo ello, y de conformidad con lo sostenido por los acusadores, se encuentra debidamente probado -a entender de este magistrado- que los imputados actuaron con dolo directo, ya que dirigieron su conducta hacia el resultado verificado: la evasión del pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema de la seguridad social de los empleados en relación de dependencia que trabajaban para la empresa “ASH”.



#32859976#347198392#20221027213627864

### **Grado de la intervención de los imputados en los hechos:**

Por los hechos acreditados, el suscripto coincide con los acusadores en que los imputados deben responder en calidad de **coautores** (art. 45 del C.P.).

Corresponde recordar, que es “autor” quien mantiene en sus manos, abarcado por el dolo, el curso causal del hecho típico. En consecuencia, el dominio del hecho lo tendrá quien pueda impedir o hacer avanzar la acción hasta su resultado final, a su libre albedrío<sup>64</sup>.

En la coautoría, el co-dominio funcional del hecho, tal como lo ha caracterizado, requiere que cada uno de los coautores tenga en sus manos el dominio del hecho a través de la parte que le corresponde de acuerdo a la división del trabajo, que deberá actualizarse en la fase de ejecución para que configure coautoría<sup>65</sup>.

La coautoría, tal como se presenta en el caso, requiere que los intervinientes en la ejecución del hecho actúen en común, para lo cual cada uno debe realizar un aporte objetivo que consista en la realización de un elemento del tipo, basado en un acuerdo previo, con dominio funcional del hecho y plena responsabilidad personal, de modo que, aun cuando ninguno logre efectuar la totalidad de los aportes causales que requiera la estructura típica, la resolución conjunta hace que se les puedan atribuir las contribuciones del otro como si fueran propias. La resolución común de realizar el delito es el componente subjetivo necesario de la co-autoría que justifica la recíproca imputación de cualquier atribución causal a la ejecución del hecho efectuada en el marco del acuerdo<sup>66</sup>.

En tales condiciones, y como ninguno de los coautores funcionales realiza más que una fracción de la conducta que el tipo penal describe, se admite la imputación mutua a cada uno de los coautores de todos los aportes que prestaron al hecho en el marco de la decisión común<sup>67</sup>.

---

<sup>64</sup> Confr. MAURACH, Reinhart, GOSSEL, Karl y ZIPH, HEINZ, “Derecho Penal Parte General”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 517.

<sup>65</sup> Claus Roxin: “Autoría y dominio del hecho en derecho penal”, Marcial Pons, séptima edición, 2000, págs. 308 y ss.

<sup>66</sup> Confr. Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa Nro. 2934, 28.06.2001, “ARCE, Víctor Ángel s/recurso de casación”.

<sup>67</sup> Al respecto, Zaffaroni - Alagia - Slokar: “Derecho Penal. Parte General”, Ediar, año 2000, págs. 752/753, quienes explican que el art. 45 del Código Penal contempla la base legal que evita lesionar el principio de legalidad.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Pues bien, en el caso concreto, se encuentra demostrado que los hechos cometidos fueron claramente diseñados y planificados -con cierto reparto de roles- por parte de los imputados; y que, en el marco de su ejecución, los nombrados compartieron el total dominio de los cursos causales.

En primer lugar, se acreditó que ambos imputados efectivamente intervenían en la organización de las actividades de fabricación y comercialización de zapatos producidos bajo el nombre de fantasía ASH, y que ambos eran los superiores jerárquicos de esa cadena de zapaterías (que tenía más de 20 locales comerciales de venta de zapatos sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al menos 3 locales donde funcionaban los talleres fabriles en donde se confeccionaban los productos que proveían a aquellos locales).

Asimismo, de acuerdo a los dichos de los testigos que trabajaron para la empresa ASH, se comprobó que -para el desarrollo de la actividad- existía cierta distribución de roles (esto es, que cada uno se ocupaba de una parte del negocio); la intervención de LIOTTI estaba más relacionada con la confección del calzado y distribución a los locales (es decir, con la actividad que se desarrollaba en los talleres fabriles), mientras que la actividad de RAMÍREZ se vinculaba más que nada al funcionamiento de los locales comerciales (las directivas impartidas a los vendedores, todo lo relacionado a la venta del producto -como el diseño de las vidrieras-, etc., aunque también participaba del diseño de los zapatos, como ella misma reconoció).

Sin perjuicio de ello, también quedó acreditado que los imputados eran quienes -de forma conjunta- organizaban toda la estructura comercial de ASH y se encontraban a cargo de la administración de la explotación; seleccionaban y contrataban el personal que trabajaba en la producción y comercialización de los productos de la marca ASH; así como también que, de común acuerdo, adoptaron la decisión de obligar a los trabajadores que ellos mismos seleccionaban a inscribirse como monotributistas para ocultar la relación laboral ante el fisco, con sustento en las maniobras engañosas diagramadas por los imputados, tales como la suscripción de falsos contratos de locación de parcelas de los locales (que figuraban, indistintamente, a nombre de LIOTTI y de RAMÍREZ como locadores), la emisión de facturas a nombre de los trabajadores (con la



#32859976#347198392#20221027213627864

indicación de que, con ellas, solo debían facturar dos o tres ventas diarias), las indicaciones sobre cómo proceder en caso de recibir inspecciones de organismos estatales (en concreto, y como ya se explicó, se les decía que solo debían exhibir documentación propia, para engañar a las autoridades sobre que eran trabajadores independientes), entre otras.

Por ello, puede válidamente colegirse que los imputados compartieron el dominio del hecho enderezado a la comisión del delito que constituye el objeto procesal de la causa, por lo que se encontraban en plena condición de interrumpir la producción de los resultados finales constatados (evasión del pago de aportes y contribuciones destinados al sistema de la seguridad social, de los trabajadores de las fábricas y locales de su empresa); extremo que no se verificó en la realidad, pese a su capacidad para actuar en esa dirección.

En efecto, se advierte que los imputados no solo podían haber registrado a los trabajadores como empleados en relación de dependencia (como correspondía), sino que, además -y de acuerdo a lo declarado por los testigos- eran ellos quienes disponían del dinero de la recaudación de las ventas (lo que denota que podían haber efectuado el pago de los aportes y contribuciones como les era exigido por la ley).

Párrafo aparte, corresponde mencionar -una vez más- que el hecho de que (en sede administrativa) la determinación de la deuda se haya puesto solo en cabeza del imputado Marcelo Julián LIOTTI, no impide que -en la presente sentencia- la imputada Liliana Delfina RAMÍREZ pueda ser considerada coautora penalmente responsable en los hechos de evasión en los que interino activamente junto al nombrado.

Ello, en la medida en que -como ya se dijo- la nombrada intervino (junto a Marcelo LIOTTI) en los hechos en su carácter de coadministradora de la unidad de explotación que operó bajo la denominación de fantasía “ASH” calzados, de acuerdo con lo previsto por el art. 14 de la ley 24.769, por el que se establece que **“Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o**





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*autorizados **que hubiesen intervenido en el hecho punible** inclusive cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz” (el destacado es de la presente).*

En ese marco, entiende el suscripto -al igual que lo ha hecho la parte querellante<sup>68</sup>- que las decisiones adoptadas en el marco del proceso administrativo (en este caso, que la determinación de deuda se haya colocado exclusivamente en cabeza de Marcelo LIOTTI), no son vinculantes -en forma alguna- para el juez penal.

Así, se comparte el criterio mantenido por la querella en ocasión de formular sus alegatos (con sustento en lo entendido por la Sra. Jueza que intervino durante la instrucción, Dra. María Verónica Straccia), en cuanto a que la determinación de la deuda por parte del organismo recaudador “... *no es una cuestión prejudicial y por consiguiente resulta totalmente revisable por el juez interviniente, cuyas facultades jurisdiccionales tienen jerarquía constitucional otorgada al Poder Judicial de la Nación y no pueden ser condicionadas por las decisiones de los organismos dependientes de Poder Ejecutivo Nacional*”; a lo que agregó que “... *la naturaleza misma de los procesos de que se trata (administrativo y penal) impide aquel condicionamiento pues la potestad de revisión por parte del tribunal resulta ser un resguardo para el imputado de modo tal que el juez natural de la causa -imparcial e independiente- revise los actos administrativos*”.

Esa atribución del juez penal (de resolver el conflicto de acuerdo a la legislación vigente, ejerciendo una revisión amplia de lo actuado en sede administrativa por el organismo fiscal), como se ha dicho, resulta ser la manera más eficaz para resguardar las garantías constitucionales que le asisten a los imputados; pues, en definitiva, es el juez natural (imparcial e independiente) quien -de esa forma- revisará esos actos de la administración<sup>69</sup>, permitiendo una discusión amplia de las partes

---

<sup>68</sup> Y, como se dijo, de conformidad con lo que se ha venido sosteniendo en estas actuaciones (ver, al respecto, lo sostenido por la Sra. jueza que estuvo a cargo de la instrucción de la causa, Dra. María Verónica Straccia, en ocasión de dictar el procesamiento dispuesto respecto de los imputados.

<sup>69</sup> En este sentido, como se ha citado en esta causa, ver Reg. N° 226/2006 de la Sala “B” de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, citado en el Reg. N° 492/2014 de aquélla, entre muchos otros. En sentido similar, Regs. Nros. 116/2013, 99/2017 y los allí citados, entre muchos otros, de la Sala “B” aludida y, en el mismo sentido, Regs. Nros. 674/04 y 27/2015 de la Sala “A” del mismo tribunal de alzada.



respecto de todos los aspectos que puedan vincularse con aquellos actos administrativos que sustenten acusaciones delictivas.

En definitiva, no resulta relevante que en sede administrativa se haya efectuado la determinación de la deuda con relación a Marcelo LIOTTI, pues -en este juicio- debidamente se comprobó que Liliana RAMÍREZ intervino -junto con el nombrado- en los hechos de evasión que se juzgan.

En función de todo lo expuesto en el punto anterior, entiende el suscripto -de conformidad con lo sostenido por el acusadores- que Marcelo Julián LIOTTI y Liliana Delfina RAMÍREZ resultan ser coautores penalmente responsables (art. 45 del Código Penal) del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones destinados a la seguridad social, conforme las previsiones del art. 7 de la ley 24.769, en el que encuadran todos los períodos fiscales que conforman el objeto procesal de las actuaciones, a excepción del período diciembre de 2014, que se encuadra en el art. 5° de la ley 27.430.

Al respecto, cabe señalar que no se advierten causales de justificación o de inculpabilidad que tornen lícitas o irreprochables las conductas de los imputados; por lo tanto, corresponde afirmar también la antijuridicidad y culpabilidad de sus comportamientos.

En ese sentido, resulta menester señalar que, en el presente caso, los montos evadidos superan las condiciones objetivas de punibilidad establecidas en las disposiciones legales en las que fueron encuadradas. En tal sentido, cabe recordar que las conductas investigadas en autos dieron motivo a la correspondiente determinación de la deuda realizada por la AFIP (conf. art. 18 ley 24.769), a partir de la cual se determinó el perjuicio fiscal por montos superiores a dicha sumas; siendo que, como fue específicamente tratado en esta sentencia, la determinación de oficio realizada oportunamente por el organismo recaudador no solo se compadece con las demás pruebas producidas o incorporadas al juicio, sino que incluso fue avalado por el estudio pericial efectuado como medida de instrucción suplementaria (y oportunamente incorporado al debate).

#### **IV. Graduación de la pena:**

En orden a las sanciones a imponer por esa conducta, corresponde señalar que -en el debate- los representantes de la querella





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

solicitaron que se imponga a los imputados la pena de 3 años y 6 de prisión de efectivo cumplimiento (art. 26 del Código Penal).

Para ello, consideraron que no existían circunstancias atenuantes de la conducta ilícita reprochada a los imputados ya que, según indicaron, *“... los imputados mostraron su desinterés total en modificar su conducta ya que el discurrir de la audiencia solo hizo que se corrobore que ambos imputados continuaron teniendo como empleados a monotributistas pese ya conocer la existencia de la causa. Pese a haber tenido innumerables formas de saldar su deuda con el fisco, optó por no hacerlo, continuando al día de hoy, adeudando lo evadido”*; al tiempo que consideraron, para sustentar su pedido de pena, que la *“... conducta delictiva fue llevada a cabo por un largo período de tiempo lo cual evidencia una constante en el accionar de los imputados... sin importarle ni tomar en cuenta, el efecto dañoso de la misma. A ello hay que agregar el agravante del tipo penal establecido en el inc. a del art. 8 de la ley 27469 cuyo monto evadido supera el monto de 400.000 pesos. Esto debería ser tenido en cuenta como agravante del accionar evidenciado”*.

Por su parte, en ocasión de formular su alegato, el Sr. Fiscal General solicitó que se imponga a los imputados una pena de 3 años de prisión cuyo cumplimiento podría ser dejado en suspenso (art. 26 del Código Penal); como así también la obligación de pagar una multa de noventa mil pesos (\$90.000) para cada uno de ellos, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 22 bis del Código Penal.

Para sustentar esa posición, el Sr. Fiscal General indicó que *“... conforme las pautas establecidas en los arts. 40 y 41 del C.P. se han valorado: 1) la naturaleza de la acción y los medios empleados, 2) la extensión del daño: las evasiones del pago de aportes y contribuciones por los períodos junio de 2013 y diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, los cuales ascienden a la suma total de \$ 4.700.253,83 por esos períodos; 3) la participación en el hecho en carácter de coautores; 4) como atenuantes: las condiciones y antecedentes personales de los imputados, conforme surge de los certificados remitidos por el Registro Nacional de Reincidencia de fecha 13/9/2022 los imputado no registran antecedentes computables; 5) el extenso trámite del proceso, su buen comportamiento procesal, su reinserción social y la normal impresión causada en la oportunidad del debate”*.



#32859976#347198392#20221027213627864

Finalmente, cabe tener en consideración que las defensas, en oportunidad de realizar su alegato, expresamente mencionaron que -de no tener acogida favorable ninguno de los planteos absolutorios formulados- solicitaban que la sanción no exceda del mínimo legal previsto (esto es, de 2 años de prisión), cuyo cumplimiento debía ser dejado en suspenso; o, en todo caso, que no exceda de los 3 años de prisión de cumplimiento en suspenso (en el caso de la defensa de LIOTTI).

Para sustentar esas posiciones, la defensa de RAMÍREZ consideró -en primer lugar- *“la escasa entidad del delito”*. Al respecto, manifestó que debía tenerse en cuenta que *“la norma establece un mínimo de 200.000 pesos”* y que *“En algunos de nuestros períodos, apenas se supera ese monto (en el peor de los casos es del doble del mínimo, 400.000)”*; por lo que consideró que, en el caso, *“no hay un delito que sea grave y que amerite subir, como sostiene la querella, a casi el doble, el monto de la pena”*. Asimismo, consideró que debía tenerse en cuenta que, en el caso, se comprobó que *“se pagaban los monotributos”* (lo que tiene un componente de carga tributaria y de obra social), por lo que dicha cuestión debía ser considerada a los fines de evaluar la escasa afectación al bien jurídico en el caso concreto.

Además, la defensa de RAMÍREZ entendió -a diferencia de lo considerado por los letrados de la querella- que sí existían circunstancias atenuantes respecto de su asistida. Sobre ello, indicó: *“En primer lugar, las condiciones personales de su asistida; es una persona cercana a los 50 años, de demostrada capacidad laboral, que ha trabajado toda su vida, es una persona sin antecedentes penales, de costumbres ordinarias, comunes a las nuestras, no hay una expectativa de que pueda seguir delinquirando, no es una persona “peligrosa” (aunque esto tampoco pueda constituir hoy en día un parámetro válido para agravar la penal). Es decir, es una persona que no tiene ningún sentido de que se le imponga una pena de efectivo cumplimiento como ha sostenido la querella, no sé cuál sería la ventaja de que la Sra. Ramírez estuviera presa; le parece que sería mucho más deformante incluso de ser así. Es la primera causa que su asistida tiene, como dijo. En todo momento los imputados estuvieron a derecho, participaron de todas las audiencias de debate, estuvieron a disposición, que cada vez que tuvieron que ausentarse pidieron permiso. Es decir, tampoco hay elementos de que pueda haber algún comportamiento elusivo*







## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

*del accionar de la justicia o que sea necesaria su reclusión. Estas cuestiones atenuantes también nos permiten demostrar que, de existir condena, no correspondería apartarse del mínimo”.*

Asimismo, en ocasión de formular su alegato, la defensa de LIOTTI entendió que -en el caso- se había verificado una “*escasa afectación del bien jurídico tutelado*”; circunstancia que se encontraba convalidada por el Ministerio Público Fiscal en esta causa, pues así lo había considerado en ocasión dictaminar respecto del pedido de suspensión del juicio a prueba formulado por la anterior defensa de los imputados (circunstancia que también fue considerada por la defensa de RAMÍREZ). Además, mencionó que debía considerarse la falta de antecedentes penales del nombrado (a partir de lo cual, según indicó, “*se advierte que la conducta de su asistido ha sido siempre ajena al accionar ilícito. Da cuenta de una vida arreglada a derecho, con respeto y alejado a los problemas con la ley*”); como así también mencionó que debían considerarse “*las circunstancias particulares que atañen a la vida familiar y profesional de su asistido*” y que LIOTTI “*fue una persona que siempre ha estado a derecho durante el extenso proceso penal*”.

Sentado ello, corresponde señalar que -a fin de graduar la pena que corresponde imponer a los imputados- debe tenerse en cuenta la escala penal que contempla la figura penal prevista para sancionar el delito de evasión de los aportes y contribuciones destinadas al sistema de la seguridad social (esto es, de 2 a 6 años de prisión), en función de lo que disponen los artículos 40 y 41 del Código Penal.

De acuerdo a ello, cabe adelantar que se entiende ajustado a derecho imponer a los imputados una pena de tres años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso.

Por un lado, como circunstancia agravante se considera la multiplicidad de períodos en los cuales se produjo la evasión -lo que denota la extensión y reiteración en el tiempo del accionar delictivo-; como así también la sofisticada maniobra diagramada y ejecutada por los imputados para simular y engañar a las autoridades respecto de la verdadera calidad de dependientes de sus trabajadores (esto es, la sofisticación en los medios empleados para cometer los delitos). Por ello, se considera que el monto mínimo de la pena de prisión prevista en la escala aplicable (2 años de prisión) no resulta proporcional a la magnitud de los hechos y a la



culpabilidad demostrada en el presente caso por parte de los imputados LIOTTI y RAMÍREZ.

Sin embargo, tal como señalaron las defensas, advierte el suscripto que sí existen circunstancias atenuantes en el caso, que inducen al suscripto a considerar que la pena propuesta por la querella resulta desproporcional para el caso concreto. En concreto, deben considerarse como tales la carencia de antecedentes de los imputados (lo cual demuestra que sus asistidos -que tienen 58 años, en el caso de LIOTTI y 43, en el caso de RAMÍREZ- no han cometido otras conductas contrarias a la ley penal a lo largo de sus vidas); la correcta impresión personal obtenida de los enjuiciados durante el debate (en concreto, los imputados se mantuvieron conectados atentamente a todas las audiencias de juicio, y solicitaron autorización para retirarse cuando necesitaban hacerlo por compromisos laborales); y su actitud posterior al hecho, en cuanto a que siempre estuvieron a derecho y comparecieron ante los llamados de los órganos judiciales que intervinieron en el caso.

Por todo lo expuesto, se considera proporcional al contenido de injusto de los hechos y a la culpabilidad demostrada en el presente caso, imponer a los imputados la pena de tres años de prisión, cuyo cumplimiento será dejado en suspenso, toda vez que se encuentran cumplidos los presupuestos establecidos en el art. 26 del Código Penal; sin que sea necesario aplicar una sanción de efectivo cumplimiento respecto de los nombrados, tal como señalaron las defensas de los imputados.

Finalmente, de conformidad con lo solicitado por la Fiscalía, se impondrá a los imputados una pena de multa de noventa mil pesos, de acuerdo a las previsiones del art. 22 bis del Código Penal, por el que se establece que: *“Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté sólo en forma alternativa con aquélla. Cuando no esté prevista, la multa no podrá exceder de noventa mil pesos”*.

Como puede observarse del propio texto legal, para aplicar esta sanción deviene necesario que el delito por el que se dicta la condena se encuentre reprimido con pena privativa de la libertad y que, además, no contemple la multa como pena conjunta. Ambas situaciones se verifican en el caso.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

Asimismo, surge del texto legal que el presupuesto para su imposición es la actuación con “ánimo de lucro” de parte de la persona que resulte responsable del delito. Respecto a ello, la doctrina ha entendido que por ánimo de lucro se entiende el propósito de obtener un beneficio económico -es decir cualquier ventaja de orden patrimonial-, con que sea necesario que aquél se logre<sup>70</sup>. En el presente caso, como señaló el Sr. Fiscal General, no caben dudas de que los hechos de evasión que aquí se juzgaron fueron cometidos por los imputados con un indudable ánimo de lucro (esto es, para dejar de pagar los aportes y contribuciones que correspondía ingresar respecto de cada uno de los trabajadores que prestaban servicios bajo relación de dependencia en su empresa; y así quedarse con ese dinero); animosidad que no se encontró motivada, según se advierte, en ningún tipo de necesidad económica de los imputados, pues no caben dudas de que tenían a su alcance los medios necesarios para sustentar sus ingresos en forma lícita (dirigían un negocio que contaba con sus propios talleres fabriles para producir los productos y más de 20 locales comerciales donde se comercializaban).

De acuerdo a ello, es que también corresponde imponer la sanción prevista por el art. 22 bis del Código Penal<sup>71</sup>.

### **V. Extracción de testimonios.**

Por último, cabe mencionar que, a entender del suscripto, no corresponde hacer lugar a la extracción de testimonios que fuera solicitada por el Sr. Fiscal General de juicio en ocasión de formular su alegato (para que se investigue la presunta participación de Darío Joaquín Meinet y Jérica Ramírez en los hechos que aquí se juzgaron).

Más allá de que haya podido acreditarse que Darío Joaquín Meinet y Jérica Ramírez ostentaban un rol de coordinación y cierta relevancia dentro de la administración de la empresa (ya que se encontraban “por debajo” de los dueños -Liliana RAMÍREZ y Marcelo LIOTTI- y “por encima” del resto de los trabajadores, a quienes transmitían

---

<sup>70</sup> Andrés José D’alessio (Director) y Mauro A. Divito (Coordinador) en “Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado”, 2º edición actualizada y ampliada, Tomo I, Parte General, Arts. 1 a 78, La Ley, pág. 215.

<sup>71</sup> En sentido similar se pronunció el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº II de la Ciudad de Córdoba, en la causa “MAGGIO, Juan José y MONTERO, Enrique Atilio s/ apropiación indebida de tributos - art. 6 de la ley 24.769” (sentencia de fecha 03/08/2011).



las directivas que recibían de Marcelo LIOTTI o de Liliana RAMÍREZ, tal como declararon los testigos), los nombrados no dejan de ser meros empleados en relación de dependencia de la empresa; motivo por el cual se entiende que las conductas que pudieron haber desarrollado en el marco del funcionamiento de la actividad se encontraron limitadas al cumplimiento de las directivas que impartían los responsables de la empresa (esto es, de Marcelo LIOTTI y Liliana RAMÍREZ).

Por ello, es que -a entender del suscripto- no corresponde hacer lugar a la extracción de testimonios requerida por la Fiscalía, sin perjuicio de quedar las presentes actuaciones a entera disposición de las partes a los fines que -de considerarlo pertinente- puedan realizar las presentaciones que estimen corresponder ante el órgano respectivo.

Así las cosas, tras haberse valorado las pruebas recibidas y los actos del debate, conforme a las reglas de la sana crítica, el magistrado actuante;

**RESUELVE:**

**I. CONDENAR a Marcelo Julián LIOTTI**, de las demás condiciones personales mencionadas en la presente, por considerarlo **coautor penalmente responsable del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema único de la seguridad social** de las personas que trabajaron como empleadas en relación de dependencia en los talleres fabriles y en los locales comerciales de la unidad de explotación que operó bajo la denominación “ASH” (*Argentinian Shoes*), dedicados a la producción y venta de calzado femenino, por los períodos mensuales de junio de 2013, diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, todos inclusive -16 hechos que concurren en forma real entre sí- (arts. 40, 41, 45 y 55 del Código Penal; art. 7 de la ley 24.769 -según reforma de la ley 26.735- respecto de los períodos junio de 2013, diciembre de 2013, febrero de 2014 a noviembre de 2014 y enero a marzo de 2015; y art. 5 de la ley 27.430 respecto del período diciembre de 2014), a las siguientes penas:

**a) TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN**, cuyo cumplimiento se deja en suspenso (art. 26 del Código Penal);

**b) MULTA de noventa mil pesos (\$90.000)**, cfr. art. 22 bis del Código Penal.





## Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 1  
CPE 1584/2014/TO2

**II. CONDENAR a Liliana Delfina RAMÍREZ**, de las demás condiciones personales mencionadas en la presente, por considerarla **coautora penalmente responsable del delito de evasión simple del pago de los aportes y contribuciones correspondientes al sistema único de la seguridad social** de las personas que trabajaron como empleadas en relación de dependencia en los talleres fabriles y en los locales comerciales de la unidad de explotación que operó bajo la denominación “ASH” (*Argentinian Shoes*), dedicados a la producción y venta de calzado femenino, por los períodos mensuales de junio de 2013, diciembre de 2013 y febrero de 2014 a marzo de 2015, todos inclusive -16 hechos que concurren en forma real entre sí- (arts. 40, 41, 45 y 55 del Código Penal; art. 7 de la ley 24.769 -según reforma de la ley 26.735- respecto de los períodos junio de 2013, diciembre de 2013, febrero de 2014 a noviembre de 2014 y enero a marzo de 2015; y art. 5 de la ley 27.430 respecto del período diciembre de 2014), a las siguientes penas:

**a) TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN**, cuyo cumplimiento se deja en suspenso (art. 26 del Código Penal);

**b) MULTA de noventa mil pesos (\$90.000)**, cfr. art. 22 *bis* del Código Penal.

**III. IMPONER LAS COSTAS DEL PROCESO** a los condenados, habida cuenta el resultado del juicio (arts. 29 del C.P. y 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.N.).

**IV. NO HACER LUGAR A LA EXTRACCIÓN DE TESTIMONIOS** requerida por la Fiscalía (**a efectos que se investigue la presunta participación de Darío Joaquín Meinet y Jérica Ramírez en los hechos que aquí se juzgaron**), sin perjuicio de quedar las presentes actuaciones a entera disposición de las partes a los fines que -de considerarlo pertinente- puedan realizar las presentaciones que estimen corresponder ante el órgano respectivo.

**V. TENER PRESENTE** las reservas efectuadas por las partes.

Una vez firme, procédase conforme lo establece el artículo 501 del Código Procesal Penal de la Nación respecto de la pena de multa impuesta, efectúense las comunicaciones de rigor (al Registro Nacional de Reincidencia, a la Policía Federal Argentina y a la AFIP-DGI), provéase



cuanto corresponda en orden a los efectos y documentación vinculada a las actuaciones y, fecho, archívese la presente causa.

IGNACIO CARLOS FORNARI  
JUEZ DE CÁMARA

Ante mí:

FRANCISCO AGUSTÍN LARRABURE  
SECRETARIO

